



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidenta Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año II	Ciudad de México, miércoles 5 de abril de 2017	Sesión 23

SUMARIO

ASISTENCIA 11

ORDEN DEL DÍA 11

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 29

COMUNICACIONES OFICIALES

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite el Informe de Actividades 2016, así como el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente al año 2017. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento. 37

De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen

- de manera oportuna los pagos pendientes, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes que permita sustentar y gestionar los altos costos de insumos que enfrentan los productores. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento. **38**
- Por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, así como de Procuraduría General de la República, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que, en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento. **40**
- Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que utilice mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento. **41**
- Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que publique, por los medios a su disposición, la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”, desde su creación a la fecha. Se remite al promovente. **49**
- De la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, mediante la cual remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
- Por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del “Día Mundial sin Automóvil”, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias. Se remite a la Comisión de Junta de Coordinación Política, para su conocimiento. **50**
- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico transmitido por vector, en dicha entidad federativa. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento. **50**
- Por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ejercicio de sus atribuciones legales, formulen la respectiva coordinación y colaboración de cada uno con las autoridades correspondientes, en materia de Telecomunicaciones, con la finalidad de que se avance en la implantación de nuevos puntos de acceso gratuito a internet en lugares públicos, con el evidente beneficio social que ello conlleva, privilegiando, de ser posible, que los nuevos puntos se instalen estratégicamente en los centros de vivienda con mayor densidad poblacional y menor

capacidad económica. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.	52
---	----

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, con la que remite constatación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar a las mujeres en zonas marginadas, el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.	52
---	----

AGENDA POLÍTICA

Comentarios relativos a las recientes resoluciones judiciales en el estado de Veracruz, a cargo de los grupos parlamentarios. Para referirse al tema hace uso de la voz:

–La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de NA.	55
–El diputado Gonzalo Guizar Valladares, del PES.	56
–La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de MC.	57
–El diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena.	58
–La diputada Lia Limón García, del PVEM.	59
–La diputada Maricela Contreras Julián, del PRD.	60
–La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del PAN.	61
–La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del PRI.	62

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.	66
---	----

LEY DE AEROPUERTOS Y LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.	73
---	----

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen. 83

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 336 Bis, 337 y 338 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen. 87

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre, en nombre propio y de diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen. 91

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 96

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 103

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. 106

VOLUMEN II

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
LOS MUNICIPIOS

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5o. y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.	113
--	-----

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

A discusión el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.	118
---	-----

Para fijar la posición de su grupo parlamentario hace uso de la voz:

–La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del PAN.	129
--	-----

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.	130
--	-----

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

A discusión el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.	130
---	-----

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.	139
--	-----

CÓDIGO PENAL FEDERAL

A discusión el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.	139
--	-----

Para fundamentar el dictamen y presentar una propuesta de modificación en nombre de la Comisión, interviene:

–El diputado Ricardo Ramírez Nieto, del PRI. 146

Se acepta la propuesta de modificación. 152

A discusión en lo general, participa:

–El diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del PAN, a favor. 152

–El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del PRI, desde la curul. 153

–El diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD, desde la curul. 153

–El diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del PVEM, a favor. 154

–El diputado Salvador Zamora Zamora, de MC, a favor. 154

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. 156

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

A discusión el dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático. 156

Para fundamentar el dictamen y presentar una propuesta de modificación en nombre de la comisión, interviene:

–La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del PAN. 165

Se acepta la propuesta de modificación. 168

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, interviene:

–El diputado Jesús Rafael Méndez Salas, de NA. 168

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa a Senado, para sus efectos constitucionales. 169

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

A discusión el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación. 169

Para fundamentar el dictamen, participa:

–La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD. 177

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. 178

DICTÁMENES A DISCUSIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO

A discusión 32 dictámenes con puntos de acuerdo. Aprobados, comuníquense. 178

SOBRE LA RESCISIÓN O REVOCACIÓN DE CONCESIONES, CONTRATOS, PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS OTORGADOS A LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT, POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN SU CONTRA Y DONDE ESTÁN INVOLUCRADOS SERVIDORES PÚBLICOS

A discusión el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con punto de acuerdo sobre la rescisión o revocación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos. 179

Para fijar la postura de su grupo parlamentario hace uso de la palabra:

–El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES. 213

–El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de NA. 214

–El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC. 214

–La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena. 215

–La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD, desde la curul. 216

–La diputada Daniela de los Santos Torres, del PVEM. 217

–El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del PRD. 218

–La diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del PAN. 219

–El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI. 220

Aprobado, comuníquese. 222

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados. **222**

VOLUMEN III

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.. **227**

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a la diputada que representará a la Cámara de Diputados ante el Consejo de Premiación Nacional de Protección Civil. Se aprueba. Comuníquese. **355**

Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un Grupo de Trabajo en materia electoral. Se aprueba. Comuníquese. **356**

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes.. **357**

CLAUSURA Y CITA **357**

RESUMEN DE TRABAJOS..... **358**

DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESIÓN. **359**

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

– De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de

la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria (en lo general y en lo particular).	363
– De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México (en lo general y en lo particular).	369
– De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan el 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal (en lo general y en lo particular)..	375
– De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7o., y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático (en lo general y en lo particular)..	381
– De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación (en lo general y en lo particular)..	387

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 5 de abril de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.



LXIII LEGISLATURA

**Presidencia de la diputada
María Guadalupe Murguía Gutiérrez**

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy buenas tardes. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 278 diputadas y diputados. Por lo tanto, diputada presidenta, hay quórum.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 12:08 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 5 de abril de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Remite el Informe de Actividades 2016; así como el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y

Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente al año 2017.

De la Secretaría de Gobernación

Remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos a las recientes resoluciones judiciales en el estado de Veracruz, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley General de la Juventud, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 43, y adiciona un artículo 29 Bis a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sus-

crita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbio-la, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofia Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 50. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvencción del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la

diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vé-

lez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 80., 90. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón

Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfías, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por dipu-

tados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo décimo transitorio del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del dipu-

tado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.

Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado David Mercado Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Batallas de Celaya”, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 166 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona y deroga el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. y adiciona un 15 Décimo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a

cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Trasplantes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Encuentro Social.

De decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año, como “Semana Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldivar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículo 6o., 13, 14, 15 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 5o. y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ar-

mando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 61 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 15, 41 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Na-

dia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de medio ambiente y desarrollo urbano sostenible, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 44, 90 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del dipu-

tado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 13, 112 y 159 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 13, 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 112, 160 y 166 Bis 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Den-

nis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Declaratoria de publicidad de dictamen

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, para que evalúen la posibilidad de construir dentro de sus instalaciones espacios deportivos, así como a las 32 entidades federativas a continuar con la creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Fiscalías Generales y/o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, así como a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a efecto de difundir y promover la impartición de los cursos de capacitación a Ministerios Públicos involucrados en Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplantes.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que evalúe la pertinencia de efectuar la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado de Campeche, y por otra parte se exhorta a la SE, CRE y CFE para que se elabore un estudio que verse sobre el aporte a la competitividad en el país, por parte de las tarifas eléctricas que se aplican en cada entidad federativa.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Estado mexicano, a hacer efectivos y respetar los derechos político-electorales de las mujeres en el estado de Oaxaca, particularmente en los casos de los municipios de San Martín Peras y San Miguel Peras respectivamente.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Turismo se amplíe la difusión con relación al Registro Nacional de Turismo.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la protección consular de los connacionales en Estados Unidos de América.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a fortalecer e impulsar acciones tendientes a la conservación y preservación de la vaquita marina.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer e impulsar por la Conafor, acciones para garantizar que, a partir del Ejercicio Fiscal de 2017, los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se destinen a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de las entidades federativas solicitantes de ese cambio.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a evaluar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de todas las estaciones de monitoreo con el objeto de contar con herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y así atender oportunamente los problemas de salud de la población.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

y al Gobierno de la Ciudad de México, para efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, especie que se encuentra en peligro de extinción.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat para efectuar las funciones de protección y conservación del jaguar.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que convoque a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en las que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a diversas dependencias de la Administración Pública, para concluir el proceso señalado en el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a implementar estrategias coordinadas de movilidad encaminadas a garantizar la seguridad peatonal y ciclista de la Ciudad de México.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que, bajo el principio de la progresividad de los derechos y atendiendo el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, se mejoren las condiciones de operación en los hospitales pediátricos a su cargo.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que se establezcan las medidas necesarias a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro establecer un plan emergente de mantenimiento

mayor en todas sus líneas de este sistema de transporte público.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas locales a establecer acciones en pro de los hijos de las familias que sean deportadas de Estados Unidos, ante las medidas discriminatorias de su nuevo gobierno.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSA de Chiapas a establecer con autoridades federales y los trabajadores del ramo de salud de la entidad una mesa de trabajo para abordar el tema de retenciones injustificadas de salarios y malversación de fondos de jubilación y vivienda.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de Salud para que vigilen de manera puntual que el procedimiento quirúrgico conocido como “cesárea” se lleve a cabo de manera responsable.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que realice campañas de educación, a fin de que se dé a conocer la enfermedad vascular cerebral isquémica, así como la elaboración de la norma oficial mexicana en la materia.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, garantizar el acceso efectivo, oportuno a servicios médicos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de continuar realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia doméstica y de pareja contra mujeres y hombres.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades federales y locales para la gestión de recursos y ejecución de las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa “Parral” y del río “Parral”, en Chihuahua.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales para asegurar que en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y a las actividades productivas.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas, a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las normas secundarias por las que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima publicidad.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo sobre la rescisión o revocación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Contraloría del Estado de México a poner a disposición pública la información relativa a las promociones de responsabilidad resueltas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2014 respecto del programa “Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informe sobre el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y sobre los planes de contingencia para los usuarios.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Judicatura Federal, a fin de que actualice la publicación de sus obligaciones de transparencia con respecto al año 2006.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que realicen el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a que lleve a cabo diversas acciones, derivado del asesinato del ciudadano Pedro Alberto Vega Barrañón, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la CDMX, a que se lleve a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera de Xochimilco, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Se-

siones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

**Presidencia de la diputada
María Guadalupe Murguía Gutiérrez**

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia doscientos sesenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

- Por la que comunica la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos segundo, sexto, y décimo de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por los diputados Azul Etcheverry Aranda, Jorge Carlos Ramírez Marín y César Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.
- Por la que comunica que recibió Acuerdo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que da por atendida una proposición con punto de acuerdo. De enterado, se tiene por atendida, y se actualizan los registros parlamentarios.

b) De la diputada y el diputado:

- Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para

los Estados de la Frontera Norte, presentada el tres de noviembre de dos mil diecisiete.

- Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarenta de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada el siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas las iniciativas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Partido Acción Nacional, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

d) De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos, oficio con el que remite el Informe Anual de los costos y gastos devengados de Exploración y Extracción dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite:

- Información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de dos mil diecisiete, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de dos mil dieciséis, así también la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

- Documentos en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre:

- Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho.
- Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año dos mil dieciocho: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;
- Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y
- La enumeración de los programas prioritarios y sus montos

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

f) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite:

- Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
- El Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mil dieciocho. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
- Remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:
 - Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a informar sobre la desincorporación de los ingenieros azucareros, y sobre la ejecución de recursos en la FE-SA para realizar dicha operación. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
 - Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuáles han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto; así como fortalecer las estrategias encaminadas a disminuir estos delitos. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar las acciones pertinentes a fin de que México continúe promoviendo ante el seno de Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui, así como solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), y amplíe las atribuciones de dicha misión a la protección de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R.025-SCFI-dos mil quince, en igualdad laboral y no discriminación. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que las comunidades indígenas de las zonas más pobres del país sean beneficiarias del “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”. Se remite al promovente.

g) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para enfrentar los efectos del cambio climático. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

h) Del Congreso del estado de San Luis Potosí, con la que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que legislen en materia de paridad de género en las candidaturas a gobernador para que sean aplicables en el próximo proceso electoral. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas las diputadas y los diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena; Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Antonio Neblina Vega, Brenda Velázquez Valdez, ambos del Partido Acción Nacional; y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.

A solicitud del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, la Presidenta invita a la Asamblea ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio en memoria de Giovanni Sartori, profesor e investigador en el campo de la Ciencia Política, especializado en el estudio comparativo de la política.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

- Por el que se reforma al artículo noventa y tres de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
- Por el que se adiciona un párrafo al artículo diecinueve de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
- Por el que se reforman los artículos segundo, diecinueve, veinte, veintidós, y veinticuatro de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
- Por el que se adiciona el artículo veintinueve fracción novena bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.
- Por el que se reforma el artículo setenta y siete de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.
- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.
- Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Desde su curul la diputada Jacqueline Nava Mountt, del Partido Acción Nacional, invita a participar en las activi-

dades físicas programadas hoy y mañana en la Cámara de Diputados.

j) Del Congreso del estado de Nuevo León, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y de la Ley de Migración. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

k) Del senador Héctor Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León y a los municipios del área metropolitana de Monterrey, para que de forma conjunta, formalicen la creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Alfredo Basurto Román, de Morena; Mirna Isabel Saldivar Paz, de Nueva Alianza; Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Partido Verde Ecologista de México; y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta propuesta de modificación; una vez aceptada por el proponente, por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura de la misma que en votación económica se acepta. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo, con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Abdiel Pineda Morín, y suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en el estado de Baja California y en toda la República, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalis-

mo, al fallar en las controversias que les presenten, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena;

A las doce horas con cincuenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ocho diputadas y diputados.

Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde Ecológico de México;

La Presidenta agradece y saluda la presencia en el Salón de Sesiones, de la delegación de legisladores del Congreso de la Nación Argentina, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Oscar Carrillo, y Norma Durango, así como los diputados: Ana Laura Martínez, Gustavo Fernández Mendía, Alejandro Echegaray, y Carlos Selva; acompañados por el excelentísimo señor Daniel Chuburu, Embajador de la República Argentina en México; quienes participaron en la Tercera Reunión Interparlamentaria México-Argentina.

David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional; y José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, quien presenta propuesta de modificación; una vez aceptada por el proponente, por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura de la misma que en votación económica se acepta. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo, con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, ejecutar diversas acciones en el contexto de la construcción de la presa el Zapotillo. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Evelyn Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecológico de México; Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional; y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Partido Revolucionario Institucional.

En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo con una modificación propuesta por el promovente, y aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar a la opinión pública el ejercicio de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil quince anexo treinta, destinados al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en el estado de Sinaloa. El proponente solicita a la Presidencia se de lectura a su propuesta de modificación, y por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura de la misma. En votación económica se considera de urgente resolución, y de la misma manera se acepta la modificación presentada. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; y J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Justicia, por el que se reforman los artículos trescientos treinta y cinco, trescientos treinta y seis, y trescientos treinta y siete del Código Penal Federal.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo sesenta bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

c) De Trabajo y Previsión Social, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y ocho de la Ley Federal de Trabajo.

d) De Ciencia y Tecnología, por el que se reforman y adicionan los artículos quinto y séptimo de la Ley de Ciencia y Tecnología.

e) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se adicionan las fracciones trigésima primera, y trigésima segunda, al artículo veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dos primeros dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión Trabajo y Previsión Social.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión, posteriormente se discuten y votan en el siguiente orden:

a) Por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de maternidad y lactancia. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Corral Mier, del Partido Acción Nacional; y Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutido en lo general. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional. En votación nominal por trescientos noventa y nueve votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

Para presentar propuestas de modificación se concede el uso de la palabra a la diputada y a los diputados:

- Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre del diputado Jesus Sesma Suárez, ambos del Partido Verde Ecologista de México, a los artículos: ciento setenta, fracción segunda, de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admi-

ten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

- Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, al artículo ciento setenta, fracciones segunda y cuarta, de la Ley Federal del Trabajo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

- Juan Romero Tenorio, de Morena; a los artículos: ciento setenta, fracciones segunda y cuarta, de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla.

- Roberto Cañedo Jiménez, de Morena, al artículo veintiocho, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos un votos a favor; ochenta y tres en contra; y nueve abstenciones, se aprueba en lo particular los artículos: ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de maternidad y lactancia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

- b) Por el que se reforma la fracción vigésima séptima bis del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo veintiocho bis a la Ley Fe-

deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de permisos de paternidad. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferrero Velazco, del Partido Encuentro Social;

**Presidencia del diputado
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.**

Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena;

**Presidencia de la diputada
María Guadalupe Murguía Gutiérrez.**

Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Moran, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Cambranis Torres, del Partido Acción Nacional; y Pedro Alberto Salazar Muciño, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional. En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, a nombre del diputado Jesus Sesma Suárez, ambos del Partido Verde Ecologista de México, adición de una fracción vigésima séptima ter, del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo; y al artículo veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan. En votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo particular. En votación nominal por trescientos cinco votos a favor; veintidós en contra; y diecisiete abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción vigésima séptima bis del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo veintiocho bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de permisos de paternidad. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena. La Presidenta hace aclaraciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes en Comisiones. De enterado. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

- a) De Justicia, por el que adiciona un último párrafo al artículo cuarto, y se reforma el párrafo segundo del artículo treinta y seis, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
- b) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se reforman los artículos doce y veintiséis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

De conformidad con los artículos ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

- Integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a fin de analizar y prorrogar indefinidamente la vigencia del Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en beneficio de la industria acerera del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
- Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las investigaciones en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y las empresas Smart Bussines Consulting Sima, S.A. de C.V y Bols-

hoye, así como al origen y destino de los recursos que le fueron entregados a la organización “Juntos Podemos”. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

- Norma Rocío Nahle García, de Morena, relativo a la problemática social y ambiental derivada del derrame de hidrocarburos en el municipio de Las Choapas, Veracruz, acontecido en marzo del año en curso. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

- María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los Gobiernos de las treinta y dos entidades federativas y sus municipios, para que apoyen sus programas y centros de atención a niños y niñas con alguna condición del espectro autista. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

- Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que conminen, recomienden y prevengan a la Asociación de Equipos Profesionales de Béisbol de la Liga Mexicana, A.C., que garantice y respete los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

- Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a garantizar la asistencia de traductores de lenguas indígenas en procesos judiciales. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

- Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos, a no subastar o vender las reservas territoriales de dicha entidad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que vigile que se cumpla con la normatividad vigente aplicable respecto del uso de los suelos y proteja la biodiversidad existente en los polígonos que comprenden las reservas territoriales de dicho estado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

- Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que deje de aplicar diversos artículos del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

- Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a que deje sin efecto el acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, que condena los adeudos anteriores al presente ciclo fiscal que se tuviera por concepto de impuesto predial, gastos de ejecución, multas y recargos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

- Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al análisis y renegociación del capítulo del Sector Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para incorporar al sector de pequeños productores y sus organizaciones. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

- Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar el cumplimiento de la normatividad correspondiente, para que se evalúe la suficiencia de los recursos aprobados para el proceso de formalización laboral contenidos en el anexo treinta del Presupuesto de Egresos de la Federación y se audite la oportunidad y cumplimiento de objetivos de dichos recursos, en particular los asignados para el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

- Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la integración, organización y funcionamiento de los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar el cumplimiento del principio de representatividad de las organizaciones sociales del sector rural. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

- Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena:

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a instruir las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con motivo del conflicto laboral acaecido en la unidad académica

mica de las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

— Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que ordene la ministración de la totalidad de los subsidios federales correspondientes al programa de Infraestructura dos mil dieciséis, en su vertiente “Ampliación y/o mejoramiento de la Vivienda” y cubra a la mayor brevedad con la deuda contraída con las instancias ejecutoras de los programas “Hábitat” y “Un Cuarto Más” en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

- Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que reintegre de manera inmediata la legal posesión del mercado San Lázaro a los locatarios integrantes del Fideicomiso 421-6 San Lázaro Tapo, repare los daños ocasionados por el desalojo injustificado que sufrieron el tres de abril de dos mil diecisiete y se abstenga de realizar cualquier acto que atente contra los fines previstos para dicha plaza. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

- Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a difundir, aclarar y proporcionar la documentación que justifique y compruebe las observaciones realizadas sobre las auditorías de inversiones físicas realizadas al proyecto Minatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadora de Azufre. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles cinco de abril de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa

sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

Continúe, por favor, la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimada diputada Murguía Gutiérrez:

El artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá presentar en marzo de cada año, al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe de actividades que contenga los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica correspondiente al año inmediato anterior; un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información, y el informe anual de actividades y el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el auditor externo.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, anexo al presente me permito remitir el Informe de Actividades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al año 2016.(1)

(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Asimismo, adjunto sírvase encontrar el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente a 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Doctor Julio Alfonso Santaella Castell (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-2761 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-387/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes que permita sustentar y gestionar los altos costos de insumos que enfrentan los productores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de abril de 2017.— El titular de la Unidad, Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la Oficina del C. secretario, referente a su atento Oficio número. SELAP/UEU311/2453/16 de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el Acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, anexo al presente me permito enviarle las respuestas que nos hicieron llegar la Coordinación Jurídica de ASERCA, mediante oficio núm. FOO.1400.017/2017 de fecha 3 de febrero de 2017; la Subsecretaría de Agricultura, con oficio núm. 300.-520/2017 de fecha 16 de febrero de 2017 y la Dirección de Enlace Interinstitucional de la Dirección General Adjunta de Programas Especiales de la Coordinación General de Ganadería con oficio núm. 116.03.02.-00023/2017 de fecha 22 de marzo de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Sagarpa.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.02.-041/2017, mediante el cual solicita comentarios al Punto de Acuerdo remitido por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el cual les fue turnado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Sagarpa para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes que subsistan al día 15 de diciembre de 2016, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus componentes, de tal suerte que ello permita sustentar y gestionar los altos costos de insumos que enfrentan los productores.

Al respecto, y por instrucciones del maestro Alejandro Vázquez Salido, director en jefe de Aserca, le comento que se ha tomado nota del contenido y finalidad del exhorto de

referencia, el cual se turnó a las áreas operativas de Aserca para su conocimiento y, en su caso, procedan en consecuencia.

Los programas de apoyo y sus componentes de años anteriores a cargo de Aserca estuvieron sujetos, entre otros ordenamientos, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a su Reglamento y al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como a las Reglas de Operación aplicables, emitidas por el titular de la dependencia que, por ser de carácter general, fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación, en las que se especifica la mecánica operativa para el trámite y otorgamiento de los subsidios a la población objetivo.

Cabe señalar que, con base en la normatividad en la materia, se cumplió de manera oportuna con los plazos internos establecidos para la recepción y trámites de los participantes del programa y sus componentes, a efecto de determinar quiénes de ellos resultaron elegidos por haber cumplido con los requisitos establecidos. Los pagos correspondientes se efectuaron conforme a disponibilidad presupuestal.

ASERCA tiene encomendado actualmente el Programa de Apoyo a la Comercialización y sus dos Componentes denominados: I. Incentivos a la comercialización y II. Promoción comercial y Fomento a las Exportaciones, publicado en el diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2016, también sujeto a los instrumentos normativos antes citados.

Sin otro particular, quedo de usted.

Ciudad de México, 3 de febrero de 2017.— Licenciada Adriana E. Padilla Velázquez (rúbrica), coordinadora jurídica.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Coordinación General de Enlace Sectorial Sagarpa.— Presente.

Hago referencia a su solicitud de opinión contenida en su oficio No.112.02.-042/2017, de fecha 9 de enero del 2017, referente al Punto de Acuerdo signado por la diputada Sha-

ron María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que tiene por objeto “exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna 105 pagos pendientes, que subsisten al día de hoy, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes, de tal suerte que ello permita sustentar y gestionar 105 altos costos de insumos que enfrentan 105 productores”.

Al respecto, hago de su conocimiento que esta subsecretaría de Agricultura está en proceso de regularizar los pagos pendientes de 105 compromisos contraídos, conforme se liberan 105 recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.— Ingeniero Sebastián Peña Maldonado (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de la Coordinación General de Enlace Sectorial.— Presente.

En atención a su No. Oficio 112.02.- 043/2017, de fecha 9 de enero del año en curso, en donde envía Punto de Acuerdo signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes, que subsistan al día de hoy, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes, de tal suerte que ello permita sustentar y gestionar los altos costos insumos que enfrentan los productores”, se emite lo siguiente:

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que los citados pagos están sujetos a las ministraciones que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, 22 de marzo de 2017.— Licenciada Fernanda Ruiz de Velazco Alcayaga (rúbrica), directora de Enlace Interinstitucional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-1769 signado por el Dip. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0244/2017 suscrito por el Dr. Eduardo Martínez Altamirano, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondas públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos .federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido del oficio SELAP /300 /333/17, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de febrero del año en curso, que en su parte resolutive señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Oficialía Mayor, comunicó a esta área a mi cargo que:

Al respecto, comunico a usted que la institución cuenta con un Consejo Editorial, cuya organización y funcionamiento se encuentran indicados en el acuerdo número A/004/2004 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de febrero de 2004.

En función de lo anterior, considerando la naturaleza de las necesidades planteadas por las áreas requirentes, se deberá someter a dictaminación del Consejo Editorial aquellos asuntos sobre los cuales esté facultado conocer.

En el mismo sentido, las áreas requirentes podrán considerar la viabilidad de atender el exhorto de la Secretaría de Gobernación, en cuyo caso y en el ámbito de sus facultades, esta Dirección General en su momento, estará en posibilidad de iniciar el procedimiento de contratación correspondiente al amparo de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Asimismo, hago de su conocimiento que en el caso particular del servicio de impresión, se realizaron contrataciones anticipadas para el ejercicio fiscal de 2017, por lo que a partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre del año en curso, se cuenta con un contrato por un monto máximo de 3 millones 820 mil pesos, incluye IVA.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1761 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/ DV/ 0404/ 2017 suscrito por el doctor Eduardo Martínez Altamirano, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría para que utilice mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al contenido del oficio **SELAP/ 300/ 314/17** de 10 de febrero, por el que se comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el jueves 9 de febrero del año en curso, que en su parte resolutive señala:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes federal, estatales y de la Ciudad de México, a efecto de establecer la coordinación con la Procuraduría General de la República, y con las Procuradurías de Justicia de los estados y de la Ciudad de México, para que utilicen mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal.

Con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comunicó a esta área a mi cargo que:

Al respecto, dicha solicitud se envió a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas que emite la opinión en tomo al acuerdo se nos ocupa:

I. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se estableció la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El **artículo lo.**, primer párrafo de la ley fundamental dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

Por su parte, el párrafo noveno del **artículo 4o.** de la Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del **interés superior de la niñez**, garantizando de manera plena sus derechos; asimismo, que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

II. La **Convención sobre los Derechos del Niño** establece en su artículo 3o., párrafo primero, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el **interés superior del niño**.

III. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada la LXXXIII/2015 (10a.), Materia Constitucional, Décima Época, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1397, número de registro 2008546, epígrafe Interés superior del menor como elemento de interpretación en el ámbito jurisdiccional, ha interpretado que, el Interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad.

IV. El **Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018** en su Meta Nacional **México en paz**, Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradi-

cación de la discriminación, Estrategia 1.5.2. **Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación**, señala como línea de acción prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que quienes la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional.

V. El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF la **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**, de la cual resulta oportuno destacar lo siguiente: De acuerdo con su artículo 1o. tiene por objeto entre otros, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Además, establece que el **interés superior de la niñez** deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; asimismo, que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

También, que cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

El **artículo 47** de la ley en cita dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

- El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual.
- La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad.

- Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables.

- El tráfico de menores.

- La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Además, prevé que las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia; asimismo, que las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos anteriores; y que las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este numeral para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El **artículo 121** establece que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación y las entidades federativas contarán con **Procuradurías de Protección**, las cuales, en el ejercicio de sus funciones, podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.

Para la debida determinación, 'coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud., de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El **artículo 122** de la ley en cita, establece las atribuciones de las **Procuradurías de Protección**, entre las cuales se destacan por su relación con el tema, las relativas a las fracciones II, V Y VI, a saber:

- Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos

judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás

- Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes.

- Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código de Procedimientos Penales, las siguientes:

- a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.

VI. De acuerdo con el artículo 5, fracción XV de la **Ley Orgánica de la PGR**, corresponde a la Institución especializar al personal ministerial, policial y pericial y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en: derechos humanos y género; la aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia; la conducción de investigaciones y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres y los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los delitos que son cometidos contra niñas y mujeres.

En términos de la fracción XVII del artículo anterior, también le corresponde elaborar y aplicar protocolos de inves-

tigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

VII. El artículo 33 fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, establece entre las facultades de la **Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos**, la de ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 20. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el delito de **tráfico de menores**, previsto en el artículo 366 ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas; tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración, tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, de la ley General de Salud, y los delitos en materia de **trata de personas** previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador.

VIII. Por su parte, el **artículo 64 del citado Reglamento**, establece las facultades de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (DGPDSC), entre las cuales destacan las previstas en las fracciones VI, VII Y X que disponen:

- **Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios** requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo **acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales;**
- Brindar orientación legal y social al público en general, canalizándolo a las dependencias y entidades competentes, que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencias, preventivo y educacional;
- **Establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana** sobre la posible comisión de delitos

federales, así como canalizarlas en las unidades y órganos competentes;

IX. El artículo 82, fracción VII del mismo ordenamiento confiere a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, la facultad de realizar las tareas de intercambio de información policial con agencias policiales extranjeras encaminadas a la localización de personas extraviadas y menores de edad

X. El 31 de enero de 2008, se publicó en el DOF el **acuerdo A/024/08** mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), y el 25 de mayo de 2012 se publica en el mismo medio de difusión oficial el diverso ACUERDO A/ 109/ 12 de la Procuradora General de la República por el que se reforman y adicionan los acuerdos A (024/08 y A/ 145/10; y se adscriben las Fiscalías Especiales para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

En sus orígenes, a la Fevimtra le correspondió investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas publicada en el DOF el 27 de noviembre de 2007, con excepción de cuando se cometan por miembros de la delincuencia organizada en términos de los artículos 2 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que sean de la competencia de la Federación; sin embargo, resulta oportuno precisar que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas quedó abrogada con motivo de la publicación en el DOF 14 de junio de 2012 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

Asimismo, la denominación de la **Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad** fue modificada para quedar como **Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad**, en virtud del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR publicado en el D.O.F. el 23 de julio de 2012.

Resulta oportuno precisar que entre las razones que motivaron la creación de esta Fiscalía se encuentran:

- Gran porcentaje de las víctimas de trata son mujeres y niños, así como personas vulnerables por sus características sociales y todas ellas tienen derecho a una intervención igual y eficiente en materia de procuración de justicia.

- El Estado Mexicano como parte integrante de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, de la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer**, de la **Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer**, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, se ha comprometido ante la comunidad internacional a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres, en especial a garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

En la dirección <http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx>, del Portal de Internet de la PGR, se encuentra a disposición del público en general información de la FEVIMTRA identificada bajo los siguientes títulos:

Trata de personas. Este apartado aborda el tema de la trata como un delito en el que se utiliza a las víctimas para explotarlas en la pornografía, prostitución, laboralmente o se abusa de ellas en otras diversas formas, y destaca que las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las personas migrantes son las personas más vulnerables frente a este antisocial.

Alerta AMBER México. Es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos -en el que participan los 3 niveles de gobierno; medios masivos de comunicación; organizaciones de la sociedad civil; sector empresarial; sector académico y otros que pudieran apoyar desde el ámbito de sus competencias.

Delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes a través de Medios Electrónicos. Este apartado informa que el uso cada vez más generalizado del internet y de dispositivos como computadoras portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes pone en situación de mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de delitos como la pornografía infantil, la corrupción de menores y la trata de personas, y presenta una serie de recomendaciones para navegar con seguridad en internet.

Erradiquemos la violencia contra las mujeres. En este apartado se exponen los diversos tipos de violencia que existen y se ofrece para quien padece de esta situación los números de teléfono, correos electrónicos y la dirección en que puede ser atendida las 24 horas los 365 días del año.

Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Es una iniciativa orientada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todas las partes del mundo, cuyo objetivo es concientizar a la sociedad realizando actividades el día 25 de cada mes en las que destaque el color naranja; esta campaña llama a todos los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los medios, las mujeres y los hombres que se unan para luchar contra esta pandemia mundial.

- Están a disposición del público los siguientes protocolos:

En 2015 la PGR diseñó ambos protocolos como herramientas metodológicas, estándares y efectivas en la investigación de la **violencia sexual y la violencia feminicida** competencia de la PGR **cometidos en agravio de las mujeres y niñas**, que establecen las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado.

Está también a disposición del público lo siguiente:

- Material de Difusión Alerta AMBER México;
- Cartel AAMX Ayúdanos en su búsqueda y localización;
- Cartel AAMX Tus datos son importantes;
- Tríptico AAMX Tus datos son importantes;
- Instructivo de huellas dactilares y de planta de los pies;
- Cartel Activación de la Alerta AMBER México;
- Cartilla Alerta AMBER México, tus datos son importantes tenlos a la mano, y cartel Tips para cuidar a tus hijas e hijos en internet;
- Tríptico: Recomendaciones para navegar con seguridad en internet;

- Cartel: Esto es trata de personas;
- Tríptico: Esto es trata de personas;
- Cartilla de denuncia;
- Cartel: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;
- Tríptico: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;
- Historieta: ¿De qué se trata? Número 1;
- Historieta: ¿De qué se trata? Número 2;
- Historieta: ¿Dónde se esconde la Violencia? Número 1;
- Historieta: ¿Dónde se esconde la Violencia? Número 2;
- Cartel: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;
- Cartel: Ninguna persona elige ser vendida y explotada;
- Cartel: Tips para navegar con seguridad en Internet;
- Tríptico: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;
- Tríptico: Ninguna persona elige ser vendida y explotada, y
- Tríptico: Tips para navegar con seguridad en Internet.
- Como parte de la Campaña para Erradica la Violencia, están a disposición del público los siguientes videos:
- La violencia sexual ¿Tu hija/o está sufriendo violencia sexual en la escuela?
- La violencia en el hogar ¿Formas parte de la violencia en el hogar?
- La violencia de género y discriminación ¿Sabías que la discriminación y violencia de género también se manifiesta en prácticas agresivas o excluyentes hacia las personas cuya orientación sexual no es la heterosexual?

XI. En enero de 2016, la PGR a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, emitió el **Protocolo de Actuación**

ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el cual tiene por objetivo general definir los principios y procedimientos generales de actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, en los casos en que atiendan o interactúen con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con apego a los estándares de protección de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta de forma transversal los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

XII. El 24 de febrero de 2012, se publicó en el DOF el **acuerdo A/ 039/ 12** por el que se regulan las atribuciones y se establece la adscripción del **Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la PGR (Cedac)**, a fin de fortalecer y mejorar los canales de comunicación de la PGR y la ciudadanía mediante procedimientos ágiles, a los cuales se les pueda incorporar un medio de seguimiento y evaluación de la calidad a la atención ciudadana.

Con base en el artículo primero del acuerdo que nos ocupa, el **Cedac** se encuentra adscrito a la **Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad**, concentrará y regulará la respuesta, distribución, monitoreo y evaluación de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales que provengan como denuncia ciudadana, queja, felicitación o solicitud de orientación respecto a la prestación de servicios de la Institución.

Entre las atribuciones del Cedac previstas en el numeral **tercero del acuerdo** se encuentran:

- Atender, como primer contacto, las comunicaciones ciudadanas que se realicen a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o redes sociales, en éste último caso, mediante la cuenta oficial que se cree para tal efecto.
- Capturar la información que le sea proporcionada e incorporarla a una base de datos, que permita su debido seguimiento por cada persona que los haya proporcionado.
- Encausar la información a la Unidad Administrativa competente atendiendo a su naturaleza o a la solicitud específica.

- Las denuncias por delitos en flagrancia se transferirán a la Policía Federal Ministerial o, en su caso, a las Delegaciones de la Institución, para su debida atención.

- Establecer con las diversas Unidades Administrativas de la Procuraduría, los mecanismos de coordinación que resulten necesarios para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden.

El **Centro de Denuncias y Atención Ciudadana** con base en el artículo **cuarto** del **acuerdo**, se integrará por operadores y profesionistas en diversas ramas que realizarán la atención de la forma siguiente:

- Directa e inmediata con operadores dentro de las instalaciones de la DGPDS, quienes tendrán el perfil correspondiente para proporcionar información y orientación legal y psicológica, así como de atención de crisis cuando lo amerite el caso.

- Especializada a través de la canalización de las denuncias a las Unidades Administrativas competentes atendiendo a la naturaleza de la información o de la solicitud.

De lo anterior se advierte lo siguiente:

I. La Constitución Federal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen al **interés superior de la niñez** como el principio rector que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

II. Las Procuradurías de Protección en el ámbito federal y de las entidades federativas, son las responsables de garantizar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el ejercicio de sus funciones, podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.

III. La Procuraduría General de la República cuenta con las siguientes unidades involucradas desde su plataforma

propia de atribuciones, con temas inherentes a la protección de la niñez y de acercamiento de los servicios que proporciona la Institución hacia la sociedad:

a. **Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos**, a la que le compete conocer respecto del delito previsto en el artículo 20. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el delito de **tráfico de menores**, previsto en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas; los delitos en materia de **trata de personas** previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entre otros.

b. La **Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad**, es la unidad responsable de **facilitar el acceso** de la **comunidad** a los **servicios** requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como de establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos federales, así como canalizarlas a las unidades y órganos competentes.

c. La **Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol**, es la unidad a la que le compete realizar las tareas de intercambio de información policial con agencias policiales extranjeras encaminadas a la localización de menores de edad.

d. La **Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas**, le corresponde investigar y perseguir los delitos previstos en la **Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos**, con excepción de cuando se cometan por miembros de la delincuencia organizada en términos de los artículos 2 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que sean de la competencia de la federación.

IV. La Procuraduría General de la República cuenta con el **Centro de Denuncia y Atención Ciudadana**, como mecanismo instituido para fortalecer y mejorar los canales de comunicación de la PGR y la ciudadanía, el cual se encuentra adscrito a la **Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad**, concentrará y regulará la respuesta, distribución, monitoreo y evaluación de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales que provengan como denuncia ciudadana, queja, felicitación o solicitud de orientación respecto a la prestación de servicios de la Institución.

V. La Procuraduría General de la República ha puesto a disposición del público en general en la dirección <http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx>, información de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) identificada bajo los siguientes títulos:

- Trata de Personas.
- Alerta AMBER México.
- Erradiquemos la violencia contra las mujeres.
- Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.

Está también a disposición del público Material de Difusión Alerta AMBER México y diversa información útil en materia de trata y violencia de género a través de Carteles, Trípticos, Instructivos, Cartillas, Modelos, Historietas y Videos.

VI. En el plano normativo, la Procuraduría General de la República ha emitido los siguientes protocolos que también se encuentran a disposición de la sociedad en la página señalado en el apartado que antecede y en la *Normateca Institucional*:

- **Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual**
- **Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio**

- Protocolo de actuación ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Conclusión

La Procuraduría General de la República, a partir de las reformas constitucionales y legales en materia de derechos humanos, ha impulsado diversas acciones para garantizar **el interés superior de la niñez**, mediante el establecimiento de unidades especializadas para el conocimiento de determinado tipo de delitos cometidos en agravio del menor, el replanteamiento de atribuciones con base en la legislación vigente, así como para lograr su localización mediante el flujo de información policial con agencias policiales extranjeras (**UEITMPO, FEVIMTRA y la DGAPI-Interpol**); ha dictado protocolos para guiar la actuación del personal sustantivo en la atención de antisociales en los que en la mayoría de los casos la calidad de víctimas recae en niñas y mujeres (violencia sexual y feminicidio) así como para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados; ha puesto a disposición de la sociedad material de difusión en materia de trata, violencia de género y de prevención del delito (Carteles, Trípticos, Cartillas y Videos); además estableció un mecanismo de comunicación con la ciudadanía a través de los medios de atención y seguimiento que ofrece (**Centro de Denuncia y Atención Ciudadana**); asimismo, cuenta con la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, como la unidad responsable de facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo **acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales.**”

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. DGPL 63-II-5-1968 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.- 386/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que publique por los medios a su disposición la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”, desde su creación a la fecha.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de abril de 2017.— El titular de la Unidad, maestro Valentín Martínez Garza.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la Oficina del C. secretario, referente a su atento **oficio No. SELAP/UEL/311/137/17** de fecha 27 de enero del año en curso, mediante el cual la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el Acuerdo aprobado en sesión celebrada el 25 de enero de 2017, anexo al presente me permito enviarle la respuesta que nos hizo llegar la secretaría particular de la subsecretaría de Desarrollo Rural, mediante **oficio núm. 401.-070/2017** de fecha 24 de marzo de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.

Por instrucciones de la maestra Mely Romero Celis, subsecretaria de Desarrollo Rural, previa consulta con las direcciones generales que integran esta subsecretaría, en atención al **oficio número 112.02.-137/2017**, relativo al Punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión **exhorta a esta Secretaría para que publique por los medios a su disposición la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en nuestras manos”, desde su creación a la fecha**”, presentado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara antes mencionada, se emite respuesta a su petición, en los términos siguientes:

En el 2016, la “Estrategia el campo en nuestras manos”, por medio de la transversalidad de varios componentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con la cual se fortalecieron las acciones de impulso y fomento de la competitividad y la productividad del campo y con ello se identificaron las necesidades de las mujeres rurales y se reforzaron las capacidades de cada una de ellas; teniendo como tareas primordiales:

- a) Posicionar su papel en el desarrollo de los núcleos rurales.
- b) Fortalecer su presencia en las actividades productivas.

La Sagarpa se dio a la tarea de ofrecerles acceso a tecnología, innovación y herramientas para hacer un campo productivo, competitivo, justo y rentable.

Con la finalidad de ofrecer una mayor atención en el país, se designaron enlaces en cada una de las entidades, las cuales han sido las encargadas de impulsar la participación de las mujeres en el campo y dar a conocer proyectos exitosos, lo cual las hace pilar de un crecimiento competitivo y equitativo del sector primario.

Por lo anterior, con fecha 30 de noviembre de 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se da a conocer el presupuesto del componente “El campo en nuestras manos” teniendo como monto \$1,206,9 millones de pesos; y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, las reglas de operación para el Ejercicio Fiscal referido, para su operación correspondiente; siendo un componente dirigido exclusivamente a las mujeres rurales y de zonas periurbanas.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017.— Licenciada Carolina Venegas Ochoa (rúbrica), secretaria particular.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Secretaría de Gobierno de Morelos.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Le envío un respetuoso saludo, al tiempo que, por instrucciones del secretario de Gobierno, maestro en ciencias Matías Quiroz Medina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 8, 11, fracción II, 13 fracción VI, y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 4, fracción V, 10, 11, 12 fracciones XVII, XXVI y XXXV, y 15, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, me permito responder al exhorto que el 6 de septiembre de 2016 formuló la Junta de Coordinación Política, en el que pide a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la de las entidades federativas y a las municipales sumarse a la con-

memoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el 22 de septiembre, siempre que no sean esenciales en la atención ciudadana o de urgencias, mediante su oficio número DGPL 63-II-8-1878.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través de la Secretaría de Administración, mediante el oficio número SA/DGGAI/ 01217/ 2016, informó que se dio cabal cumplimiento en la difusión a las unidades de enlace financiero-administrativo o su equivalente, así como a los órganos desconcentrados, para que éstos a su vez lo comuniquen a sus unidades administrativas y, en su caso, a los organismos sectorizados.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, y aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto y consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 10 de marzo de 2017.— Juan Alfonso Hernández Gurrola (rúbrica), coordinador general de asesores del Secretario de Gobierno.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Secretaría de Gobierno de Morelos.

Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Le envío un respetuoso saludo, al tiempo que, por instrucciones del secretario de Gobierno, maestro en ciencias Matías Quiroz Medina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 7, 8, 11, fracción II, 13, fracción VI, y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 4, fracción V, 10, 11, 12, fracciones XVII, XXVI, XXXV, y 15, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, me permito responder al exhorto que el 15 de diciembre de 2015 formuló la Comisión de Salud, en el que exhorta a la Secretaría de Salud

del Gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico transmitido por vector, en dicha entidad federativa; mediante su oficio D.G.P.L. 63-II-4-254.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través de la Secretaría de Salud, mediante oficio SSM/DAM/SP/DE CETVZ/797/2016, informó que en el Programa Estatal de Dengue de Servicios de Salud de Morelos se realizaron las acciones de vigilancia, prevención y control; información que se anexa para su observación detallada.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted, aprovechando la ocasión para reiterarle mi respeto y consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 13 de marzo de 2017.— Juan Alfonso Hernández Gurrola (rúbrica), coordinador general de asesores del Secretario.»

«Secretaría de Gobierno de Morelos.

Licenciado Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud.— Presente.

Por este conducto y en seguimiento al oficio SS/OSS/UEJ/557/2016, sobre dar respuesta al acuerdo

“...Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue hemorrágico transmitido por vector, en dicha entidad federativa...”

Le informo que en el Programa Estatal de Dengue de Servicios de Salud de Morelos se están realizando las acciones de vigilancia, prevención y control; estas acciones están enfocadas en el manejo integral del vector y se encuentran contenidas en el plan de trabajo 2016; al ser el mismo vector de dengue, chikungunya y zika, las acciones establecidas también inciden en el control de las nuevas enfermedades en el estado.

Dentro del plan de trabajo se establecen diversas líneas de acción, las cuáles se trabajan en apego a la NOM-032-SSA2-2014 y a los objetivos del Centro Nacional de Pro-

gramas Preventivos y Control de enfermedades órgano que nos norma en la operación del programa. Las líneas de acción son las siguientes:

1. Comunicación social
2. Gestión para la participación Municipal
3. Educación para la salud
4. Certificación de espacios públicos
5. Manejo de riesgos potenciales
6. Vigilancia epidemiológica
7. Control larvario
8. Índice de condición de la vivienda
9. Vigilancia entomoviológica
10. Vigilancia virológica
11. Vigilancia entomológica por el método de ovitrampas
12. Encuesta y verificación
13. Estratificación de riesgo
14. Saneamiento básico de las viviendas para la eliminación de criaderos
15. Nebulización espacial ULV
16. Rociado intradomiciliario

Aunado a lo mencionado anteriormente, cada año se realizan dos Jornadas Nacionales de Lucha Contra el Dengue, Chikungunya y Zika; ésta es una iniciativa que nos ofrece la oportunidad de alertar a la población sobre los riesgos a la salud por infección de éstas enfermedades, y sensibilizar a la población sobre estos padecimientos y las formas de reducir su propagación. Estas Jornadas se basan en promover la reducción del riesgo en una semana intensiva de acciones y focalizada en sitios y localidades de riesgo.

Este año se planeó llevar a cabo un operativo integral en el mes de junio, en el que se incluyeron acciones de control larvario, rociado residual y nebulización espacial ULV en lugares de mayor incidencia de casos de dengue de las tres jurisdicciones sanitarias del estado, las acciones se dirigieron en base al panorama epidemiológico que se presentaba en ese momento.

Finalmente, en relación al manejo clínico de la enfermedad cada año se realiza una capacitación del personal médico y de enfermería, el curso realizado fue *Vigilancia epidemiológica, atención médica, prevención y control de dengue chikungunya y zika* en donde asistieron personal de los SSM, IMSS e ISSSTE.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 18 de agosto de 2016.— Doctora Giorgia Rubio Bravo (rúbrica), directora general de Servicios de Salud de Morelos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Secretaría de Gobierno de Morelos.

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Le envío un respetuoso saludo, al tiempo que, por instrucciones del secretario de Gobierno, maestro en ciencias Matías Quiroz Medina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 8, 11, fracción II, 13, fracción VI, y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos; 1, 4, fracción V, 10, 11, 12, fracciones XVII, XXVI, XXXV, y 15, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, me permito responder al exhorto que el 29 de abril de 2016 formuló la Comisión de Comunicaciones, en el que pide a los gobiernos estatales y municipales de la República Mexicana y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que en el ejercicio de sus atribuciones legales, fomenten la respectiva coordinación y colaboración de cada uno con las autoridades federales, en materia de telecomunicaciones, con la finalidad de que se avance en la implantación de nuevos puntos de acceso gratuito a Internet en lugares públicos, con el evidente beneficio social que ello conlleva, privilegiando, de ser posible, que los nuevos puntos se instalen estratégicamente en los centros de vivienda con mayor densidad poblacional y menor capacidad económica, mediante su oficio DGPL 63-II-1-0962.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través de la Secretaría de Administración, mediante oficio SA/DGSTIC/278/2016, informan que se han implementado a través del programa México Conectado bajo recurso federal un total de 3 mil puntos de acceso gratuito en las instalaciones de mayor impacto como son escuelas públicas de todos los niveles, instituciones de salud (hospitales y centros de salud), plazas públicas, edificios de gobierno (estatal y municipal), con una cobertura en los 33 municipios

del estado de Morelos. Dentro del mismo rubro, la Secretaría de Administración a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones administra la Red Estatal de Comunicaciones, la cual cuenta con cobertura de los 33 municipios del estado.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, aprovechando la ocasión para reiterarle mi respeto y consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 10 de marzo de 2017.— Juan Alfonso Hernández Gurrola (rúbrica), coordinación general de asesores del Secretario.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

— o —

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio D.G.P.L. 63-II-7-1846, de fecha 9 de febrero pasado, referente al siguiente punto de acuerdo:

“**Primero.** La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

”**Segundo.** La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de preven-

ción, diagnóstico, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.

”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.”

Me permito informar que el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante oficio número 5013/DAJ/0450/2017, de fecha 8 de marzo del actual, dio a conocer las acciones que realiza la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en cuyo ámbito de competencia incide la atención del asunto planteado.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta entidad federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de marzo de 2017.—
José Montiel Rodríguez (rúbrica), subsecretario Jurídico.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Ivonne Betsabeth Mateos Báez, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Hago referencia al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1846, de fecha 9 de febrero de 2017, dirigido al gobernador del estado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, enviado a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a través del similar núme-

ro SJ/DGAJ/DPL/0324/2017, recibido el 28 de febrero del año en curso, relativo a los siguientes puntos de acuerdo aprobados por dicho órgano:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.

”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.”

Al respecto informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta dependencia y entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por ser ésta la unidad administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área a través del memorándum número SSSYCSS/AJ/086/2017 envió el informe que emite la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del Estado de Puebla mediante el similar número DSPYVE/107/2017, mismos que en copia simple se acompañan.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los

artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención es estime conducente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 de marzo de 2017.—
Eduardo Ortiz Flores (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Eduardo Ortiz Flores, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los SSEP.

En atención a su similar número CI-DAJ-0146/2017, relativo a un punto de acuerdo del Honorable Congreso de la Unión relativo al cáncer de mama, adjunto al presente remito a usted copia del memorándum número DSPYVE/107/2017, signado por el director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica en donde informa las acciones realizadas en atención al punto de acuerdo en referencia.

Agradeciendo la atención que sirva prestar al presente, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de marzo de 2017.—
Manlio Santiago Hernández, coordinador consultivo especializado B.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Licenciado Manlio Santiago Hernández, coordinador consultivo especializado B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SEEP.— Presente.

En atención al similar número CI-DAJ-0146/2017, signado por el director de Asuntos Jurídicos de esta dependencia y entidad, relativo a un punto de acuerdo del Honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:

“**Primero.** La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en

zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.”

Al respecto, le informo que la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica a través del Programa de Cáncer de la Mujer, ha diseñado una ruta de unidades móviles con equipos de mastografía que operan en el interior del Estado de Puebla, con la finalidad de detectar oportunamente cáncer de mama en mujeres que habitan en las localidades más alejadas de los servicios hospitalarios.

“**Segundo.** La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.”

Al respecto, le informo que el Programa de Cáncer de la Mujer cuenta con líneas de acción para la promoción y detección oportuna del cáncer de mama. En las unidades médicas de primer nivel se dan talleres a mujeres de cómo autoexplorarse; se les informa cómo y cada cuándo realizar la técnica de autoexploración, con la finalidad del autoconocimiento e identificación de signos y síntomas de alarma; y se les indica la importancia de acudir a su centro de salud a consulta médica ante cualquier sospecha.

De forma sistemática también se recomienda a mujeres de 25 a 39 años acudir a estos servicios de salud para realizarse la exploración clínica de mama, la cual se realiza de forma anual y se lleva a cabo en centros de salud y en unidades médicas móviles, como está indicada en la NOM-041-SSA2-2011. En cuanto a la mastografía, en el estado contamos con una infraestructura fija en 14 unidades hospitalarias donde se realiza las detecciones como tamizaje, y se ha solicitado a las unidades de primer nivel de atención referenciar a las mujeres de 40 a 69 años al hospital según corresponda.

“**Tercero.** La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama,

sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.”

Al respecto, le informo que el Programa de Cáncer de la Mujer realiza durante todo el año campañas permanentes de difusión, promoción y ejecución en el interior del estado, asimismo se refuerza la promoción y difusión en específico durante el mes de octubre, con una campaña de sensibilización contra dicho padecimiento, con motivo del “Mes de la Detección de Cáncer de mama”, entre las acciones que se realizan:

- Detección en el primer nivel de atención en materia, del cáncer de la mujer: con la realización de exploración clínica de mama, toma de citología cérvico-vaginal y prueba de virus de papiloma humano a mujeres a partir de los 25 años y más.
- Referencia de mujeres de 40 a 69 años de edad de los centros de salud a las unidades hospitalarias con equipo mastografía para la toma de la misma como parte del tamizaje de cáncer de mama.

Estrategias efectivas e incluyentes para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes en situación de vulnerabilidad de sus derechos sociales y de salud. Con jornadas de salud en centros de reclusión social, mujeres indígenas\ mujeres internas en el Hospital psiquiátrico, donde se les realiza la exploración clínica de mama, citologías o toma de prueba de híbrido o toma de mastografía, estos estudios se efectúan de acuerdo a su edad.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de marzo de 2017.—
Doctor Leandro Hernández Barrios, director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

Sonido, por favor, en la curul del diputado Virgilio Caballero.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Para hacer un llamado a esta soberanía para que levante una protesta por las agresiones que siguen dándose en Veracruz contra los periodistas.

Antier fue baleada la casa de la periodista Guadalupe Fuentes, en Orizaba. Por si fuera poco, lo que ha ocurrido en Veracruz se ha convertido en una violación cotidiana no solo de derechos humanos sino de la vida misma. Le pido a usted que por favor esta soberanía reaccione como se debe. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Quedan asentadas sus expresiones y registradas en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la agenda política, referente a los comentarios de resoluciones judiciales en el estado de Veracruz.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra para referirse al tema, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el tema de la agenda que nos ocupa hoy es de gran trascendencia para el pueblo de México.

En un Estado de derecho, toda acción que vulnere y violente las garantías de los individuos debe ser sancionada para poder brindar certidumbre a la comunidad, pero más que brindar certidumbre, dar garantía de los derechos humanos de todas las mexicanas y mexicanos y, en particular, de Veracruz.

En Nueva Alianza tenemos la convicción de que nada puede estar por encima de la ley y que el respeto por el Estado de derecho debe ser la base que sostenga nuestra sociedad.

Hace un año conocimos una historia que indigna y preocupa, conocimos el nombre de Daphne Fernández. Mujer, mujer vulnerada, con gran valentía haciendo valer su derecho de dar a conocer que había sido violada por cuatro jóvenes pertenecientes a las familias de clase alta en el Puerto de Veracruz.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2015, cuando ella era menor de edad. Recalco: menor de edad, vulnerable y mujer. Han pasado más de 24 meses y la comunidad tiene sentimientos encontrados en torno al tema, y más que sentimientos encontrados, hay una gran molestia en toda la población.

En primer lugar porque, tras la denuncia y la exhibición de un video referente a aquel día, la autoridad actuó de manera lenta y con dilación. En las primeras indagatorias permitió a los señalados salir del estado o incluso del país. Uno de ellos fue detenido en Coahuila y otro más en España, de donde fue extraditado meses después.

Aunado a ello, la reciente resolución por medio de la cual el juez otorgó un amparo a uno de los acusados argumentando que a pesar de que realizó tocamientos en parte del cuerpo que son consideradas de índole sexual, solo fueron roces incidentales. Esto amplía la indignación y no deja satisfecha a una sociedad que está cansada de la impunidad, sobre todo que este tipo de casos no consideren como un acto con toda la alevosía en contra de una menor de edad.

Sin duda, es una situación que genera polémica, porque se presta a interpretar que los jóvenes se han visto favorecidos por la autoridad, por la ley, mientras que la víctima ha sido revictimizada. ¿Cómo es posible que se cambien los roles y se victimice a quien fue la víctima menor de edad, y que a toda luz y a toda prueba era un intento de violación?

Estamos transitando por una profunda crisis de credibilidad y de confianza en las instituciones y en las circunstancias. Así no abonan al fortalecimiento del tejido social, pero lo más importante: no abonan a que la sociedad crea en las instituciones y en quienes estamos haciendo un trabajo responsable día a día.

La sociedad, tan lastimada por la inseguridad y la corrupción, no tolera más. Reafirmamos en Nueva Alianza que creemos firmemente en el Estado de derecho y en las libertades fundamentales. Por ello nos pronunciamos a favor de ahondar en las investigaciones de manera imparcial, pronta y expedita para llegar al fondo de los hechos y de

esta manera aplicar la ley, pero sobre todo garantizar la impartición de justicia para todos.

Es momento de redoblar esfuerzos y dar el paso a una justicia que ha de reconocer la importancia de cada individuo, no importa si es mujer u hombre, la justicia ante el artículo 4o. nos pone en las mismas condiciones. No permitamos que casos como éste queden en el olvido o en la burocracia jurídica, con las influencias que se puedan manipular. No se permita que quede en el olvido, sino que sea respetuoso de los derechos fundamentales de todas y de todos.

Es una exigencia que nos tiene la sociedad de Veracruz, es una exigencia de Daphne hacer justicia, y con ello fortalecer el papel de nuestras instituciones como es el de esta misma Cámara, que hacemos este exhorto y este llamado como un pronunciamiento por parte de Nueva Alianza. Los derechos no se negocian, los derechos se hacen valer. Es cuanto. Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo. Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, para referirse al tema de las resoluciones judiciales en el estado de Veracruz, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, presidenta. En primer lugar hoy precisamente venimos como Partido Encuentro Social, porque creemos que la justicia en primer lugar no se puede frenar en este país.

La justicia es lo que legitima un gobierno en cualquiera de sus niveles, si no hay justicia no hay gobierno, o mejor dicho, un gobierno sin justicia no es gobierno. Uno de los elementos fundamentales de los valores esenciales que se encuentra el actuar de un gobierno es precisamente darle a cada quien lo que le corresponde, hacer justicia, ése es un imperativo, no hay otro escenario que pueda legitimar a un Estado nación, si éste no se mide a través de la justicia, ahí está el reto.

El caso de Veracruz es uno más de los actos que dan vergüenza y focalizamos estrictamente el Poder Judicial.

En este país el Poder Judicial pareciera intocable. El Ejecutivo, el Legislativo, altamente criticados incluso por sus remuneraciones; sin embargo los magistrados, los ministros, los jueces, ganan mucho más y no se justifica por ningún motivo en ninguno de los integrantes de los tres Poderes.

res no hacer justicia a la sociedad, que es lo que hoy se reclama.

De ahí la importancia, amigas y amigos, que este caso específico de Veracruz, conocido por los Porkys, por un juez, por una niña violentada en sus derechos, violada en su condición física, haya sido reprochado y haya sido que un pueblo clame justicia. Porque cuando la justicia impera en un gobierno, el pueblo vive en armonía, vive en paz. Cuando no gobierna la justicia, cuando gobierna la corrupción, cuando gobierna la impunidad, un pueblo gime, un pueblo no está alegre, es infeliz por falta de justicia.

Y este caso, este asunto específico es de un pueblo que clama justicia una vez más. No se puede permitir un caso más en México. Incluso me atrevo a decir —aquí tengo datos— fíjense bien, amigas diputadas y diputados: un magistrado, un ministro en México gana mucho más que un magistrado o ministro en España, en Brasil, 1.8 más veces. En España un magistrado gana más que el Ejecutivo español.

Es decir, si la tendencia académica es pagarles bien a los servidores públicos que administran justicia, a los que legislan, a los que gobiernan, ese discurso académico no es malo. Malo es tener remuneraciones justas y no implementar la justicia en una norma de conducta.

Que sea la norma de conducta aplicar la justicia, es lo que reclama la sociedad. Y por supuesto, repudia aquellos salarios exorbitantes de los ministros, de los magistrados, de los jueces, porque cuando no hay justicia, los que gobiernan, los que administran, entre más tienen más quieren. Ese es un principio de descomposición social porque no hay principios, porque nos hemos apartado de los valores. Por eso Encuentro Social viene aquí, por supuesto, a clamar justicia como claman los ciudadanos veracruzanos y, desde luego, los ciudadanos mexicanos en este país.

Si no hay justicia, no hay gobierno. La sociedad quiere vivir en paz; la sociedad quiere vivir alegre; la sociedad quiere armonía, quiere desarrollo. No habrá esto si no aplicamos la justicia, y si no hacemos de la virtud, y por tanto de la justicia, la norma de conducta en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y desde luego, en el Poder Judicial.

Es una vergüenza que un juez quede impune ante la sociedad, de un acto bochornoso como el caso Daphne, en Veracruz. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Gonzalo Guizar. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. El 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz, se cometió un abuso sexual grupal contra la menor tantas veces mencionada; se le obligó a subirse a un auto con cuatro jóvenes, en el que abusaron sexualmente de ella. El caso en su momento fue altamente mediatizado, puesto que los jóvenes culpables de ese delito procedían de familias adineradas, con poder, en el estado de Veracruz.

Lo que estos cuatro jóvenes que sí tienen nombre y que son: Enrique Capitán Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, y Diego Cruz Alonso, cometieron, fueron daños al libre desarrollo personal e individual de la menor.

Desde abril de 2016 realizamos en esta Cámara una denuncia pública, y desde diferentes ámbitos para mostrar cómo en Veracruz se violentan los derechos humanos de manera cotidiana, y cómo no se hace nada para resolver y ejercer la autoridad.

Pasó un año para que se dictara orden de aprehensión contra estos cuatro violentadores de mujeres, quienes fueron encubiertos por las autoridades que fueron omisas, y otro año más para que Diego Cruz fuera detenido en Madrid y extraditado para enfrentar la justicia, y lo que encontró fue a un juez denominado Anuar González Hemadi, Tercero del Distrito del estado de Veracruz que emitió un amparo a su favor, y que revictimizó a la víctima violentando la Ley General de Víctimas, quien incluso acusa a la menor de no haber demostrado su estado de indefensión frente a cuatro varones, que no demostró el abuso sexual y que la intención de la violación que fue objeto no tenía intenciones lascivas de satisfacer un apetito sexual.

En la investigación ministerial se desprende que el abuso a la menor, quien en ese momento tenía 17 años de edad, fue uno de estos, Diego Cruz, le tocó los senos, le metía las manos debajo de la falda y le introdujo los dedos debajo del calzón y en la vagina, aún así el juez no observó intención lasciva, ni que Cruz tuviera la intención de copular, considera lo sucedido como un frotamiento incidental y no como abuso sexual. Esto que hace el juez es violentar los derechos de la menor.

El contenido del amparo refleja indignantemente la poca consideración no solo de los derechos de la menor implicada sino de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país, así como una nula comprensión de los instrumentos de impartición de justicia con perspectiva de género que tanto el Poder Judicial está obligado a cumplir como los convenios y acuerdos internacionales en la materia.

No nos queda duda de que con este margen legal, aunado a lo que indica el Código Penal de Veracruz, no debería haber siquiera oportunidad de que los delitos cometidos por Diego Cruz se presten a interpretaciones misóginas y anti-constitucionales del juez Anuar González Hemadi.

México es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, denominada Convención Belém do Pará, en la que se especifica en el artículo 7 que los estados parte condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Este amparo del Juez Anuar no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que México ha suscrito y contra las mujeres mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país.

Debería preocuparnos, como Cámara, que la ley no se cumpla, que se violentan los derechos de las mujeres y que no se haga justicia. El Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia de amparo y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos.

Es claro que en este caso solo es un botón de muestra del sin fin de violaciones a la legislación en materia de derechos de las mujeres. Por ello, cuatro diputados de Movimiento Ciudadano también interpusimos en esta Cámara un juicio político contra este juez, quien demostró que no es un servidor público, que con base en la Ley General de Servidores Públicos y en la Constitución Política tiene obligaciones fundamentales como juzgador y que no puede favorecer conductas criminales, pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos.

Violentó además bienes jurídicos y minó la confianza en las instituciones de impartición de justicia. Espero que todas y todos ustedes apoyen este juicio contra el juez Anuar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa Avalos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Cuitláhuac García Jiménez.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidenta. La violación es una acción de un poder abusivo que debe castigarse. En el caso del ataque sexual a una joven en Veracruz, que llevaron a cabo otros jóvenes pudientes en enero de 2015 y que es conocido como el caso de los Porkys de Costa de Oro, debieron prevalecer criterios actualizados y que están hoy en día en la norma para impedir un nuevo acto de injusticia en contra de la víctima.

El juez decidió, en cambio, proteger a uno de sus agresores. Dicho juzgador, Anuar González, antepuso criterios subjetivos para una tipificación del delito sin la perspectiva de género que ya se establece en la tesis jurisprudencial 22/2016, emitida por la Primera Sala y publicada en abril del año pasado.

El juez se justificó en una jurisprudencia de 2006, que ya fue sustituida por la norma con la inclusión de la violencia contra las mujeres como delitos en materia de derechos humanos. Las nuevas tesis debieron aplicarse en beneficio de la víctima, es decir aquí la retroactividad de la ley está plenamente justificada, y no anteponer una equivocada tipificación con un prejuicio lamentablemente de género.

Por eso en Morena condenamos la decisión del juez Tercero de Distrito y exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal actúe con toda severidad, porque aún en el caso el juez tenía la atribución de exhortar al Ministerio Público para complementar las pruebas suficientes.

Debemos condenar este hecho porque ya aquí en esta Cámara ha habido avances muy sustanciales en contra de la violencia hacia las mujeres. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Cuitláhuac García. Para fijar la opinión del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene uso de la palabra por cinco minutos la diputada Lia Limón García.

La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. En los últimos años, en nuestro país se han hecho esfuerzos transversales e interinstitucionales para erradicar la violencia de género, entre ellos se ha incorporado el principio de perspectiva de género, que implica tomar en cuenta la problemática y efectos de las relaciones sociales de poder entre hombre y mujer.

En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el que diversas instancias del Poder Judicial se han dado a la tarea de capacitar a jueces y magistrados, a fin de generar en ellos el conocimiento y desarrollar la sensibilidad necesaria para atender los casos.

Es lamentable que pese a dichos esfuerzos se sigan presentando casos, como la resolución del juez en el caso de Daphne, conocido como el de los Porkys, que ponen en evidencia la persistencia de violencia sistemática institucional en contra de mujeres, así como la falta de conocimientos, preparación, profesionalismo y sensibilidad.

Decisiones como la que tomó el juez, además de reflejar impunidad, evidencia que la violencia de género no se limita a los hogares, trabajos, barrios o comunidades, sino que trasciende a las instituciones encargadas formalmente de garantizar los derechos humanos, principalmente aquellos relacionados con la protección de la integridad de las mujeres y el acceso a la justicia.

Sin duda el hecho que pone la alerta en ese sentido es la decisión del juez, al que vale la pena repetir su nombre, Anuar González Hemadi, dentro del caso ya mencionado, conocido como el de los Porkys, al haber ordenado la liberación de Diego Cruz, uno de los jóvenes imputados como probable responsable de diversos delitos de índole sexual y que, como bien se dijo aquí, había sido detenido en España después de un año y que logramos que lo extraditaran a México, para al final, para que un juez lo dejara libre.

Esta decisión del juez, más allá de lo errónea que pudiera ser, es doblemente errónea por los argumentos esgrimidos en la sentencia, ya que a consideración del juez la defensa de Daphne no acreditó ni aportó prueba alguna que comprobara eficazmente la conducta lasciva de Diego Cruz.

El juez señaló que si bien la menor refirió que el activo le tocó los senos y otras partes del cuerpo, ese hecho no evidencia una intención lasciva por parte del activo y, por lo tanto, no constituye un abuso sexual.

Me pregunto, para el juez ¿qué sí constituye un abuso sexual? Si la víctima fuera su madre, su hija o su hermana, me pregunto si lo constituiría.

Entre los principios que rige el ejercicio de un juez están el de objetividad y profesionalismo. Este último implica en su caso que en la función de juzgar debe de aplicarse el criterio de la perspectiva de género, incluso la propia Suprema Corte de Justicia ha señalado, dentro del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que los juzgadores deben de cuestionar los estereotipos que puedan existir en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.

En este caso, de manera vergonzosa, el juzgador estableció que la joven consintió la agresión al haber tenido la posibilidad de repeler la misma, para lo cual el juez argumentó también que el estado de indefensión fue inexistente, ya que la menor refirió que cuando el activo le jalaba la blusa y le tocaba los senos, riendo y burlándose, ella le pedía que la dejara, que no la lastimara, por lo que esta solicitó pasarse al asiento delantero, lo cual ocurrió, por lo que el juez con eso consideró que ella había tenido la posibilidad de defenderse y de repeler el ataque y que por lo tanto no existía una condición de indefensión.

Es decir, estos son algunas, entre otros, de las cuestiones que menciona la sentencia, otros ya los mencionó mi compañera Candelaria, y que podríamos leerla aquí para que todos tomáramos conciencia de lo absurda que es esta misma en sus argumentos.

Si bien el Consejo de la Judicatura Federal resolvió suspender al titular del Juzgado Tercero de Distrito, Anuar González Hemadi, iniciar un procedimiento de investigación administrativa, el agravio sin duda continúa para la víctima, ya que esta determinación judicial, la del juez, en su sentencia de algún modo revictimiza a la víctima y para ello está también la Ley General de Víctimas, que en este caso no se ha aplicado.

Condenamos la decisión del juez y hacemos un llamado sin duda alguna a que se profundice en la capacitación que lleva a cabo el Instituto de la Judicatura y todas las instancias del Poder Judicial, en materia de perspectiva de género, y a que verdaderamente se aplique, porque este es uno de los muchos casos que se dan.

Este, porque es un caso conocido, porque es un caso que se hizo público y porque es un caso en el que mucha gente estaba atenta, pero como este hay casos varios en donde los jueces no son capaces de aplicar un protocolo que ya lleva varios años de haberse emitido por la propia Suprema Corte.

Hace dos días se dio la noticia de una mujer que fue quemada por su esposo, un caso de violencia extrema y ese tipo de casos seguirán sucediendo mientras siga habiendo la impunidad que hay en los casos de violencia contra las mujeres.

Por eso, desde el Partido Verde hacemos un llamado a todos los órganos encargados de procuración y administración de justicia de todo el país para que se capaciten en la implementación del protocolo en mención.

Y sin duda alguna, este es un tema que trasciende colores, que trasciende partidos y en el que mujeres de todos los partidos políticos nos hemos unido para hacer este llamado desde la Comisión de Equidad de Género, encabezada por Laura Plascencia, y con varias otras integrantes de esta propia Cámara estamos por la defensa y la protección de los derechos humanos y por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Lia Limón. Para fijar el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el problema de la resolución dolosa para otorgar un amparo a uno de los responsables de la violación, acusado de pederastía, que es el caso de los Porkys, es cómo nos mira esta sociedad a las mujeres. Cómo nos miran las instituciones, cómo nos miran en la escuela, cómo nos miran en la iglesia y en nuestras casas, en la comunidad.

Por eso quiero invitar a ustedes a que revisen las redes sociales y vean la cantidad de cosas obscenas, de agresiones verbales, de groserías y linchamientos de que ha sido objeto Karla, una de las personas que murió en el trágico accidente el pasado viernes sobre reforma.

Es así como de un rato para otro a las mujeres se nos culpa por los delitos que se cometen contra nosotras.

Eso es lo que hemos señalado una y otra vez en esta tribuna y en todos los foros sobre una sociedad permisiva que normaliza la violencia y minimiza los actos de agresión hacia las mujeres.

De manera lamentable, la cultura social e institucional hace posible que la violencia contra las mujeres se esté recrudeciendo.

Amanecemos con noticias de asesinatos porque el marido quema a su esposa en Oaxaca o que una joven fue violada por cuatro estudiantes en la Universidad La Salle. O bien, con una madre que es asesinada en la puerta de su casa por defender la custodia de sus hijas en Mérida.

Así las cosas para las mujeres en México. Una realidad donde se conjuga la corrupción, la impunidad, la misoginia y el podrido de un sistema de procuración e impartición justicia para las mujeres. Esos son los ingredientes para un caldo de cultivo perfecto que otorga licencias para que se nos asesine, se nos viole, se nos desaparezca y se lacere nuestra dignidad.

Cuando los casos no se resuelven, cuando se tolera la violencia hacia las mujeres, cuando no se castiga a los culpables, se perpetúa y acepta en los hechos el maltrato, la vejación y asesinatos de las mujeres.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más asesinadas, cuántas más violadas, cuántas más desaparecidas? Pero parece que este sistema no tiene llenadera, como si no fuera suficiente, el juez tercero de distrito decide que no es abuso sexual lo que mis compañeras ya han dicho aquí: que te toquen tus senos, que te metan los dedos en la vagina. Todo porque no había señales de satisfacer sus placeres sexuales o de tener deleite sexual.

Qué miseria de nuestro sistema de justicia. Qué ignorancia, también, sobre nuestra demanda de violación equiparada. Miseria e ignorancia que se refleja en insensibilidad, en priorizar términos legales y no atender el dicho de la víctima de violencia sexual, hecho expuesto ya en las leyes.

Este tipo de sentencias urgen sobre la necesidad de llenar los huecos y vacíos legales que son escaparates de impunidad, nichos de corrupción y, lo peor del caso, permisos para que se violen nuestros derechos.

Por eso es importante aquí —y hago un paréntesis— combatir la corrupción del Poder Judicial. El Poder Judicial no

está juzgando con perspectiva de género y tampoco en este caso está atendiendo al bien superior del menor. En este caso, de la menor.

¿Qué está haciendo con Consejo de la Judicatura para capacitar? Porque se han destinado muchos recursos desde esta Cámara de Diputados para la capacitación del Poder Judicial. No están dando resultados.

Este tipo de sentencia urge sobre la necesidad de llenar esos huecos y vacíos legales que son escaparates de impunidad, nichos de corrupción y en el peor de los casos, permisos para que se violen nuestros derechos.

A pesar de que hay avances legislativos y diversas políticas para reducir la brecha de desigualdad, lo cierto es que no bajan a una realidad, las leyes no se aplican. Es allí donde se presentan este tipo de casos que no permiten que se obtenga justicia a mujeres como Daphne, que de manera afortunada supimos de él, pero eso pasa todos los días en nuestro país. Este es un caso que se nota como excepción, pero es la normalidad a lo largo y ancho de nuestro país en los Ministerios Públicos, tenemos un problema de fondo.

En México el 99 por ciento de los delitos no se castigan, estamos en un sistema de justicia que premia la delincuencia con la impunidad y si son delitos contra mujeres se dictan resoluciones que son una verdadera burla y falta de respeto, así de grave es el problema y se insiste en seguir alimentándolo.

Por ejemplo, aún no hay nombramiento para que se ocupe la Fiscalía Anticorrupción y se condiciona aun la entrada en vigor de la reforma constitucional que dota de plena autonomía al Ministerio Público y se tenga una fiscalía general. No hay voluntad para que se comience a limpiar el régimen de corrupción y complicidad que permiten este reino de impunidad que se ha convertido nuestro país. No basta con sancionar a este juez, lo que se necesita es cambiar esta mentalidad en la impartición de justicia.

El jueves estaremos con el gobernador de Veracruz, diputadas de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, y seremos firmes, no debe haber impunidad en el caso de Daphne, ni en ninguno otro. Es necesario cambiar el doble discurso que se tiene incluso en esta Cámara de Diputados: ahora sí condenamos un caso de abuso sexual, pero hace días se negaron a votar un dictamen que garantiza a las mujeres violadas la interrupción del embarazo cuando hay violación, que es la aplicación de

la Norma 046, no solo en el caso de los Porkys, es todo un sistema y cultura que debemos transformar.

Sería bueno que comenzáramos erradicando esa doble moral y esa misoginia que se fomenta en esta Cámara de Diputados, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, solo pudimos nombrar dos mujeres al Instituto Nacional Electoral aquí, pues el PAN no quiso nombrar a una mujer que pudiera haber hecho la diferencia y empezar a tener la paridad. Justicia para las mujeres.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia Bolio Pinelo.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muy buenas tardes; con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados. En Acción Nacional lamentamos profundamente que millones de mujeres mexicanas deban enfrentarse en su cotidianeidad a dos grandes adversidades: el odio y la impunidad.

En pleno siglo XXI, al interior de la sociedad mexicana siguen vigentes muchos prejuicios y la discriminación contra las mujeres de nuestro país. Peor aun, carecemos de un sistema de justicia que efectivamente responda a las necesidades de los ciudadanos. El llamado caso de los Porkys es fruto de la impunidad y la prepotencia que impera en gran parte del territorio nacional.

En nuestro país hay muchas mujeres que carecen de la garantía de que se cumplan las leyes, del respeto a sus derechos humanos y la sensibilidad por parte de los gobiernos y el gobierno federal.

Hoy, mientras que la familia de Daphne exige justicia, hay jueces para los que ciertos criterios son tocamientos sin el consentimiento de una menor y ellos dicen que eso no significa lascividad.

Desde luego, Acción Nacional considera que todo procedimiento penal debe observarse escrupulosamente la presunción de inocencia y este caso no debe ser la excepción, pero ello no implica que las resoluciones emitidas no puedan ser objeto de escrutinio público.

En ese sentido, vemos con buenos ojos que el Consejo de la Judicatura Federal haya resuelto suspender al titular del

Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, e iniciar un procedimiento de investigación administrativa en relación a su actuar como juzgador. Pero hay que aclarar que esta acción nos parece correcta no como un castigo al juez que llevó el caso de Diego Cruz, sino como una manera de dar certeza y despejar dudas sobre su manera de actuar.

Por ello, nos parece pertinente que además de analizar la sentencia favorable a Diego Cruz, el consejo aproveche para determinar si el juzgador incurrió en otras presuntas irregularidades en el ejercicio de su desempeño.

Diputadas y diputados, a casi dos años de que se presentó la denuncia por violación en caso de cuatro jóvenes veracruzanos conocidos como los Porkys, la víctima y sus familias, y muchos mexicanos, no vislumbramos justicia.

En el PAN celebramos que mujeres tan valientes como Daphne y muchas otras mexicanas, alcen la voz y denuncien, pero hay que decirlo claramente con precisión y puntualidad: hoy no sólo el padre de la víctima está indignado ni sólo la sociedad veracruzana, sino todos los mexicanos estamos tristes y aberrantemente indignados por los atropellos que el sistema de procuración de justicia ha demostrado ser ineficiente y corrupto, ese mismo que genera que muchas víctimas de violación y de cualquier otro derecho humano fundamental, prefieran mantenerse en silencio antes que denunciar los atropellos.

En el PAN esperamos que la investigación por parte de la Judicatura Federal pueda aclarar si estamos o no ante un caso de tráfico de influencias, impunidad, ineficiencia y corrupción.

Por nuestra parte estaremos muy pendientes de ese asunto y de otros en materia de impartición de justicia, y nos sumamos y pedimos votos para que con apego irrestricto a la ley, esta víctima pueda ver justicia en su caso, en su denuncia hecha ya hace más de dos años.

Sabemos que el caso de Daphne y los Porkys, es un eslabón más en la larga cadena de fallas injustificables en el sistema de procuración y de impartición de justicia mexicano, al que nos toca prestar atención como legisladores.

A partir de la reforma en materia de derechos humanos en 2011, todas las autoridades están obligadas a aplicar los tratados internacionales en la materia, incluidos, por supuesto, los jueces.

Hacemos un llamado enérgico a que esta instancia judicial correspondiente eche abajo la aberrante sentencia para garantizar el acceso a la justicia y a un debido proceso para Daphne, su familia y la sociedad en la que todos estamos inmersos. Ni una víctima más del sistema judicial mexicano.

Debemos redoblar esfuerzos para que la justicia en México y en cada entidad federativa de este país, ya no ceda ante la costumbre de impunidad. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Kathia Bolio.

Saludamos la presencia en este salón de sesiones de la arquitecta Aura Saldaña, alcaldesa del municipio de Sabana de la Mar y presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, de República Dominicana, así como a la licenciada Karolin Reyes, gerente técnica de la Federación Dominicana de Distritos Municipales que hoy están con nosotros en este salón de plenos, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro. Sean ustedes bienvenidas. Muchas gracias.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Laura Plascencia Pacheco.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, y a los medios de comunicación. Durante mi intervención habrán de ser violadas en México cinco mujeres o cinco niñas; el día de hoy cuando cada uno y cada una de nosotros regrese a sus hogares, por la noche habrán de ser violadas más de mil 600 mujeres en nuestro país a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Cada año, 600 mil mujeres y niñas son víctimas de abuso sexual y de violación. La mayoría de los casos terminan siendo impunes en todo el país. De estos casos la mayoría se dan en el ámbito familiar en el centro de la familia y los demás ocurren en espacios públicos, es decir, el 40 por ciento.

Cuántas veces no hemos escuchado: qué hacía la joven a tales horas en la noche, en la calle, cómo estaba vestida, incluso juicios de valor en contra de muchas de las víctimas.

México desde el año 2011, con la reforma constitucional al marco jurídico mexicano, da el mismo rango, el rango

constitucional, a las diferentes convenciones y declaraciones que México ha firmado y ha ratificado. En ese sentido la Convención CEDAW y la Convención Belém do Pará mencionadas hace unos momentos.

De parte del Grupo Parlamentario del PRI, queda de manifiesto nuestra inconformidad con la sentencia al juicio de amparo 159/2017, donde el Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz señala que el imputado no quedó fehacientemente comprobado, por lo que le otorgó el recurso precisamente, en contra de la formal prisión que se dictó el pasado 23 de enero por este mismo delito.

En la investigación ministerial hay muchísimos datos que dan muestra precisamente del abuso que sufrió nuestra querida joven Daphne.

A esta joven la subieron a la fuerza a un vehículo, durante el trayecto a la citada residencia la manosearon, le tocaron los senos, le bajaron la falda, bueno, le bajaron, metieron la mano en la falda, introdujeron sus dedos en su vagina, mientras que ella les decía que no lo quería, que pararan, que ella no pedía eso. Ellos simplemente lo seguían haciendo y se seguían burlando. Llegaron a la residencia en cuestión, la metieron a la fuerza al baño, le bajaron la falda, los calzones, las pantaletas, y uno de ellos precisamente cometió la violación.

Queda de manifiesto en la misma investigación ministerial un peritaje psicológico, donde una perita oficial deja de manifiesto que la alteración emocional que sufre la víctima es consecuencia de los hechos que refiere y que dichas afectaciones corporales y emocionales son acordes a los hechos que Daphne denunció en esta investigación y en esta carpeta de investigación.

Sin embargo, el juez Anuar González menciona que dicha carpeta de investigación y que dichas pruebas realmente no demuestran fehacientemente que lo haya hecho con la intención de copular o con una intención lasciva de satisfacer un deseo sexual. Cosa que realmente nos sorprende, ya que en la misma sentencia de juicio de amparo él maneja o deja de manifiesto que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como actos sexuales de no presentarse el elemento intencional de satisfacer el deseo a costa de la víctima.

Esto, señoras y señores diputados, muestra o deja un precedente negativo en la impartición de justicia, abre la puerta para que miles de niñas y miles de mujeres sean nueva-

mente víctimas de violencia sin que la justicia llegue a cada una de ellas.

Cabe destacar que en el texto en cuestión el citado juez en ningún momento hace mención de las circunstancias concomitantes del citado delito. Asimismo, el mismo juez encuentra insuficientemente las pruebas, bueno, insuficiencia en las pruebas, y que no se acredita el primer y último de los elementos del ilícito de pederastia, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal de Veracruz.

Y él menciona que no quedó manifiesto en un primer momento la intención lasciva en la conducta y que la víctima se encontrara en un estado de sin defensa y vulnerable. Una menor de 17 años, que a todas luces fue víctima de este grave delito.

Por esto y por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI le pide a la Suprema Corte de Justicia, en un primer lugar, que resuelva la procedencia del citado juicio de amparo que hemos mencionado aquí, 159/2017, y que también considerándolo un asunto de gran trascendencia y de gran importancia a nivel nacional, le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de acuerdo con su tesis de jurisprudencia, la 272008, haga uso de su facultad de atracción y que traiga y resuelva el caso de Daphne como un medio excepcional de control de la legalidad, para que pueda atraer este asunto, que aunque en un principio no fue de su competencia, pueda darnos la certeza jurídica y que la justicia llegue a la víctima.

Asimismo, le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga uso también de un mayor esfuerzo para capacitar en perspectiva de género a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y que se aplique realmente el protocolo que tiene ya muchísimos años en vigencia y aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es juzgar con perspectiva de género.

Para Daphne y para todas las víctimas de violencia sexual en nuestro país exigimos, desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, justicia y sobre todo, sobre todo justicia para cada una de ellas. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Laura Plascencia.

El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamen-

rio del PRI... Sonido, por favor, en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta, para pedirle por favor que esta soberanía respete el orden del día que se acordó en la Junta de Coordinación Política.

En la Junta de Coordinación Política se acordó que después de esta discusión vendría el tema de Odebrecht. Me dicen que el PRI no quiere, a mí no me interesa que no quiera el PRI. El orden se acordó en una mesa con los ocho coordinadores y debemos tener seriedad, debemos tener palabra en lo que se acuerda en la Junta de Coordinación Política.

Ya se les hizo costumbre venir aquí y cambiar a su contenido. Le pido que antes de los dictámenes a discusión entremos con el punto de Odebrecht, que ya está consensuado en la Junta de Coordinación Política y que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, en el orden del día que remitió la Junta, el asunto de Odebrecht viene en el punto que le corresponde, que usted conoce y que hoy simplemente comenta. No podemos modificar el orden previsto, en principio, salvo acuerdo de la misma comisión.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha estado solicitando la palabra el diputado Basave. Sonido, por favor, en la curul del diputado Basave.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta, para apoyar la petición de la diputada Nahle, en el sentido de que el punto de acuerdo sobre Odebrecht se vea antes.

El pleno tiene la facultad para tomar la decisión que quiera, en caso de que sea necesario. Pero, además, es un tema de vital importancia para México, es un tema que toca el cáncer de este país, que es la corrupción y no podemos dejarlo al final, porque la intención de hacerlo es muy clara, es que ya no haya muchos diputados, es que ya no haya la atención de los medios y es que se vaya diluyendo el tema. Eso es lo que creo no podemos permitir. Gracias.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del coordinador Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, presidenta. El orden del día fue aprobado en el inicio de esta sesión, de modo que nosotros queremos, en aras de mantener el orden y acatar nuestra propia decisión, desahogar todos los asuntos como se han programado.

Este fue efectivamente un documento enviado por la Junta de Coordinación Política, en estos términos y estamos igualmente interesados en discutir ese y cuantos asuntos estén sometidos a la consideración de esta soberanía y, efectivamente, no debe haber espacio para el capricho de nadie. Atengámonos al orden del día aprobado por esta soberanía.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Jesús Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Gracias, presidenta. No, desde luego, debíamos ser nosotros los que metamos un desorden en las discusiones y en las decisiones que vamos abordando, soy el primero en defender esa idea. Pero al mismo tiempo también no podemos ignorar la necesidad de que abordemos los grandes temas de interés nacional y en este caso hasta de trascendencia internacional, como el caso Odebrecht, y que en todo caso si hemos de atender lo que plantea el diputado Camacho sin desatender lo que plantea la diputada Nahle, yo diría, si no estamos con el quórum que se requiere para tomar decisiones de este calibre el día de hoy, que quede agendado en todo caso para primera hora de mañana y que lo abordemos de manera tal que permita que haya el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios al respecto.

Yo no sé si en esto coincidiera la diputada Nahle, pero bueno, yo plantearía esta como una vía de salida concertada.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Nahle y después en la curul del diputado César Camacho.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta, no es ningún capricho, diputado Camacho. De acuerdo al Reglamento, el artículo 59, fracción III, dice que tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, legal o reglamentario requieran discusión, votación.

Y el artículo 62 dice que primero van los dictámenes y después las iniciativas, es con base en ello, pero sobre todo, porque el lunes se habló en la Junta de Coordinación Política de ir en este tema.

Yo no estoy de acuerdo en que lo dejemos para mañana, la preocupación de que vaya ahorita es para que, efectivamente, haya quórum y se vote. Si él garantiza, que es el que tiene la mayoría aquí de los diputados, que va a estar su votación o sus diputados al final de la jornada a las tres, cuatro de la tarde, pues no habría problema, el problema es que muchos de ellos se retiran del pleno y si hay una necesidad de votarlo hoy. Es por eso, senador, diputado Camacho.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, presidenta. La fracción del PRI no acepta ninguna imputación, sobre todo si no tiene ningún fundamento. El orden del día, efectivamente, fue pactado en la Junta de Coordinación Política y es exactamente el que se está desahogando.

La Mesa Directiva, así lo advierto, de la sola lectura del orden del día solo procesó lo que la Junta de Coordinación Política decidió. Por eso no podemos admitir que somos nosotros quienes quieren o no discutir este tema. Por supuesto que lo vamos a discutir y por supuesto que lo vamos a votar.

Atengámonos al orden del día y evitemos los prejuicios de si va a ser hoy o mañana. Démosle paso al desahogo del orden del día aprobado por esta soberanía al principio y hagamos votos porque lleguemos hoy.

Nosotros no tenemos interés subrayado porque sea hoy o porque sea mañana. Irremediablemente vamos a llegar a ese punto, vamos a participar en el debate y vamos a votar.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Presidenta, yo quisiera que dejara claro cuál fue el espíritu del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, más allá de juicios de valor. El acuerdo político es que se iban a dar las garantías necesarias para que este dictamen, derivado del punto de acuerdo sobre la petrolera Odebrecht, se pudiera conocer el día de hoy.

Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se adelante este dictamen para esta etapa procesal. Si así lo decide el pleno, si se consulta a la asamblea, la asamblea hace suya la petición de la diputada Nahle. Nosotros no tenemos ningún problema en acompañarla. Si no la obsequia la asamblea, pues ni modo, tendremos que esperar al final de la sesión el día de hoy pero no tenemos problema en acompañar la petición de la diputada Nahle y en cumplir el acuerdo de que se dieran garantías expresas de que el día de hoy se discutiera este tema y este dictamen.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para no detener el transcurso de la sesión quisiera pedir el que se transcurra la primera ronda de presentación de iniciativas en lo que hacemos las consultas correspondientes. Todavía estaríamos en tiempo de abordar oportunamente el tema y avanzamos y no detenemos la sesión.

Si les parece bien continuamos.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 260 y 61 del Código Penal Federal, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El diputado Pablo Elizondo García: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, vamos a tocar un tema que veníamos tocando también hace un momento, es algo similar. Me encuentro hoy ante ustedes en esta, la máxima tribuna del país, para presentar una iniciativa muy noble. Y la llamo así porque el tema que trata es en suma delicado y lastimoso para todas las familias de cualquier nivel social y económico.

Así es, compañeros, me refiero al abuso sexual infantil, a esta deplorable práctica que causa tantos estragos en los menores que son víctimas de él y que, desgraciadamente, coarta su libre desarrollo de la personalidad y el normal desarrollo psicosexual.

Este problema tan serio que es definido de manera muy clara por el Acta para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil, que se usa en el ámbito federal de Estados Unidos, como la utilización, la persuasión, la inducción, la seducción o la coerción de un niño o una niña para realizar o participar de cualquier tipo de conducta sexual implícita o la simulación de dicha conducta, incluida la ayuda a otra persona para el mismo fin.

Con ello podemos darnos cuenta de que el abuso sexual es una conducta muy compleja que lleva a cabo todo un entramado y preparación por parte de los abusadores, ya que estos suelen usar tácticas persuasivas y manipuladoras para el engaño de los niños o de los menores.

Algunas de estas actividades suelen ser, por ejemplo, comprarles regalos u organizar actividades especiales, en donde los niños se sienten cómodos y con ello confundir a las víctimas para que estas no comenten lo que está pasando, ya sea por miedo o por culpa.

Como bien sabemos, el delito de abuso sexual es un delito de realización oculta; por ello, un gran número de ocasiones esta conducta pasa a formar parte de las cifras negras de delitos en nuestro país.

Asimismo, es necesario mencionarles que la UNICEF, dentro de las estadísticas informa que entre un 55 y un 62 por ciento de niñas y niños dicen haber sufrido alguna forma de maltrato, ya sea físico, emocional o sexual en algún momento de su vida.

Por todo esto, compañeros legisladores, es necesario que visualicemos el abuso sexual infantil como una de las formas más graves de violencia contra la infancia y que conlleva a efectos devastadores en la vida de niñas y niños que lo padecen.

No podemos ser omisos ante tan grave situación. El abuso sexual infantil es una realidad en nuestro país y afecta a un gran número de familias, independientemente de su condición social o de su capacidad económica. Las niñas y los niños son uno de los grupos vulnerables a los cuales tenemos, como legisladores, la obligación de proteger.

Por todas estas razones, diputados y diputadas, es que presento esta iniciativa que tiene como objeto fundamental el fortalecer nuestro marco jurídico, con la finalidad de prevenir y proteger a las víctimas de abuso sexual infantil. En este sentido y buscando aprovechar el carácter punitivo del derecho penal para proteger a los derechos de los menores, se proponen principalmente las siguientes modificaciones:

1. Adicionar un último párrafo al artículo 260 del Código Penal Federal para prever que el delito de abuso sexual en personas menores de 15 años se persiga de oficio.

2. Reformar el artículo 261 del Código Penal Federal para agravar la pena a quien cometa el delito de abuso sexual en personas menores de 15 años, pasando de seis a 13, años a una de nueve a 13 años, esto siendo lógico con el principio de proporcionalidad de la pena.

Con estas reformas planteadas en la iniciativa que les presento, estoy convencido que aportaremos desde el ámbito legislativo herramientas objetivas que permitan la disminución de esta conducta tan lacerante para nuestras niñas y nuestros niños. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, legislador federal Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es bien sabido que en nuestras sociedades existen grupos denominados vulnerables; las niñas, niños y adolescentes son uno de estos grupos, por lo cual como legisladores debemos de hacer todo lo que se encuentre a nuestro alcance para que ellos, que son el futuro de nuestro México, puedan desarrollarse integralmente de la mejor manera posible, con el objetivo de que en un futuro contemos con hombres y mujeres líderes, emprendedores, pero sobre todo mejores seres humanos.

Para esto, actualmente nuestras niñas, niños y adolescentes se ven afectados por diferentes problemáticas que les impiden tener un desarrollo sano, uno de esos graves problemas es el abuso sexual del que son víctimas por las condiciones en las que se encuentran y por la idiosincrasia y cultura que existe en nuestro país, estos delitos en la mayoría de las ocasiones quedan ocultos, esto ya que las víctimas por miedo no se atreven a delatar a su agresor o los padres que a sabiendas de lo sucedido no son capaces de hacer la denuncia respectiva ante las autoridades correspondientes, ya sea porque el abusador normalmente es un familiar o por cuestiones culturales entre otras, ello sin mencionar que este tipo de ilícitos es de realización oculta, por lo que es prácticamente imposible que una persona que no sea la víctima o el agresor conozca de su comisión.

El problema resulta ser más grave de lo que aparenta, tan es así que en el Senado de la República se votó un dictamen para declarar el 19 de noviembre como día nacional en contra del abuso sexual infantil, esto sumándose a esta con-

memoración establecida por la Organización de las Naciones Unidas.

Para entender un poco mejor la problemática es necesario definir lo que es el abuso sexual infantil que a decir de the National Child Traumatic Stress Network (NCTSN),¹ es cualquier interacción entre una niña o niño y un adulto (u otro niño) en donde el niño es utilizado para estimular sexualmente al abusador o a un observador. El abuso sexual puede involucrar contacto físico o puede también ocurrir sin contacto físico. El contacto físico puede incluir tocar la vagina, pene, senos, entre otros. El abuso sexual sin contacto físico puede incluir voyerismo (tratar de ver el cuerpo desnudo del niño), exhibicionismo (el abusador muestra sus partes privadas ante un niño) o exponer al niño pornografía. A menudo los abusadores sexuales no usan fuerza física y pueden utilizar juegos, engaños, trucos u otros métodos de chantaje para engatusar o engañar a los niños y mantenerlos callados.

Como se puede observar el abuso sexual es muy complejo y lleva todo un entramado y preparación por parte de los abusadores sexuales, quienes suelen usar tácticas persuasivas y manipuladoras para engañar a los niños. Dichas tácticas pueden incluir comprarles regalos u organizar ciertas actividades especiales, lo cual puede confundir aún más a la víctima.

De esta manera es sencillo determinar que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren, por lo que es necesario y urgente entenderlo como lo que es un problema social que tiene consecuencias dramáticas en la vida de estos, en su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que el niño o la niña víctima se desarrolla. De ahí que los ámbitos para la intervención en la protección de los niños y las niñas contra este tipo de violencia deben de incluir la participación desde la familia y su entorno social, a los ámbitos educativo, sanitario, policial, de políticas públicas y por supuesto el legislativo que en este caso es el que nos corresponde y desde el cual surge la imperiosa necesidad de realizar la presente iniciativa que tiene como objeto principal reformar la legislación penal para prevenir y erradicar el abuso sexual en menores de quince años, apoyando con ello desde el ámbito penal a las diferentes legislaciones tanto nacionales como internacionales que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de los cuales es propicio mencionar algunos:

Internacionales:**Convenciones de la ONU**

- Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y menores.
- Convenio para la Represión de la Trata de personas y la Explotación de la Prostitución Ajena
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Protocolos de la ONU

- Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres del 30 de septiembre de 1921 y en Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad del 11 de septiembre de 1933
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, “Protocolo de Palermo”

Pactos de la ONU

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación

Convenciones de la OEA

- Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”

– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”

Esto sólo por mencionar algunos de los más importantes.

Nacionales:

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

[...]²

– Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

De la cual sólo por mencionar uno de los artículos que se refieren a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en materia de desarrollo integral, transcribiré el contenido del artículo 2 para mayor claridad:

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.³

Así mismo la Suprema Corte de Justicia se ha manifestado en cuanto al Derecho al libre desarrollo de la personalidad, mismo que se ve coartado cuando algún menor es víctima de abuso sexual, para identificar mejor dicho derecho, se expondrán algunos criterios del máximo tribunal al respecto:

Tesis: 1a. CCLXII/2016 (10a.)

Libro 36, Noviembre de 2016,

Tomo II

Primera Sala

Décima Época

Pág. 896

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas.

La Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los derechos fundamentales tienen la función de “atrincherar” esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese “coto vedado” están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de ideas, el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen un catálogo de “derechos de libertad” que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, el derecho al **libre desarrollo de la personalidad** brinda protección a un “área residual de libertad” que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos “espacios vitales” que, de acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; sin embargo, cuando un determinado “espacio vital” es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al **libre**

desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.

Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.

Tesis: 1a. CCLXI/2016 (10a.)
Libro 36, Noviembre de 2016,
Tomo II
Primera Sala
Décima Época
Pág. 898

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Su dimensión externa e interna.

La libertad “indefinida” que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la “esfera personal” que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica “libertad de acción” que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una “esfera de privacidad” del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que re-

alizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.

Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.

Como bien podemos darnos cuenta con todo lo hasta aquí descrito, en el menor que es víctima de abuso sexual, se ve afectada la dimensión interna de su libre desarrollo de la personalidad, ya que al ver vulnerada su esfera de privacidad, en este caso en el ámbito sexual, el menor con el transcurso del tiempo verá disminuida su capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal en el ámbito sexual.

De acuerdo a lo anterior, podemos inferir que los menores que se encuentren en dicho supuesto al momento de ejercer su sexualidad, estarán condicionados por los hechos ocurridos y estos no les permitirán desenvolverse plenamente con la libertad que les otorgue un pleno desarrollo.

En este sentido y buscando aprovechar el carácter punitivo del Derecho Penal, para proteger los derechos de los menores antes descritos, en la presente iniciativa se proponen tres modificaciones; dos al Código Penal Federal y una al Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas que enseguida se describen:

1. Se propone adicionar un último párrafo al artículo 260 del Código Penal Federal, para prever que el delito de abuso sexual en persona menor de quince años se persiga de oficio.

2. Se propone reformar el artículo 261 del Código Penal Federal para agravar la pena a quien cometa el delito de abuso sexual en persona menor de quince años, pasando de seis a trece años a una de nueve a trece años, esto siendo lógicos con el principio de proporcionalidad de la pena.

3. Se modifica la fracción X, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de que se considere como delito que amerita prisión preventiva oficiosa el de abuso sexual en persona menor de quince años.

Para ejemplificar mejor las propuestas de reformas planteadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL FEDERAL	
Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.	---
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.	---
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.	---
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.	---
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.	---
SIN CORRIATIVO	En estos casos, el delito se perseguirá por querrela, salvo aquel supuesto previsto en el artículo 261, en cuyo caso se perseguirá de oficio.
Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.	Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de nueve a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.	---

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 167. Causas de procedencia	Artículo 167. Causas de procedencia
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.	---
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva.	---
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	---
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.	---
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.	---
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:	---

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;	---
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;	---
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;	---
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;	---
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;	---
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;	---
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;	---
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;	---
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;	---

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;	X. Tráfico y abuso sexual de menores, previstos en los artículos 366 Ter y 261, respectivamente;
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.	...
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.	...

Finalmente se puede concluir que el abuso sexual en menores es una problemática alarmante que todo país debemos tener en cuenta con el fin de dirigir más efectivamente las medidas preventivas, por ende debemos contribuir con el combate de este tipo de maltrato infantil y por lo tanto aportar desde nuestras trincheras, acciones efectivas que permitan erradicar esta deplorable práctica, razón que da sentido a la presente iniciativa buscando prevenir dicha acción de la cual cualquier niño, puede ser víctima, independientemente de su género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Decreto

Artículo primero: Se **reforma** el artículo 261 y se **adiciona** un último párrafo al artículo 260 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 260. ...

...

...

...

...

En estos casos, el delito se perseguirá por querrela, salvo aquel supuesto previsto en el artículo 261, en cuyo caso se perseguirá de oficio.

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de **nueve** a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Artículo segundo: Se **reforma** la fracción X, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

...

...

I. a IX. ...

X. Tráfico **y abuso sexual** de menores, **previstos en los artículos 366 Ter y 261, respectivamente;**

XI. ...

...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Folleto informativo sobre el abuso sexual infantil. Febrero 2012 (Versión original en Inglés: Abril 2009)Infantil

http://www.nctsn.org/sites/default/files/assets/pdfs/ChildSexualAbuseFactSheetFINAL_SP.pdf

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 del mes de marzo del año 2017.— Diputados y diputadas: **Pablo Elizondo García**, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Ángel García Yáñez, Brenda Velázquez Valdez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Daniel Torres Cantú, Delia Guerrero Coronado, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Rojas Orozco, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Estela Rentería Medina, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juana Aurora Cavazos Cavazos, María Bárbara Botello Santibáñez, María Gloria Hernández Madrid, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Santos Garza Herrera, Sara Paola Galico Félix Díaz, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Elizondo García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE AEROPUERTOS Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila: Con el permiso de la Mesa Directiva. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta iniciativa que presento el día de hoy creo que tiene mucho que ver con la transformación que ha tenido el sistema político en México.

La corrupción es el flagelo más grande para la sociedad, sin duda, en nuestro sistema político. La creación de pleitesías y embajadores políticos a lo largo de la historia de

nuestro país ha sido constante y la política ha ido transformándose.

Los ciudadanos hoy en día ya no se quedan callados. No aceptan que los políticos hacen lo que les dé la gana. Hoy los políticos modernos y los partidos políticos que van a la vanguardia tienen que poner en el centro del debate al ciudadano, y una de las principales prácticas que tenemos hoy en día que se han generado a lo largo de muchos años de favores políticos electorales es el servicio de taxis desde y hacia los aeropuertos.

Es increíble, inconcebible e inexplicable a los ciudadanos que nosotros representamos, que un taxi en la ciudad de Cancún te cobre 700 pesos por llevar a una sola persona en un tramo de 15 minutos; en un viaje en la Ciudad de México aquí a la Cámara te cobran 200 pesos, y las nuevas modalidades que han salido a brindar este servicio te puedan cobrar 200 pesos en el caso de Cancún y 60 o 70 pesos aquí en la Ciudad de México.

Quiero hacer la aclaración que no estoy en contra de los empresarios, no estoy en contra de las personas que honradamente llevan y manejan el taxi para ganarse el pan de cada día. Estoy en contra de que la autoridad ha tenido y permitido de una forma laxa e irresponsable el abuso de unos cuantos que se enriquecen con el dinero de muchos y voy a poner el siguiente ejemplo: hoy en día en los aeropuertos de todo el país, quien autoriza de forma facta y real, son los aeropuertos si puede haber más taxistas o no puede haber más taxistas, cuando debería ser la autoridad quien autorice si se puede haber más competencia o no más competencia.

La joya de la corona en nuestro país es la siguiente: hoy en día los taxistas de todos los aeropuertos tienen una demanda asegurada por la autoridad que a final de cuentas les autoriza o no les autoriza sus tarifas.

¿Pero saben cómo se fijan las tarifas en todos los aeropuertos del país, saben cómo se fijan? Simple y llanamente los mismos taxistas que prestan el servicio le informan a la autoridad lo que van a cobrar y ya es prácticamente un hecho que cobren lo que quieren y lo incrementen cada vez que quieren porque solamente dan vista a la autoridad.

Por eso tenemos esos precios y no hay discurso que valga, y que le podamos decir a un ciudadano inteligente que levanta la voz el día de hoy, que le digamos "nosotros como autoridad vamos a autorizar que solamente participen las

personas a prestar este servicio y vas a tener un servicio tres veces más caro". Muchas veces vas a tener que esperar 30 minutos porque nadie puede ir a recogerte, y hoy en día existen más de 10 millones de usuarios, ciudadanos, que ya utilizan estas nuevas aplicaciones tecnológicas para dar el servicio.

Nosotros lo que queremos lograr aquí es algo muy sencillo, y como les digo, no vamos en contra de los empresarios. La autoridad tiene que poner orden y si no lo hace la autoridad, tenemos que ponerlo nosotros aquí en este Congreso, pero no podemos ser cómplices de estas prácticas monopólicas y que van totalmente en contra de la competitividad.

En el 2015 la Cofece ya dijo "tienes que regular y abrir el mercado porque no se puede seguir haciendo lo mismo". Y en el 2006 la Cofece desesperada, nos mandó un informe al Congreso "señores hagan algo a este respecto pues la autoridad no lo está haciendo".

Lo que nosotros queremos es también desregular, bajar las cargas y las condiciones que tienen los grupos aeroportuarios sobre las actuales prestaciones de servicio. ¿Qué quiere decir? Las cargas de los taxis del aeropuerto son excesivas. Hoy en día tienen que pagar un derecho de cinco mil pesos a la autoridad y 30 o 40 o 50 pesos por boleto de cada viaje que llevan a cabo, a los grupos aeroportuarios. Esos grupos aeroportuarios que tienen una utilidad de 37, un 40 por ciento anual, que es enorme comparado con cualquier otro grupo aeroportuario en el mundo.

Señores, queremos crear en la figura, la ley, para que las empresas basadas en plataformas informáticas tengan un marco legal adecuado y con la menor regulación posible; y en el fondo hacer que exista una mayor competencia en el mercado que hoy es un monopolio, tenga mejores prácticas y mejores servicios para los ciudadanos que nosotros representamos.

El día de hoy Acción Nacional, y estoy seguro que muchos diputados de esta Legislatura, nos ponemos del lado de los ciudadanos; los ciudadanos quieren un mejor servicio a un menor costo. Invito a todos los diputados de esta Legislatura a que hagamos lo mismo. Votemos y legislemos en favor de la ciudadanía y no a favor de pequeños grupos que históricamente se han enriquecido por tener reglas laxas y más cómodas y teniendo un mercado totalmente distorsionado. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aeropuertos, y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Javier Rodríguez Dávila, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Problemática

Dentro de los distintos tipos del autotransporte federal de pasajeros que contempla la normatividad mexicana, el del transporte desde y hacia aeropuertos supone un servicio específico que, por sus características, compone prácticamente un caso excepcional.

Esta excepcionalidad radica en buena medida en que este tipo de servicio de autotransporte se encuentra regulado de una forma laxa y ambigua, lo que ha ocasionado que sean los concesionarios de los aeropuertos quienes, a través de instrumentos del derecho privado, establezcan los requisitos y condiciones que los prestadores del servicio deban de cumplir. Distinto a lo que ocurre con el autotransporte de carga, de pasajeros, servicios auxiliares, que están regulados por varios instrumentos administrativos, como Normas Oficiales, Acuerdos, Circulares, etcétera.

Si bien es cierto que el servicio que actualmente se brinda desde los aeropuertos nacionales cumple con altos estándares de calidad y seguridad para los pasajeros, la falta de regulación y la poca claridad en la legislación vigente ha ocasionado, a lo largo de los años, que: *i)* los concesionarios de los aeropuertos desempeñen de facto un papel fundamental en el otorgamiento de este tipo de permisos, aunque la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) no contempla esa participación, y *ii)* la regulación de las características de este transporte a través del derecho privado dé lugar a altas tarifas para los usuarios de los aeropuertos.

El progresivo incremento que han presentado estas tarifas sigue una tendencia contraria al del sector de las aerolíneas, cuyo constante crecimiento ha provocado la disminución de los precios finales. De lo anterior, cabría preguntarse, ¿por qué si la industria del transporte aéreo de pasajeros ha crecido¹ y ha hecho más competitivas y accesibles sus tarifas, el servicio del transporte terrestre en aeropuertos (que está estrechamente vinculado) se ha ido encareciendo?

A lo anterior, se suma el fenómeno de quienes prestan el servicio de transporte a través de aplicaciones electrónicas, administradas, operadas o promovidas por las llamadas Empresas de Redes de Transporte.

Para el caso mexicano, además de la regulación local correspondiente, este nuevo tipo servicio toca también al ámbito federal, sobre todo en lo que tiene que ver con la prestación del servicio en caminos de esta jurisdicción; muy particularmente en el traslado *desde y hacia* los aeropuertos. La situación, al día de hoy, enfrenta una laguna jurídica ya que este tipo de servicio no puede ser clasificado bajo ninguna de las categorías enumeradas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF). Ni siquiera como *Transporte Privado*, pues la ley lo define como aquél “que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines, **sin que por ello se genere un cobro**” (Artículo 2, fracción XIV).^{2, 3}

Con base en lo anterior se desprende que la legislación federal vigente no contempla a las Empresas de Redes de Transporte en ninguno de sus sentidos: no los considera como sujetos regulados, pero tampoco prohíbe su actividad.

No debe olvidarse que el autotransporte federal de pasajeros desde y hacia aeropuertos toca zonas de jurisdicción federal, por lo que su funcionamiento debe regirse mayormente por la legislación federal y en las disposiciones administrativas correspondientes.

La presente iniciativa busca modificar la LCPAF y la Ley de Aeropuertos a efecto de regular este tipo de servicio con el fin de fijar en la legislación las bases que otorguen a los permisionarios –actuales y potenciales– mejores condiciones para prestar su servicio, y de este modo, hacer del sector uno más competitivo.

II. Argumentación

1. Fundamento constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho que todo individuo tiene de ejercer libremente la profesión o actividad económica que prefiera, siempre y cuando sea legal. Así, el artículo quinto de la Carta Magna establece:

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

El artículo limita este derecho únicamente para el caso de algunos supuestos: *a)* cuando se ataquen los derechos de terceras personas, *b)* cuando exista alguna resolución judicial, *c)* cuando se exija algún título para la práctica de una profesión o actividad reglamentada por el Estado, *d)* cuando se pretenda obligar a una persona realizar servicios sin el pago de una remuneración adecuada y proporcional, y *e)* cuando las leyes exigen el desempeño de cargo (de las armas, de jurado, de carácter censal o electoral, etcétera).⁴

Al Estado mexicano corresponde también regular las actividades económicas –sin que esto signifique la limitación de la libertad–, con el fin de asegurar un mínimo ordenamiento que les permita desarrollarse de la mejor manera, de contribuir al desarrollo nacional y de fomentar la competitividad. En este sentido el artículo 25 constitucional es claro al indicar:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El tercer párrafo del mismo artículo establece: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”

Por último, el párrafo 12° del artículo 28 de la Carta Magna establece claramente:

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

De lo anterior se desprende que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de servicios públicos que se prestan a través de particulares, así como en general del transporte en vías generales de jurisdicción federal, con el fin de la búsqueda del interés público y para evitar fenómenos de concentración.

Es usual que la dinámica propia de la actividad económica, como de cualquier otra actividad social, genere condiciones, situaciones o circunstancias que superen lo contemplado por la normatividad vigente y por tanto corresponde al Estado adecuar el marco normativo en relación con los nuevos escenarios que realidad ofrece.

Las modificaciones aquí propuestas se alinean a la motivación que dio lugar, en 1993, a la creación de la propia LCPAF, en cuya exposición de motivos se lee: “la función reguladora en materia de servicios de transporte, se orienta a consolidar y fortalecer la competencia y flexibilidad de los servicios con el propósito de promover una mayor productividad y eficiencia en su prestación”.⁵ De igual forma, busca aportar al objetivo de hacer efectivo el derecho consagrado en el artículo quinto de nuestra Constitución, y dar cumplimiento a los artículos 25 y 28 de este mismo ordenamiento.

2. Mejores condiciones de competitividad en el auto-transporte de pasajeros “desde y hacia puertos marítimos y aeropuertos federales”

Al día de hoy, la LCPAF determina que para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda otor-

gar los permisos para el autotransporte de pasajeros desde y hacia puertos y aeropuertos, la misma Secretaría deberá recabar previamente “la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate” (art. 47). En este requisito en particular la ley es poco clara porque, si bien especifica que en caso de no obtenerse la opinión en 30 días naturales se considerará la figura de la *afirmativa ficta*, no define qué tipo de opinión debe emitir la autoridad aeroportuaria, ni el contenido de ésta, ni qué ocurre en el supuesto de que la opinión sea emitida en un sentido no favorable. Tampoco el Reglamento lo hace.

Éste es uno de los casos en los que la regulación administrativa contraviene e incluso va más allá de lo estipulado en la legislación. En el portal de internet de *Trámites y servicios disponibles* de la SCT, puede consultarse el documento titulado “Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga general, carga especializada para transporte de materiales y residuos peligrosos, y transporte privado de personas y carga”.⁶ En él se especifican los requisitos para el registro y la obtención de permisos para cada uno de los tipos de autotransporte. Es importante señalar que para el transporte de pasajeros de y hacia los aeropuertos, el documento señala que los interesados deben presentar, entre otros documentos, el “convenio o visto bueno del órgano administrador del puerto o aeropuerto de que se trate”.

Resulta, por tanto, evidente: 1) que un convenio no es equiparable con una opinión, 2) que en la práctica es el interesado quien debe solicitar el “convenio o visto bueno” (y no la Secretaría como lo marca la ley) y que, 3) de acuerdo con los términos de este documento, la afirmativa ficta contemplada en la legislación resulta imposible de efectuarse debido a que sin la citada opinión (que en los hechos se vuelve vinculante) no es posible realizar el trámite de obtención del permiso.

Tal requisito condiciona la obtención del permiso a la decisión por parte del concesionario del aeropuerto de emitir (o no) la opinión señalada, cuando en un escenario deseable, el permiso debería obtenerse siempre que el interesado cumpla con los requisitos solicitados por una entidad pública (en este caso, la SCT) y no por una privada.

Por lo anteriormente comentado y con la finalidad de promover la competitividad, esta propuesta de reforma de ley estima conveniente eliminar el requisito de la opinión del administrador del puerto o aeropuerto, facili-

tando el trámite y delegándolo exclusivamente a la Secretaría.

Es de destacarse que en la exposición de motivos que acompañó la iniciativa de la LCPAF de 1993 no se encuentran siquiera mencionadas las razones que dieron lugar al requisito de la opinión emitida por las autoridades portuarias y aeroportuarias.

La modificación aquí propuesta coincide, además, con la opinión aprobada por el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el 10 de noviembre de 2016 y que fuera remitida a esta Cámara de Diputados.

En la opinión (OPN-010-2016),⁷ la Cofece señala que:

...El otorgamiento de permisos de autotransporte de pasajeros desde los aeropuertos se ve afectada por una decisión discrecional por parte de los administradores aeroportuarios, dado que la LCPAF y el RAFSA no establecen los supuestos que deben considerar para emitir opinión favorable, a efecto de que la SCT otorgue el permiso correspondiente. Dicha decisión otorga a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta de vehículos.

[...]

... Resulta necesario modificar los artículos 47 de la LCPAF y 28 del RAFSA, a efecto de que la SCT otorgue, sin necesidad de contar con opinión del administrador aeroportuario, los permisos de autotransporte federal de pasajeros desde los aeropuertos, a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos aplicables.

Adicionalmente, la Cofece indica:

Esta autoridad [la Cofece] considera necesario modificar la normatividad vigente con el objeto de que sean las condiciones del mercado las que determine el número de vehículos que presten el servicio de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente que cumpla los requisitos aplicables.

Para tal efecto, la Comisión propone la implementación de lo que denomina un *modelo abierto* de acceso de este tipo de transporte, el cual es aquel “que permite la entrada de automóviles registrados y aprobados por la ciudad o localidad para recoger y transportar pasajeros desde los aero-

puertos.” Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en México (a diferencia de lo que sucede en los aeropuertos de los Estados Unidos de Norteamérica, que pone de ejemplo la Cofece) es la autoridad federal, y no la local, la responsable de otorgar los permisos para este tipo de servicio.

Entre otros aspectos, la Comisión recomienda que la normatividad debe tutelar “únicamente objetivos de seguridad y calidad en el servicio, sin limitar artificialmente la oferta o incluir requisitos que pudieran excluir de manera injustificada a potenciales competidores”.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone modificar el segundo párrafo del artículo 47 de la LCPAF para establecer que será la propia SCT la encargada de determinar la clasificación de los servicios del autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, así como las características, especificaciones técnicas y de seguridad de los vehículos en los que se brinde dicho servicio.

La SCT ya regula las características y especificaciones de otros servicios de transporte tanto de carga como de pasajeros, a través de disposiciones administrativas, pero no lo ha hecho aún con el transporte de pasajeros desde aeropuertos. Esta modificación pretende establecer explícitamente la obligación de la Secretaría para este tipo de servicio en aeropuertos.

3. Distinción entre empresas de redes de transporte y prestadores del servicio particular de autotransporte de pasajeros

Por la manera en la que funcionan las ERT es importante distinguir el servicio de intermediación del servicio de transporte prestado por los socios conductores. Por un lado, se encuentra la operación, administración o promoción de la aplicación informática móvil, que es el medio a través del cual el usuario contacta al conductor prestador del servicio de transporte, da a conocer su ubicación, señala el destino y en algunos casos realiza el pago (habiendo registrado con anterioridad los datos de una tarjeta bancaria). La otra parte se compone propiamente por el servicio del traslado de un punto a otro, en un vehículo particular prestado por el socio conductor.

En este sentido la iniciativa que se presenta regula de forma diferenciada ambos servicios, a efecto de precisar las obligaciones a las que se sujetarán los involucrados en la prestación del mismo. Estos son: a) las personas morales

que operen, administren o promueven por sí mismo o mediante subsidiarias o filiales, plataformas y aplicaciones informáticas para dispositivos fijos o móviles, y b) las personas físicas o morales que presten el servicio particular de autotransporte con conductor hacia y desde los puertos y aeropuertos.

En relación al primero, se considera conveniente que realicen un registro ante la SCT a efecto de obtener un permiso de la misma y, al mismo tiempo, que sean los responsables de llevar a cabo el registro de los vehículos y conductores adscritos a la aplicación informática y quienes brindan el servicio de transporte. Lo anterior busca establecer un trámite de fácil ejecución, mediante una sola vía, y evitar que todos los involucrados tengan que realizar trámites individuales ante la dependencia federal.

La empresa encargada de operar, administrar o promover la aplicación deberá, asimismo, hacer públicas sus tarifas, lo que permitirá al usuario contar con mayor certeza al momento de contratar el servicio.

A la vez, se propone que la Secretaría emita, además del permiso señalado en el párrafo anterior, un número de identificación por cada uno de los vehículos adscritos a las aplicaciones informáticas (sin que por ello se les obligue a la obtención de placas especiales ni portar ningún distintivo o identificación)⁸ y de este modo la dependencia pueda tener un control y un manejo de la información de las unidades, que puede ser útil para distintos fines públicos, que pueden ir desde la elaboración de estadísticas hasta aspectos relacionados con seguridad de los pasajeros.

Respecto del servicio de transporte particular, esta propuesta contempla una serie de restricciones que buscan evitar que se encuentren en una posición de ventaja ante los demás permisionarios que actualmente ofrecen servicios similares o bien otro tipo de servicios con vehículos de características similares.

No se omite mencionar que se ha decidido proponer agregar a la ley los artículos 47 Bis y 47 Ter de la LCPAF con el objetivo de reconocer el servicio de autotransporte particular de pasajeros, contratado a través de aplicaciones informáticas, quede establecida dentro el Capítulo II ("Del autotransporte de Pasajeros") del Título Tercero ("Del autotransporte federal") de la Ley.

4. Reformar la Ley de Aeropuertos para regular la formalización de la relación entre prestadores de servicios y el administrador aeroportuario

La Ley de Aeropuertos, como su reglamento, establece la clasificación de los servicios que se prestan en los aeródromos civiles, así como su regulación, especialmente en materia de tarifas. Como se sabe, los servicios se clasifican en aeroportuarios, complementarios y comerciales. En ambos ordenamientos se enlistan los servicios, de acuerdo a su categoría. Entre ellos se encuentran los estacionamientos para los vehículos de los servicios de transporte terrestre al público, así como el "derecho de acceso" para el servicio de transporte terrestre al público. Estos últimos están señalados en el reglamento.

De lo anterior, vale la pena señalar que el servicio del transporte terrestre al público no está considerado por la legislación ni el reglamento dentro de ninguna de las tres clasificaciones que marca la ley. Por lo tanto, estimo necesaria su regulación, ya que la Ley de Aeropuertos regula los servicios aeroportuarios y el transporte desde y hacia los aeropuertos, legalmente, no forman parte de los mismos. Por lo que requieren una regulación particular.

En este sentido, la presente iniciativa busca reformar, asimismo, la Ley de Aeropuertos con dos fines principales: i) elevar a rango de Ley los servicios de estacionamientos para el transporte terrestre al público (como ya lo señala el reglamento), y ii) adicionar un capítulo XV en el que se regule el servicio del transporte terrestre al público desde aeropuertos y los aspectos de su formalización de su relación con el administrador aeroportuario.

Así, mediante la adición de cuatro artículos que conforman el nuevo capítulo, se establece que:

- i. Los prestadores del servicio de transporte terrestre (incluyendo al contratado mediante aplicaciones móviles) deberán de cumplir con lo señalado en la LCPAF;
- ii. Los sujetos obligados por la LCPAF formalizarán su relación mediante un contrato con el concesionario del aeropuerto;
- iii. La formalización de este contrato no podrá ser condicionado al uso de los estacionamientos destinados para el transporte terrestre al público;

iv. La Secretaría determinará en el reglamento los aspectos que deberá contener el contrato, incluyendo las medidas de seguridad y calidad del servicio;

v. Las condiciones de competencia se determinarán conforme la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;

vi. Se prohíbe el cobro del derecho de acceso a las instalaciones del aeropuerto, para los prestadores de servicio;

Esta serie de medidas tienen el propósito de fijar algunas bases legales que permitan a los prestadores del servicio de transporte contar con mejores condiciones, que den lugar a una mayor competitividad y, en su momento, a mejores tarifas para los usuarios.

No omito señalar que actualmente estas bases legales no existen, lo que ha ocasionado un amplio margen de discrecionalidad en el contenido de los contratos entre los aeropuertos y los prestadores de servicio. Esta situación ha ocasionado que los prestadores del servicio se vean obligados a cubrir diversos montos que no son públicos, que varían de aeropuerto a aeropuerto (e inclusive hay casos en que los cobros no son iguales para las diferentes compañías dentro de un mismo aeropuerto) y que han ocasionado el incremento en las tarifas del servicio.

De acuerdo con datos recabados por el diario El Norte,⁹ la Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA), administrador de 13 aeropuertos internacionales, incluyendo el de Monterrey, solicita que las sociedades de taxis de aeropuertos cubran los siguientes pagos y requisitos:

1. Pago por acceso a zona federal por auto al mes: \$1,900 (más IVA).
2. Seguro de pasajero y cobertura amplia por carro al mes: \$1,388 (más IVA).
3. Comisión por cada boleto emitido: \$19 (más IVA).
4. Verificación de emisiones y de condiciones físico-mecánicas por cada carr, cada seis meses: \$992 (más IVA).
5. Fianza de cumplimiento para acceso a zona federal de 3 meses de depósito por auto: \$5,700 (más IVA). Éste se cubre una sola vez.

6. Fianza de cumplimiento anual por daño local: \$21,000.00, más IVA.

7. Pago mensual de patio de operaciones: \$38,000 más IVA.

8. Seguro contra daño de inmueble: \$11,600 anuales.

9. Rotulación por carro, cada 6 meses: \$950 más IVA.

10. Prueba antidoping mensual por cada operador: \$120.00 (teniendo en cuenta que hay dos operadores por cada vehículo).

11. Licencia federal para cada conductor: \$2,556.00

A lo anterior debe agregarse los refrendos de los permisos y el pago de prestaciones laborales, como lo señala la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, A.C.

Si bien, varias de estas obligaciones se requieren para brindar un servicio de calidad y cubrir obligaciones de ley, otras parecerían duplicarse o por lo menos resulta difícil de comprender el motivo que persiguen. Lo anterior, aunado a la poca transparencia de la información de estos cobros, dificulta la competitividad y el cálculo de inversión para potenciales prestadores de servicios.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Primero. Se reforma la fracción I del artículo 48, y se adiciona el Capítulo XV y los artículos 86 a 89 a la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; es-

tacionamientos para los vehículos de los servicios de transporte terrestre público o particular; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de incendios y rescate, entre otros;

II. ...

III. ...

...

...

...

Capítulo XV

Del servicio de transporte terrestre al público en Aeropuertos

Artículo 86. Los prestadores de servicio de transporte terrestre público desde aeropuertos, y las Empresas de Redes de Transporte y sus socios conductores deberán cumplir con lo establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 87. Los sujetos obligados por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal deberán formalizar un contrato con el concesionario del aeropuerto. La Secretaría establecerá en el reglamento los aspectos que deberá contener el contrato, incluyendo las medidas de seguridad y de calidad del servicio.

Los concesionarios de los aeropuertos no podrán condicionar la firma del contrato a la exigencia de características, especificaciones técnicas y de seguridad de los vehículos que sean mayores a las establecidas por la Secretaría, en la normatividad correspondiente.

Los concesionarios de los aeropuertos no podrán establecer en el contrato la obligación al pago de derecho de acceso a las instalaciones del aeropuerto.

El contrato de prestación de servicio que se señala en este artículo deberá formalizarse en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud que realice el permisionario al concesionario del aeropuerto. De excederse el plazo sin que se haya formalizado el contrato, se entenderá la aceptación del concesionario del aeropuerto.

Artículo 88. Las tarifas correspondientes al servicio de transporte terrestre al público en aeropuertos deberán hacerse del conocimiento de los usuarios. Estas tarifas promoverán condiciones de competencia y de calidad del servicio para el usuario.

Artículo 89. Los prestadores de servicio de transporte terrestre al público que así lo decidan, podrán utilizar los estacionamientos con los que cuente el aeropuerto para los vehículos destinados a este tipo de servicio. Para ello, deberán convenir con el concesionario del aeropuerto los términos, condiciones y contraprestaciones por el uso de los mismos.

El concesionario del aeropuerto no podrá condicionar la formalización del contrato que señala el artículo 87 al uso del estacionamiento o los estacionamientos para los vehículos del servicio de transporte terrestre al público.

Segundo. Se reforman el artículo 36 y los párrafos primero y segundo del artículo 47; se adicionan las fracciones III Bis y X Bis del artículo 2, así como los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a III. ...

III Bis. Empresas de redes de transporte: las personas morales que operen, administren o promuevan, por sí mismo o mediante subsidiarias o filiales, plataformas y aplicaciones informáticas para dispositivos fijos o móviles por las cuales puede contratarse el servicio de autotransporte particular de pasajeros.

IV. a X. ...

X. Bis. Servicio de autotransporte particular de pasajeros contratado a través de aplicaciones informáticas: Aquel servicio no sujeto a rutas, horarios ni frecuencias de paso que, basado en sistemas de posicionamiento global, se contrata a través de una aplicación informática y es prestado por conductores privados en vehículos particulares con capacidad menor a 9 pasajeros.

XI. a XVI. ...

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40, 44 y 47 Ter.

...

...

...

...

...

Artículo 47. Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 47 Bis. Las empresas de redes de transporte de pasajeros deberán:

I. Registrarse ante la Secretaría, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la ley y las disposiciones administrativas correspondientes;

II. Obtener, una vez realizado el registro, un permiso otorgado por la Secretaría, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por ésta;

III. Registrar ante la Secretaría la información de los vehículos y conductores que, contratados mediante las plataformas y aplicaciones presten el servicio de transporte particular. La secretaría emitirá un número de identificación para cada vehículo registrado, y

IV. Hacer públicas las tarifas de servicio de transporte para usuarios, las cuales serán determinadas libremente por cada Empresa de Redes de Transporte.

Artículo 47 Ter. Las personas físicas o morales, que hayan sido registrados ante la Secretaría por una Empresa de Redes de Transporte, que presten el servicio par-

ticular de autotransporte, de acuerdo con el artículo anterior, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley, y a lo siguiente:

I. Únicamente podrán contratar sus servicios mediante las plataformas y aplicaciones informáticas;

II. No requerirán de capacitación, licencia federal para prestar el servicio;

III. Los vehículos en los que se brinde el servicio no requerirán de permiso, verificación técnica, tarjeta de circulación, calcomanía ni placas de servicio federal, emitidos por la Secretaría, siempre y cuando la capacidad del vehículo sea menor a nueve pasajeros, y

IV. Las demás disposiciones expresamente señaladas en el reglamento de la ley y otros ordenamientos que de esta ley se deriven.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de hasta un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, así como al Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a efecto de adecuarlos conforme al presente decreto.

Notas

1 Tan sólo durante el año 2014, se transportaron más de 65 millones de personas a través de los aeropuertos nacionales, cifra que supera ampliamente los 48 millones de pasajeros trasladados durante 2010

2 En algunas ciudades como Monterrey esta laguna legal ha ocasionado problemas entre los conductores de los “taxis en aeropuertos” y los conductores de las empresas de transportes de pasajeros basadas en aplicaciones informáticas, sin que la intervención de las autoridades haya quedado justificada legalmente. Para el caso puede consultarse las siguientes notas periodísticas:

• http://www.milenio.com/negocios/Decomisas_autos_Uber-Aeropuerto_0_668333370.html

•<http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=746011&v=9>

3 Generalmente la legislación local es un poco más flexible en relación a la clasificación del transporte privado. Por citar un par ejemplos, la Ley de Movilidad del Distrito Federal (artículo 9, fracción LXXXV) define al Servicio Privado de Transporte como “La actividad por virtud de la cual, a cual, mediante el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o permanente y que no se ofrece al público en general”; a su vez La Ley para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León lo limita al transporte de carga y lo define de la siguiente manera: “Transporte Privado Corporativo: Es aquél que se realiza cuando una empresa traslada bienes o mercancías de sus empresas filiales o subsidiarias” (Artículo 43, Fracción III).

4 Véase los comentarios que sobre el artículo quinto constitucional realizan Santiago Barajas Monte de Oca y Francisco José de Andrea Sánchez en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1994. Pp. 24-31.

Consultada en internet el 14 de marzo de 2016. <http://info5.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1802>

5 Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 1993. Disponible para su consulta en internet en el sitio de Crónica Parlamentaria de la Cámara de Diputados dentro de las iniciativas presentadas durante el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LV Legislatura

(<http://cronica.diputados.gob.mx/>),

6 El documento puede consultarse en internet mediante el siguiente hipervínculo:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/REQUISITOS/Informacion_de_permisos_2015_DGAF.pdf

7 Cofece, OPN-010-2016. Disponible en internet en:

<http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Opiniones/V13/0/3653400.pdf>

8 En la opinión OPN-008-2015 el pleno de la Comisión Federal de Competencia hace la recomendación de que con la finalidad de “privilegiar la competencia y la libre concurrencia”, se evite la limitación del

número de vehículos “imponiendo requisitos adicionales como placas especiales y/o cromáticas” (página 7 de la opinión).

9 Daniel Reyes, “Nos íbamos a quedar sin trabajo. Taxistas”, El Norte, Local, 24 de enero de 2016. Disponible en internet en: <http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=748980&md5=38dd26e0a6cbb1dd0103b624c69cfc42&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>

28 de marzo de 2017.— Diputados y diputadas: **Alfredo Javier Rodríguez Dávila**, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Adriana Elizarraraz Sandoval, Ángel II Alanís Pedraza, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Brenda Velázquez Valdez, Claudia Sánchez Juárez, Daniel Torres Cantú, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Emilio Enrique Salazar Fariás, Enrique Cambranis Torres, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Herminio Corral Estrada, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Jonadab Martínez García, José Antonio Salas Valencia, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldivar, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Karla Karina Osuna Carranco, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María Bárbara Botello Santibáñez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mercedes Del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Natalia Karina Barón Ortiz, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Pedro Luis Coronado Ayarzagotia, Pero Garza Treviño, Ricardo Del Rivero Martínez, Rocío Matesanz Santamaría, Sara Paola Galico Félix Díaz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rodríguez Dávila. Túrrese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor en la curul de la diputada Claudia Sánchez. Donde esté la diputada Claudia Sánchez, porque no es su curul.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Sí, diputada presidenta, felicitar la iniciativa de mi compañero, que acaba de presentar su iniciativa, Alfredo Rodríguez, y decirle al diputado que me permita suscribirla, ya que hemos visto una y otra vez el descaro que hay en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la gran opacidad, y de los grandes negocios que se hacen en esa Secretaría, y que nada pasa en este país, porque es de los amigos del presidente. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Alfredo Ramírez Dávila, ¿está de acuerdo en que suscriban su iniciativa? No lo veo.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): Sí, adelante.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Da su conformidad. Diputada estaría aquí en Mesa Directiva para que la suscriba, también.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor, en la curul del diputado Salvador Zamora Zamora.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, presidenta. También para felicitar al compañero diputado Alfredo por esta iniciativa, y de la misma forma que mi compañera que me antecedió en el uso de la voz, pedirle al promovente de la iniciativa, me permita suscribir la misma y sumarme a ella. Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha dado su conformidad. Está aquí en Mesa Directiva, diputado Zamora, para que usted la suscriba.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Elías Iñiguez.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Gracias, presidenta, de la misma forma felicitar a mi presidente de la Comisión de Transportes, al diputado Alfredo, felicitarlo, sumarme y decirle que en la comisión, to-

dos los grupos parlamentarios hemos trabajado en esa Comisión de Transportes, y hoy nuestro presidente pone muy en alto esta comisión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Iñiguez.

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Daniel Torres.

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Gracias, en el mismo sentido, además de felicitar a mi compañero Alfredo, solicitarle poder suscribirme a esta iniciativa. Como bien comentaba, absurdo es que cueste en muchos casos más caro el taxi que el boleto de avión. Creo que tenemos que hacer algo, es el momento. Y lo felicito, y me suscribo.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. Está aquí en la Secretaría de esta Mesa Directiva, diputado Torres. Tórnese la iniciativa a la Comisión de Justicia, para Dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. En esta ocasión hago mención de dos iniciativas en un mismo tiempo, y una va dirigida obviamente al tema de alerta de género y adultos mayores.

Son innumerables las veces que se han hablado en esta tribuna de la violencia de género; sin embargo, son de igual manera incontables los casos que, derivados de la impunidad, misoginia, perspectiva de género y el papel responsable del Estado, conllevan a la forma de violencia extrema contra las mujeres que es el feminicidio.

En nuestro marco legal vigente se cuenta con un mecanismo que consiste en acciones gubernamentales de emergencia en un territorio determinado, lo que conocemos como alerta de género. En este tenor se ha puesto en discusión de esta asamblea las formas de solicitarla, la temporalidad en que se deben emitir, pero jamás hemos buscado replantearla.

Es necesario hacer de este un mecanismo más robusto y entendible a la hora de ser aplicable, para que no genere contradicciones entre las autoridades y dé lugar a omisión. Debemos enfatizar en los objetivos de la alerta para que sea efectiva y erradique la violencia en contra de nosotras las mujeres.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio, desde que se decretó la alerta de género en 11 municipios del Estado de México la violencia feminicida no ha cesado o presentado disminuciones que signifiquen una implementación correcta, por el contrario, en esta entidad ha habido incremento considerable. Pero, de igual manera, en otros estados donde se decretó no se han conseguido avances que nos hagan sentirnos seguras y libres de todo tipo de violencia.

Por eso presento esta propuesta para modificar de manera sustancial el mecanismo de alerta de género con el objetivo de ampliar acciones y funciones, así como redefinir que sea declarada no únicamente cuando existen casos de feminicidio, mientras haya agresiones constantes contra las mujeres se pueda emitir esta Alerta de Género.

Debemos entender algo: la Alerta de Género no es un hecho mediático, no es un arma política como han intentado definirla algunos mandatarios estatales o municipales; la violencia contra las mujeres es constante, es cotidiana y debe de atenderse. No podemos encerrarnos en la soberbia, cegarnos por el orgullo político mientras más mujeres pagan con su vida la omisión de las autoridades.

Poco aprendimos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, aún no asimilamos como Estado la manera de actuar de manera contundente para erradicar la violencia contra las mujeres. Espero, y sé que contaré con el apoyo de los diputados y diputadas comprometidas con un país donde la igualdad y la perspectiva de género aporten las condiciones donde las mujeres podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos.

Por otro lado, la agenda legislativa de una servidora tiene un compromiso especial con las personas adultas mayores. Hace una semana, en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se aprobó una iniciativa con propuesta que pretende para que dentro de una Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores se incluya la obligación de las familias y se establezca un precedente para que por ninguna circunstancia un adulto mayor sea abandonado.

La errónea visión de las personas adultas mayores en nuestro contexto social ha generado que no solamente sean excluidas del ámbito laboral o económico, sino también de entornos sociales e inclusive familiares. Debemos de plantear nuevos paradigmas para la protección de las personas adultas mayores. Debemos de iniciar una campaña de acciones por parte del Estado, donde conjugemos los Poderes de la Unión, así como los niveles de gobierno, para revalorizar este sector.

Es decepcionante y muy preocupante ver en total abandono a un adulto mayor. Lo más triste es la resignación. El trabajo de campo que desarrollo en mi distrito me ha demostrado la oportunidad de convivir con muchos de ellos y de platicar y escuchar historias, atender sus carencias y canalizar sus preocupaciones.

Podríamos poner los nombres de todas aquellas personas adultas mayores que han sido víctimas de abandono en la exposición de motivos de esta iniciativa, porque son ellos quienes me han pedido acciones para poder protegerlos. Esta es una de ellas y está pensada de manera coherente, en acorde a los protocolos legales correspondientes.

El abandono de personas en condiciones de vulnerabilidad es un delito. El adulto mayor es una persona al que se le deben respetar sus derechos. No solo eso, se debe generar condiciones para la igualdad, su completa inclusión y que se mejore su calidad de vida.

Sé que contaré con el apoyo de los compañeros diputados y diputadas a hacer una iniciativa tan noble, que toca fibras muy sensibles en nuestra sociedad. Espero que así sea y que no abandonen a quien ve en nosotros una esperanza de cambio, una esperanza para mejorar este país. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La violencia contra las mujeres es desafortunadamente un problema cotidiano en nuestro país, pese a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, los constantes exhortos a las autoridades federales, estatales y municipales de los principales focos de inseguridad para las mujeres, el problema sigue agravándose y se suman cada vez más casos de violencia contra la mujer o lamentablemente en feminicidios.

Pese a que la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia contempla a la alerta de género como un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, este mecanismo resulta acotado por su margen para actuar además de una definición carente que limita o justifica el poco actuar de las autoridades.

De acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, “desde que se decretó la Alerta de Género en once municipios —Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco— la violencia y feminicidios no han cesado.”

Las mismas condiciones se repiten en estados como Morelos y Jalisco donde se ha emitido la alerta de género. No se cuenta con disminución de la violencia contra las mujeres una vez emitida. Por eso es necesario, redefinir la alerta de género y sus procedimientos, para que esto no solo sea un tema mediático, y resulte efectiva para erradicar la violencia contra las mujeres que tanto daña a nuestra nación.

El problema entonces se define como una alerta genero acotada porque dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres Vida Libre de Violencia no se especifica las acciones “de emergencia” para cumplir con el objetivo principal de la alerta.

Argumentación

México es parte de una serie de tratados internacionales que tienen por objeto el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.

La “**Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer**” o mejor conocido como “Convención Belem Do Para”

La cual en el artículo 4 establece que:

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos...”

Y en su artículo 7:

“Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

...

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

...”

Al ratificar esta convención, el Estado mexicano tiene el compromiso de establecer normas necesarias que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres de esta manera, surge la alerta de género como una herramienta para erradicar la violencia de género en un territorio determinado donde se requiere focalizar una atención adecuada y oportuna. De la misma forma, en la CEDAW podemos encontrar las obligaciones del Poder Legislativo:

“I. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

...

- Adoptar medidas adecuadas, legislativas, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.

- Adoptar todas las medidas de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

- Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

...”

Pese a que estos argumentos sirvieron para consolidar la vigente Ley de Acceso a las Mujeres a Un Vida Libre de Violencia, sirven también para modificar aquellos mecanismos que han resultado ineficientes derivado de un poco conocimiento de la ley, a las lagunas que esta presenta y a las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Las modificaciones que se pretenden con este proyecto, buscan la coherencia con el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. De esta manera puede establecer un diseño de coordinación adecuado y eficiente entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

El Comité de la CEDAW recomendó en su 7 y 8 informe de México a:

b) Revisar los mecanismos nacionales existentes para abordar la violencia contra la mujer con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad, a nivel federal, estatal y municipal, proporcionando recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general para prevenir, tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

d) Con urgencia abordar los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de alerta de género.

Por ello, las modificaciones que propone la presente iniciativa, pretenden atajar las recomendaciones hechas por el Comité y a su vez retomar el principio de la alerta de género como un mecanismo de protección por violencia feminicida o por un agravio comparado.

La propuesta que se presenta contempla modificar el artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para quedar en los siguientes términos:

Texto vigente:	Texto propuesto:
Artículo 22: Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.	Artículo 22: Alerta de violencia de género: Es el mecanismo de protección colectivo y de emergencia, que concentra las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, en un territorio determinado.

Como podemos observar, el texto vigente limita a que la alerta de género únicamente enfrente y erradicar la violencia feminicida, cuando en la misma ley en el artículo 24 establece que la alerta se emitirá cuando:

“I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturban la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”

Por estos motivos se requiere una definición amplia, acorde al reglamento de la misma ley y a lo que establece la ley porque la incoherencia suele traducirse e interpretarse de manera contraria a los principios de la ley.

Con la propuesta que se presenta, logramos una definición generalizada traducida a mecanismo para que los tres niveles de gobierno coordinen acciones encaminadas a garantizar los plenos derechos de las mujeres como seguridad e integridad de acuerdo al ámbito de sus competencias.

En el mismo sentido, se pretende reformar los artículos que hacen referencia a la alerta de género para una mayor eficiencia y coherencia legislativa, como es el caso del artículo 23, que pretende quedar en los siguientes términos:

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres **tiene** como objetivo fundamental garantizar la seguridad e **integridad** de las mismas, el cese de **cualquier tipo** de violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. a V. ...

Como se mencionaba anteriormente, la alerta de violencia de género no solo debe de emitir cuando exista violencia feminicida, sino una serie de factores cotidianos que atenten contra la seguridad e integridad de las mujeres. El mecanismo de alerta de violencia género es un mecanismo existente que esta por emitirse, dadas ciertas circunstancias por ello se cambia el tendrá por tiene, se adiciona la palabra integridad y se agrega el término “cualquier tipo de violencia” para que en su interpretación no solo se considere la violencia feminicida.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I, de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada Erika Irazema Briones Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para quedar en los siguientes términos:

Artículo 22. Alerta de violencia de género: **Es el mecanismo de protección colectivo y de emergencia, que concentra las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, en un territorio determinado.**

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres **tiene** como objetivo fundamental garantizar la seguridad e **integridad** de las mismas, el cese de **cualquier tipo de** violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. a V. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: **Erika Irazema Briones Pérez**, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, David Gerson García Calderón, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, José Santiago López, Julio Saldaña Morán, Karen Hurtado Arana, María Luisa Beltrán Reyes, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Erika Briones Pérez.TURNese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Erika Irazema Briones Pérez: «Iniciativa que adiciona el artículo 335 Bis y reforma los artículos 336, 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El modelo económico adoptado por el país ha generado diversas maneras de exclusión, como el caso de las personas adultas mayores, cuya participación se limita en este modelo. Diversos factores contribuyen a que este sector sea considerado un grupo en condiciones de vulnerabilidad por su situación de desventaja al acceso de un desarrollo pleno y una calidad de vida adecuada.

La errónea visión de las personas adultas mayores en nuestro contexto social, ha generado que no solamente sean excluidas del ámbito laboral o económico sino, también, de entornos sociales e incluso familiares.

Esta exclusión ha limitado el desarrollo de las personas adultas mayores, que si bien en su mayoría presentan algún tipo limitación física, la mayoría son creadas e impuestas por la sociedad contemporánea. En conjunto estas limitaciones y la exclusión conllevan al abandono de personas adultas mayores en instituciones públicas o privadas, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro

de atención generando afectaciones severas a su calidad de vida y necesidades psicoemocionales.

El abandono de personas adultas mayores debe considerarse un problema conjunto del Estado y de la sociedad de nuestro país, pese a que no existen datos certeros de adultos mayores en abandono, tenemos la responsabilidad de crear mecanismos legales que generen conciencia sobre estos problemas y que las familias conserven los lazos afectivos reflejando una sociedad de valores como la inclusión, la unión y el respeto.

Actualmente, el Código Penal Federal considera el abandono de personas como un delito, aunque solo hace énfasis a las personas “enfermas”, niños o cónyuge.

El artículo 335 menciona lo siguiente:

Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuera ascendiente o tutor del ofendido.

Las instituciones familiares, sociales y del Estado deben revalorizar el papel de las personas adultas mayores y su importancia dentro de las mismas, por ello se considera necesario que dentro del delito de abandono de personas, se tipifique también el abandono de personas adultas mayores. Con esta medida se pretende erradicar este tipo de violencia, fortalecer los lazos afectivos entre las personas adultas mayores y sus familias, proporcionando entornos adecuados para disminuir sus condiciones que los ponen como un grupo en condiciones de vulnerabilidad.

Argumentación

México experimenta una transición demográfica, este fenómeno poblacional es una tendencia mundial donde se percibe una mayor esperanza de vida, pero una menor natalidad. Actualmente la esperanza de vida en nuestro país es de 75 años, al ser mayor la esperanza de vida se estima que para finales de 2017 habrá aproximadamente 8.7 millones de personas mayores de 65 años.

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2015, de cada 10 mexicanos, 3 son

menores de 15 años (27.6 por ciento) y sólo uno tiene 60 años o más (10 por ciento), sin embargo, para 2050 esta composición se modificará profundamente, pues se prevé que sólo 2 de 10 diez mexicanos tendrán menos de 15 años.

El mismo consejo publicó *La situación demográfica de México 2015*, que aporta datos relevantes acerca del comportamiento poblacional en el país. La publicación incluye el capítulo “Envejecimiento demográfico en México: análisis entre las entidades federativas”, donde la autora, Karla Denisse González, explica las etapas que resulta necesario revisar para comprender el envejecimiento en el país.

Como preámbulo, debemos entender los cimientos de la nación moderna y remitirnos a la lucha armada de 1910, donde el número de habitantes del país se redujo de 15.6 millones a 14.9 millones a 1921.

En la primera etapa, posterior al movimiento armado se registraron tasas de mortalidad en un descenso acelerado, mientras que las de natalidad ascendieron, logrando una población total de 35.6 millones en 1960.

La segunda etapa de esta transición demográfica se sitúa en 1970, el descenso de la fecundidad se acentuó, derivado de las políticas hacia una cultura de planificación familiar. La fuerza de trabajo crece más rápidamente que la población que depende ella (niños y adultos mayores) y, por lo tanto el potencial productivo de la economía es mayor.

En una tercera etapa, los niveles de natalidad y mortalidad convergen y se espera que en los próximos cuarenta años, la natalidad siga descendiendo hasta alcanzar 14 nacimientos por cada mil habitantes en 2050, mientras que la esperanza de vida se incrementará de 75 años a 80 años para 2050 (Conapo, 2012).

El país se encamina hacia una población con mayor número de personas adultas mayores, lo cual sugiere reflexionar acerca de las políticas públicas y los instrumentos a que tiene acceso este sector.

Dada esta problemática, el abandono de personas adultas mayores pudiera convertir en una crisis para los organismos e instituciones encargadas de cuidar de las personas adultas mayores, al multiplicarse la demanda de estos servicios entonces debe de garantizarse mayor apoyo presupuestal a estas y se estaría dejando de lado las relaciones afectivas de las familias, cuando se pretende lo contrario.

La Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores se define a este sector como las “que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional”.

El artículo 5, fracción I, de la misma ley enuncia los derechos de las personas adultas mayores:

I. De la integridad, dignidad y preferencia

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

...

c. A una vida libre sin violencia.

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.

...

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

Esos artículos establecen las bases de la calidad de vida de las personas adultas mayores de manera generalizada, cualquier tipo de violencia en contra de las personas adultas mayores es un agravio directo a sus derechos, mismos que están consolidados en la ley referida.

El abandono como hecho, es un agravio a los incisos citados de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en primero porque es un acto considerado como violencia, es un atentado directo en contra de su integridad física y psicoemocional y es en la mayoría de los casos conlleva a que las personas adultas mayores queden alejadas de entornos seguros, dignos y decorosos, donde se ejerzan libremente sus derechos.

En la misma ley se establecen los deberes del Estado, la sociedad y la familia.

Artículo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, sien-

do responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo; y

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Si se abandona a un adulto mayor, se incumple con el deber expuesto en el artículo 9o. de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya que se cortan los lazos afectivos, no se cumple con la función social de la familia, y no existe convivencia familiar cotidiana.

Por ello, esta iniciativa pretende fortalecer los derechos de las personas adultas mayores, generando una cultura de cuidado y valores, tipificando como delito el abandono de las personas adultas mayores.

Se pretende adicionar el **artículo 335 del Código Penal Federal**, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 335 Bis. Al que abandone a una persona adulta mayor, teniendo obligación de cuidarlos o fueren descendientes en primer grado del ofendido, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno.

En una acción de técnica legislativa, se añade un artículo 335 Bis, para no interferir con lo que establece el artículo 335 y dejar sin efecto o lagunas en su interpretación en el texto que refiere a la patria potestad o tutela para el caso de niños y niñas.

Se establece a quien tenga obligación de cuidarlos y a los descendientes en primer grado del ofendido, es decir los hijos e hijas, para delimitar de mejor manera a favor de los ofendidos.

En el mismo sentido, se pretende agregar al artículo 336 lo siguiente:

Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, **o a personas adultas mayores**, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Se modifica el artículo 337, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la parte agraviada. **El delito de abandono de personas adultas mayores se perseguirá de oficio.** El delito de abandono de hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito, ante el juez de la causa, quien tendrá facultades para designarlo. **Tratándose del delito de abandono de personas adultas mayores se declarará extinguida la acción penal, cuando el procesado otorgue garantía suficiente a juicio del juez para la subsistencia de la persona adulta mayor.** Tratándose del delito de abandono de hijos, se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del Juez para la subsistencia de los hijos.

En ambos artículos, considerando a las personas adultas mayores como personas dependientemente económicas por sus condiciones de vulnerabilidad, deben garantizarse sus necesidades de subsistencia tal como lo enmarca la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por último se pretende modificar el artículo 338, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 338. Para que el perdón concedido por el cónyuge **o persona adulta mayor** ofendido pueda producir la libertad del acusado, deberá éste pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y dar fianza a otra caución de que en lo sucesivo pagará la cantidad que le corresponda.

De acuerdo con el Código Civil Federal y con la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, es deber de la familia de la persona adulta mayor otorgar alimentos, en

congruencia con lo que se expresa en los ordenamientos legales mencionados, se puede otorgar el perdón del ofendido.

Fundamento legal

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I, de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, Érika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 335 Bis y reforma el 337 y 338 del Código Penal Federal

Único. Se **adiciona** el artículo 335 Bis y se **reforman** el 337 y 338 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 335 Bis. Al que abandone a una persona adulta mayor, teniendo obligación de cuidarlos o fueren descendientes en primer grado del ofendido, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno.

Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, **o a personas adultas mayores**, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Artículo 336 Bis. ...

Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la parte agraviada. **El delito de abandono de personas adultas mayores se perseguirá de oficio.** El delito de abandono de hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito, ante el juez de la causa, quien tendrá facultades para designarlo. **Tratándose del delito de abandono de personas adultas mayores se declarará extinguida la acción penal, cuando el procesado otorgue garantía suficiente a juicio del juez para la subsistencia de la persona adulta mayor.** Tratándose del delito de abandono de

hijos, se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del Juez para la subsistencia de los hijos.

Artículo 338. Para que el perdón concedido por el cónyuge o persona adulta mayor ofendido pueda producir la libertad del acusado, deberá éste pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y dar fianza a otra caución de que en lo sucesivo pagará la cantidad que le corresponda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: **Erika Irazema Briones Pérez**, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, David Gerson García Calderón, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, José Santiago López, Julio Saldaña Morán, Karen Hurtado Arana, María Luisa Beltrán Reyes, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Asimismo, esta Presidencia ratifica el turno dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tórnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Eva Cruz.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Gracias, diputada presidenta, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, todas las mujeres aquí presentes nos unimos, ahora sí le pedimos a nuestra compañera Erika, ahora sí nos unimos a su iniciativa, en las dos iniciativas

que presentó, porque son ahora sí iniciativas a las cuales todas las mujeres tenemos ahora sí que unirnos, porque va a adultos mayores y la mujer también, ahora sí para lo de la violencia entre las mujeres. Entonces, nos unimos el PRD, todas, y pedimos a las demás compañeras que nos unamos a estas iniciativas. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: La diputada Briones Pérez da su consentimiento para que se adhieran. Está aquí a su disposición en la Secretaría de esta Mesa Directiva.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada María Luisa Beltrán.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para reafirmar el apoyo a estas iniciativas y, sobre todo, comentar que hay un punto de acuerdo en el que pido la alerta de género para el estado de Colima, una situación muy grave de las mujeres del estado de Colima. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Beltrán.

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del PRI.

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Saludo cordialmente a nuestra compañera diputada presidenta, con la misma atención a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a los medios de comunicación presentes, en cumplimiento de su encomienda.

Una de las actividades económicas más importantes en México es la agricultura, en este sector se genera gran can-

tividad de empleos y se producen alimentos primarios para millones de mexicanos y para la población de otros países del mundo.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, en el 2016 México se colocó como el doceavo productor de alimentos del mundo y el principal productor de productos agrícolas dentro del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ante las expectativas del importante crecimiento de este sector se ha dado un vínculo importante para abrir paso a la agricultura orgánica con una alternativa alimentaria saludable y como una actividad de solución para satisfacer las necesidades de alimentos no solo para nuestro país sino también para el mundo.

Es muy importante reconocer que los sistemas de producción y procesamiento orgánicos permiten la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, tales como el agua, suelo, aire y la biodiversidad, con apego a normas de producción específicas y precisas, cuya finalidad es lograr que ecosistemas agropecuarios óptimos que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.

La producción orgánica también permite a los productores obtener mejores beneficios económicos y menores riesgos en su salud a quien los aplica y los consume.

Ante ello surge la necesidad de dirigir una política pública con la finalidad de revalorar los esfuerzos de los productores de orgánicos y generar condiciones sostenibles que contribuyan a mejorar el medio ambiente.

La agricultura orgánica en México debe ser una oportunidad para su fomento y crecimiento, ya que desde el punto de vista económico se estima que casi el 90 por ciento está orientada a la exportación, siendo los principales destinos los países de la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y el mercado asiático.

Cabe destacar que tan solo el café orgánico de la región del istmo de Oaxaca procesa este grano en 56 comunidades, el cual se exporta a países como Francia, Alemania, Suecia y Austria. O el café orgánico que producen más de 400 campesinos en la Selva Lacandona de Chiapas y que se exporta a Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá.

Esto significa que ha sido una alternativa de crecimiento para los grupos de campesinos indígenas, pero resulta también necesario ir orientado a la población interna del país

para que sea consumidora de alimentos producidos bajo el sistema de producción orgánica.

Resulta alentador destacar que en México, en la agricultura orgánica, se encuentran involucrados 130 mil productores en todo el país, siendo las regiones con más producción de orgánicos los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Veracruz y Puebla.

Para los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resulta de gran interés que en la Ley de Productos Orgánicos se puedan impulsar programas de asistencia técnica y capacitación para la producción de alimentos orgánicos, que contribuyan a reorientar las prácticas agroalimentarias, hacerlas sustentables y, desde luego, apoyar económica y políticamente la producción de alimentos libres de sustancias dañinas al hombre y a los animales. Y contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los sectores más desprotegidos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI

Los que suscriben, diputados Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La agricultura orgánica es una alternativa alimentaria saludable, siendo esta actividad una solución para satisfacer las necesidades de alimentos, no solo para nuestro país, sino también para el mundo; ya que también permite a los

productores obtener mejores beneficios económicos y menores riesgos en su salud por reducir el uso de agroquímicos que ponen en riesgo a corto, mediano y largo plazo la salud de quien los aplica y los consume, además de generar mayores oportunidades sociales y ambientales para la sociedad, por lo cual debería de ser reconsiderado el marco jurídico que regula esta actividad, para dirigir una política pública con la finalidad de revalorar los esfuerzos de los productores de orgánicos y generar condiciones producción sostenible que contribuya a mejorar el medio ambiente.

La importancia de la agricultura orgánica en México radica, desde el punto de vista económico, en que la mayor parte de la producción está orientada a la exportación y ésta ha sido una alternativa para los grupos de campesinos indígenas. La mayor parte de productores relacionados con este tipo de agricultura (53%) son de origen indígena, por ello es importante orientar el consumo interno de productos obtenidos bajo el sistema de producción orgánica en el país.

Ejemplos tenemos muchos en el caso de la producción de productos agropecuarios en sistemas orgánicos, como es el caso del café que siendo el primer cultivo en México bajo este sistema de producción, se tiene que los productores hoy cuentan con mayores oportunidades ante el crecimiento del consumo de este aromático a nivel mundial. De acuerdo con datos de Euromonitor International, empresa de origen europeo, la tendencia de la población global es el consumo de alimentos y bienes de origen orgánico e inocuo por lo que ha señalado que el consumo total y per cápita de café ha aumentado desde el año 2005, y se estima que continuará creciendo hasta el 2015. Así, en el año 2005 el consumo fue de 2 millones de sacos de café verde, en 2010 se ubicó en 2.7 millones y se estimó que en el año 2015 el rubro representará 3.6 millones de sacos. Por otra parte, el consumo per cápita en 2005 y 2010 se ubicó en 1.16 y 1.43 kilogramos, respectivamente, y para el año 2015 el consumo fue de 1.85 kilogramos. Chiapas es el principal productor mundial de café orgánico, 18 millones de toneladas anuales son producidas por más de 60 mil productores, una tercera parte son mujeres indígenas y campesinas que cultivan los cafetos bajo la sombra de árboles nativos, sin usar agroquímicos para evitar contaminar la tierra (Mariscal, 2011).

Son diferentes aspectos de la agricultura orgánica los que la hacen una alternativa promisoría para el desarrollo rural y el alivio de la pobreza. El estudio realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 2003) revisó

las experiencias de diversos productores. El estudio encontró que la adopción de la producción orgánica en la mayoría de los casos logró aumentar los ingresos de los productores. Se encontró que, habría habido efectos positivos sobre la salud de los productores, la vida de los asalariados rurales y el ambiente. Se destaca, al mismo tiempo, que el proceso de transición hacia la agricultura orgánica es un proceso complejo, en el cual son fundamentales el apoyo técnico, la organización de los agricultores, los aspectos relacionados a la comercialización y el control de calidad.

De acuerdo al Consejo Nacional de Producción Orgánica Actualmente la agricultura orgánica en México cubre un poco más de 500,000 hectáreas. La tasa media de crecimiento de esta actividad es del 20% anual en promedio en los últimos 10 años. Entre el 85 y 90% de la producción orgánica nacional es de exportación. Los ingresos en divisas por las exportaciones de productos orgánicos son de alrededor de 400 millones de dólares promedio anual.

En México se estima que existen más de 250,000 productores en este sistema, los principales estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82.8% de la superficie orgánica total. Tan sólo Chiapas y Oaxaca cubren 70% del total. En el país se cultivan más de 45 productos orgánicos, de los cuales el café es el más importante por superficie cultivada, con 66% del total (70,838 ha) y una producción de 47,461 toneladas; en segundo lugar se ubica el maíz azul y blanco, con 4.5% de la superficie (4,670 ha) y una producción de 7,800 toneladas, y en tercer lugar está el ajonjolí, con 4% de la superficie (4,124 ha) y una producción de 2,433 toneladas. A estos cultivos les siguen en importancia las hortalizas, con 3,831 ha; el agave, con 3,047 ha; las hierbas, con 2,510 ha; el mango, con 2,075 ha; la naranja, con 1,849 ha; el frijol, con 1,597 ha; la manzana, con 1,444 ha; la papaya, con 1,171 ha; y el aguacate, con 911 ha. También, aunque en menor proporción, se produce soya, plátano, cacao, vainilla, cacahuate, piña, jamaica, limón, coco, nuez, lichi, garbanzo, maracuyá y durazno. Otros tipos de productos que también se obtienen con prácticas orgánicas son: miel, leche, queso, pan, yogurt, dulces y cosméticos.

Por lo anterior resulta de suma importancia armonizar la Ley de Producción Orgánica y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para establecer la obligatoriedad de implementar el Sistema de Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología, con la finalidad de crear investigación básica para los productores de este sistema que les permita

contar con información aplicable a sus cultivos de origen orgánico.

Si bien la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece algunos programas de extensionismo y de asistencia técnica y capacitación, lo cierto es que necesitamos articular la función de la promoción y desarrollo productivo con el sistema de producción de alimentos orgánicos.

Al impulsar la capacitación y la investigación en agricultura orgánica se tiene que hacer énfasis en sus ventajas, desventajas y riesgos, analizando profundamente los problemas que se presentan durante la transición de la agricultura tradicional a la orgánica. La promoción y capacitación en este tema debe generar la concientización de los productores acerca de los fundamentos de por qué optar por la agricultura orgánica, así como la interiorización de los conceptos de producción y conservación de los recursos ya que el productor debe estar convencido de adoptar el sistema de producción orgánica.

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, en 2007 México fue el segundo país de Latinoamérica con mayor uso de plaguicidas y aunque no existen estadísticas precisas por intoxicaciones o enfermedades por el uso o contaminación causadas por los agroquímicos utilizados en la producción agropecuaria, se tiene conocimiento de sus impactos en la salud humana. En contraparte, los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis y que son controlados en toda la cadena productiva, de tal forma que se garantizan alimentos inocuos para el consumidor y con grandes beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.

Entre lo destacado en el Segundo Foro Nacional “Prospectiva de la Sanidad, Inocuidad, Calidad y Producción Convencional y Orgánica de los Alimentos” el Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Doctor Carlos Alberto Villaseñor Perea, señaló que no existen garantías de la calidad de los alimentos que la mayoría de la población consume ya que con información del Instituto de Nacional de Salud Pública, el consumo de alimentos contaminados afecta a 93% de los mexicanos.

Los sistemas de producción y procesamiento orgánicos permiten la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, tales como agua, suelo, aire, biodiversidad, etcétera. Se basan en normas de producción específicas y pre-

cisas cuya finalidad es lograr agro ecosistemas óptimos, que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.

La agricultura orgánica es un sistema ambientalmente sostenible de producción fácilmente adaptado por miles de productores mexicanos, quienes entre otros factores favorables encuentran: a) Tecnología accesible; b) Mercado internacional y nacional abierto; c) La gran diversidad climática de México permite el desarrollo integral de estos sistemas de producción; d) Cada vez más consumidores conscientes ambientalmente pero también preocupados por su salud; y e) Aplicación de prácticas compatibles en áreas de reserva a zonas protegidas. Así, económicamente se crean y fomentan mano de obra rural ofreciendo una fuente de empleo permanente; se elimina el uso y dependencia de plaguicidas, fertilizantes, funguicidas y otros productos sintéticos cuyos residuos contaminan las cosechas, el suelo y el agua; se favorece la salud de los agricultores, los consumidores y el entorno natural, al eliminar los riesgos asociados con el uso de agroquímicos artificiales; se da importancia preponderante al conocimiento y manejo de los equilibrios naturales encaminados a mantener los cultivos sanos, trabajando con las causas por medio de la prevención y no con los síntomas; se respetan las leyes de la ecología, trabajando con la naturaleza; se protegen el uso de los recursos renovables y se disminuye el uso de los no renovables; se reduce la lixiviación de los elementos minerales e incrementan la materia orgánica en el suelo; trabajan con tecnologías apropiadas aprovechando los recursos locales de manera racional.

La agricultura orgánica se encuentra en franca expansión. México ocupa el tercer lugar mundial por número de productores orgánicos, cultiva una superficie cercana a las 500 mil hectáreas, genera 400 millones de dólares en divisas y 172 mil empleos (estimación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, Chapingo, 2013). Se tienen más de 650 unidades orgánicas de producción (considerando a las organizaciones de productores como una unidad de producción) y la actividad dominante se refiere a la producción agrícola con 91.6% del total de las unidades y 97.2% del total de los productores.

Valoramos que la producción de alimentos orgánicos en México se halla por debajo de 1 por ciento en el sector agrícola, pero va en aumento. En 2007 representó 0.049 por ciento de la cosecha, en 2009 creció a 0.07 y para 2011 alcanzó 0.09 según el INEGI.

La producción orgánica mexicana representó alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola, con cerca de 300 millones de dólares de ganancias anuales, de acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 2012. Predominan pequeños productores organizados (99.6%), participan en forma mayoritaria indígenas (83% de productores orgánicos) y mujeres al frente de la producción (32%).

De la producción de orgánicos de México 85 por ciento se destina a la exportación, siendo los principales destinos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el mercado Asiático, destacando Japón. La comercialización se realiza en función de la ley de la oferta y la demanda de los consumidores, que en este caso son de países terceros, lo que pone en desventaja a los productores.

Se tiene que fomentar el desarrollo de sistemas productivos que procuren contribuir en la recuperación de cuencas hidrológicas, aguas, suelos, ecosistemas y sistemas agropecuarios deteriorados por las prácticas convencionales de producción de alto uso de insumos agropecuarios y reorientarlas a prácticas sustentables y amigables a los ecosistemas; además de fomentar la producción de alimentos libres de sustancias dañinas al hombre y a los animales y contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentarias en sectores más desprotegidos, que participen en el desarrollo de un mercado nacional de consumidores de productos orgánicos, ecológicos, naturales; para ello se requerirá de crear las condiciones para que las certificadoras ofrezcan sus servicios aún menor costo para fomentar que los pequeños productores de este sistema sean cada vez más y se oferten productos orgánicos en el mercado local y nacional a precios más accesibles.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, presentamos a la consideración de esa honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos

Único. Se adiciona una nueva fracción VII al artículo 6, recorriéndose sucesivamente las demás fracciones; se adiciona un nuevo artículo 9 Bis; se reforma y adiciona la fracción II del artículo 38; se reforma y adiciona la fracción II del artículo 39; y se reforma y adiciona la fracción I del artículo 41 de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue:

Artículo 6. Corresponderá a la Secretaría.

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, encargar al Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable las actividades de investigación integral de investigación y fomento productivo que demandan los productores a los que hace referencia este ordenamiento.

VIII. ...

IX. ...

X.

XI. ... :

A.

B.

C.

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

Artículo 9 Bis. Impulsar programas de asistencia técnica y capacitación para la producción de alimentos orgánicos.

Artículo 38. La Secretaría en coordinación con las Entidades Federativas y Municipios en el ámbito de su competencia, promoverá políticas y acciones orientadas a:

I. ...

II. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias mediante el impulso de la producción orgánica y su **comercialización**.

III. ...

Artículo 39. La Secretaría, con opinión del Consejo, promoverá que en actividades agropecuarias se adopte y desarrolle la producción bajo métodos orgánicos para:

I. ...

II. **Incentivar** la recuperación de los sistemas agroecológicos que se encuentren en estado de degradación **o en peligro de ser degradados** por acción de prácticas agropecuarias convencionales;

III. ...

IV. ...

Artículo 41. Para impulsar el desarrollo de los sistemas de producción orgánicos y las capacidades del sector orgánico, el Gobierno Federal promoverá:

I. Programas y apoyos **para la certificación** a los productores que desarrollen prácticas agroambientales bajo métodos orgánicos;

II. ...

III. ...

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de abril de 2017.— Diputados y diputadas: **Juan Manuel Celis Aguirre**, Ana Guadalupe Perea Santos, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Celis Aguirre. Tórnese a

la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con el permiso de la Presidencia. Hoy en día el Congreso detenta más y mejores mecanismos de control de poder. Así puede formular preguntas al Ejecutivo federal al obligar a comparecer a los secretarios de despacho para que informen la situación que guardan sus dependencias, así como hacerles preguntas e interpelaciones.

Uno de los mecanismos de control parlamentario que a nuestra consideración ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, precisamente por su función primordial de fiscalización de la acción general de gobierno, lo constituye sin lugar a dudas la comparecencia de los secretarios de Estado ante los Poderes del Congreso de la Unión.

Esto está previsto en el artículo 93 de la Constitución mexicana, y precisamente este artículo establece que cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que respondan a interpelaciones o preguntas.

No obstante, y de acuerdo a los mismos términos del artículo 93, cuando en las sesiones de la Comisión Permanente surge una situación en la que se requiera la presencia de un secretario o titular de alguna de estas dependencias, esto se ha manejado en la práctica como una invitación a la que pueden acudir o no, o bien, los funcionarios pueden pedir que los legisladores acudan a las oficinas de la dependencia, o inclusive podría no llevarse a cabo ninguna reunión, ya que constitucionalmente no están obligados a acudir a la misma.

Asimismo, al señalar la especificación, cualquiera de las Cámaras, la interpretación que se ha dado, tanto en el Ejecutivo, como en las áreas de proceso parlamentario, es que solamente atenderán la convocatoria en caso de que el Congreso General se encuentre en periodo ordinario de sesiones y no en los recesos. En consecuencia, fuera de los periodos ordinarios, la Comisión Permanente no cuenta con un mecanismo ágil para requerir información a los funcionarios sobre sus acciones de gobierno.

El único mecanismo que se presenta regularmente son los puntos de acuerdo que se turnan a las comisiones, se filtran irregularmente, son asuntos sin ninguna trascendencia, terminan dejándose al final ya sin poder ser dictaminados aquellos que tienen que ver con responsabilidades administrativas, con corrupción o con rendición de cuentas.

Si bien la Comisión Permanente ha evolucionado y los legisladores tienen cada vez más posibilidades de incidir en la política nacional, esto aún no es suficiente. Esta evolución es producto del esfuerzo de los representantes populares para poder ejercer la función que les encomendaron sus votantes. Reconocemos que con estas nuevas herramientas de control parlamentario se moderniza la relación entre Poderes, abriendo la posibilidad de un régimen efectivo de rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.

Sin embargo, en nuestra respetuosa consideración, la fiscalización de la acción general del gobierno no puede ni debe estar sujeta solamente al tiempo en que se analiza el informe presidencial, ni únicamente cuando ambas Cámaras del Congreso de la Unión están en sesión, sino que control y fiscalización de la gestión de las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo, y por supuesto también a la de los órganos constitucionalmente autónomos, debe de ser constante y permanente.

La Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo encargado de continuar las funciones de éste al lado de los otros dos Poderes durante los recesos de las Cámaras del Poder de la Unión. Luego entonces, si la Comisión Permanente reemplaza, continúa y complementa al Congreso, esta continuidad solo se da en las atribuciones que le encomienda la propia Constitución y como podemos advertir en el artículo 93 en ningún momento otorga la facultad a la Comisión Permanente para citar a comparecer a estos funcionarios de primer nivel de la administración federal como a los titulares de los órganos autónomos.

Es por ello que a través de la presente iniciativa busco equiparar a la Comisión Permanente como complemento de la que detentan ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Se le dé una norma clara que le permita citar a comparecer ante su seno a los miembros del gabinete y a los titulares de los órganos autónomos para que informen o respondan preguntas o interpelaciones bajo protesta de decir verdad, cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos y actividades.

La consolidación democrática a los que todos los mexicanos aspiramos no podrá darse sin un Poder Legislativo fuerte y responsable, y este reto que nos demanda la sociedad no puede cumplirse sin que se fortalezca un órgano que ha probado con creces ser gran impulsor de la acción política mexicana, como es la Comisión Permanente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto establecer las bases constitucionales para optimizar la rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la nación.

Se trata de que los representantes de la Nación no estén limitados para citar a comparecer a los funcionarios en cualquier época del año para tratar asuntos relacionados con la gestión administrativa que se les ha conferido el Ejecutivo Federal.

Actualmente los funcionarios de la administración central, de los órganos descentralizados y Entidades, así como los titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, pueden ser citados por cualquiera de las dos cámaras, tal como

lo señala el segundo párrafo del artículo 93 de la Carta Magna de la siguiente manera:

“Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.”

Sin embargo, al señalar la especificación “cualquiera de las cámaras...”, la interpretación que se ha dado, tanto en el Ejecutivo como en las áreas de proceso parlamentario, es que solamente atenderán la convocatoria en caso de que el Congreso General se encuentre en periodo Ordinario de Sesiones y no en los recesos. Dado que las Cámaras no están en funciones plenas, en los recesos se instala la Comisión Permanente conforme lo que establece la Constitución en el artículo 78 que señala:

“Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros...”

Considerando los términos del artículo 93, cuando en las Sesiones de la Comisión Permanente surge una situación en la que se requiera la presencia de un Secretario o titular de alguna dependencia, ésta se ha manejado en la práctica como una “invitación”, a la que pueden acudir o no. O bien, los funcionarios pueden pedir que los legisladores acudan en las oficinas de la dependencia, inclusive podría no llevarse a cabo reunión alguna, ya que constitucionalmente no están obligados a atender los llamados de la Comisión Permanente.

Como ejemplo se puede citar los casos presentados en la Comisión Permanente en el Segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Se formó una comisión especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016 y los Senadores integrantes no pudieron citar a los titulares de las unidades responsables por carecer de facultades constitucionales, de manera que tuvieron que desplazarse a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el secretario del ramo. En una segunda ocasión el secretario

de Gobernación los recibió también en sus oficinas. Lo mismo sucedió con la Comisión Especial para seguimiento de los Procesos Electorales. El Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), solicitó a los legisladores que se trasladaran hasta el Sur de la Ciudad y a media reunión se disculpó porque tenía un viaje previamente programado y dejó a los representantes populares concluir la reunión con personal subalterno del INE.

También sucedió cuando se pretendía citar al secretario de Hacienda para que explicara las causas por las que se incrementó el precio de las gasolinas. Los Legisladores se tuvieron que conformar con la asistencia del Subsecretario.

Los Senadores y Diputados integrantes de la Comisión Permanente agradecieron la atención del secretario de Energía, el director de Pemex y la presencia de la Procuradora Arely Gómez, quienes asistieron, y así se entiende, como una cortesía hacia los representantes populares.

En conclusión y de acuerdo con lo que establece la Ley Suprema, el Congreso General está impedido para obligar a los funcionarios a la rendición de cuentas en los recesos.

En consecuencia, fuera de los periodos ordinarios, la Comisión Permanente no cuenta con un mecanismo ágil para requerir información a los funcionarios sobre las acciones de gobierno. El único mecanismo es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo que se filtran por las Comisiones de Trabajo en donde con frecuencia se procesan con celeridad asuntos triviales y se dejan para el final todos los que tienen que ver con las responsabilidades administrativas, la corrupción y la rendición de cuentas.

Si bien la Comisión Permanente ha evolucionado y los legisladores tienen más posibilidad de incidir en la política nacional, aun no es suficiente. Esta evolución es producto del esfuerzo de los representantes populares para poder ejercer la función conferida por la ciudadanía en las urnas.

La problemática descrita no es nueva. La discusión sobre la necesidad de la presencia de los funcionarios públicos, se dio durante el debate del paquete de artículos previsto para la noche del 15 de enero de 1917, en donde se incluyó el artículo 79.

La discusión versaba sobre las facultades de la Comisión Permanente, entre las que se propuso que era necesario que tuviera la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.

rias en caso de que algún funcionario de alto nivel cometiera un delito grave. El texto propuesto en el dictamen del Constituyente para el artículo 79 fue el siguiente:

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a III...

IV. Convocar a sesiones extraordinarias, en el caso de delitos oficiales o del orden común cometidos por secretarios de Estado o ministros de la Suprema Corte, y delitos oficiales federales, cometidos por los gobernadores de los Estados, siempre que esté ya instruido el proceso por la Comisión del Gran Jurado, en cuyo caso no se tratará ningún negocio del Congreso, ni se prolongarán las sesiones por más tiempo que el indispensable para fallar.

En 1917, la Constitución contemplaba solamente un periodo ordinario de sesiones que abarcaba cuatro meses, del 1º de septiembre al 31 de diciembre. La preocupación y discusión de los Constituyentes era que en caso de que hubiera alguna irregularidad en el desempeño de algún funcionario, en ocasiones habría que esperar meses hasta que iniciara nuevamente el periodo ordinario para hacer comparecer al responsable. Algo muy interesante es que en la discusión no solamente se referían a los funcionarios, sino que algunos legisladores también pretendían incluir al Presidente de la República, una demanda de los partidos opositores que a la fecha no se ha podido subsanar. Morena lo ha planteado, pero existe una fuerte resistencia, a pesar del discurso reiterado de transparencia y rendición de cuentas. En 1917, en la discusión previa del domingo 14 de enero, el Diputado Céspedes señaló:

“... el artículo posterior, el 108 del proyecto de la Constitución, tampoco establece que el presidente de la República sea responsable de la violación a la Constitución. Como al discutirse el artículo 108 es muy posible que al igual que para todos los ciudadanos, para el presidente de la República se exijan las responsabilidades por una contravención a la carta magna, y como en ese caso si esa violación ocurriera estando la Comisión Permanente en funciones, estando el Congreso en receso, resulta que conforme a este artículo no podrá ser juzgado...”ⁱ

La mayoría de los legisladores no consideraban pertinente la posición del legislador porque la figura presidencial era considerada desde entonces prácticamente intocable, no obstante las experiencias que tenía el país desde el último tercio del S. XIX hasta Carranza y a pesar de los antecedentes inmediatos de Victoriano Huerta. Sin embargo, el Diputado Machorro Narváez apoyó la postura del diputado Céspedes argumentando:

¿Qué se hace si el presidente de la República viola la Constitución, si viola los derechos individuales, si comete toda clase de depredaciones? ¿Cuántas violaciones hará a la ley si es un Huerta? ¿Cómo se puede proceder contra ese monstruo? ¿Qué hace el país en este caso? ¿Se está cruzando de brazos, víctima indefensa de vejaciones y ultrajes?ⁱⁱ

Y es que la discusión también era porque el artículo 67 ya establecía que el Congreso tendría sesiones extraordinarias cada vez que las convocara el Presidente de la República, de manera que un grupo importante de legisladores solicitaba que en el artículo 79 quedara establecido que las sesiones extraordinarias también podrían ser convocadas por el Congreso y no de manera exclusiva por el Presidente de la República, en el entendido que cuando se tratara de funcionarios, no se excluyera al Titular del Ejecutivo Federal, con el argumento de que cualquier ciudadano tendría no sólo la posibilidad de denunciar, sino la obligación. Además, era muy probable que si el Congreso solicitaba al Presidente que convocara para cuestionar a sus funcionarios, éste hiciera caso omiso. Y al respecto el Diputado Macías comentó:

“... cualquier persona, cualquier ciudadano, más aún, cualquier habitante de la República, porque el precepto constitucional es bastante amplio, tiene facultad para ocurrir a la Cámara de Diputados a denunciar el delito o la falta cometida por alguno de los altos funcionarios de la Federación. Pues bien, señores diputados; si se le da a la Comisión Permanente la facultad de convocar al Congreso de la Unión tan luego como se presente acusación contra algún alto funcionario de la Federación estad seguros, señores, de que en el seno del Congreso de la Unión no faltarán chuscos que, día a día, estén presentando acusaciones contra los altos funcionarios de la federación. Esto es incuestionable, porque ante la facultad que tiene todo ciudadano mexicano o habitante de la República para acusar a los altos funcionarios federales, está la obligación, no sólo la facultad, sino la obligación

de la Comisión Permanente, de convocar inmediatamente al Congreso de la Unión...”ⁱⁱⁱ

Y más adelante señaló

“...las autoridades están cometiendo toda clase de atrocidades y que, por lo tanto, la barrera de la ley es impotente. ¿Qué resulta de esto? Se puede tratar de dos personajes. Del presidente de la República o de uno de los ministros de su Gabinete. No puedo suponer que se trate de una persona de más alta jerarquía, porque son los ministros los que gozan de más consideraciones que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien; yo pregunto, señores diputados: ¿El presidente de la República se atrevería a mantener en su puesto a un ministro que hubiera cometido un homicidio? ¿Se atrevería el presidente de la República a conservar en su puesto al ministro de Hacienda que se hubiera robado notoriamente los fondos públicos? ¿Se atreverá a cometer alguna de estas cosas?...”^{iv}

Al paso del tiempo, los presidentes de la República nos han demostrado que sí han sido capaces de mantener en el gabinete a personajes siniestros que han dañado severamente las finanzas públicas. Para ilustrar este hecho, podríamos mencionar a Córdoba Montoya y a Juan Camilo Mouriño, sin perder de vista a Martha Sahagún, mujer que ejerció una gran influencia en su marido mientras fue gobernador de Guanajuato y ya siendo presidente de la República contrajeron nupcias.

La redacción del artículo 79 votada por el Congreso Constituyente no se mantuvo en la Carta Magna, porque casi siete años después de promulgada la Constitución, el 23 de noviembre de 1923 el presidente Álvaro Obregón reformó la fracción IV del artículo 79 para suprimir la posibilidad de que se realice la convocatoria por parte de la Comisión Permanente cuando se trate de delitos oficiales o del orden común cometidos por Secretarios de Estado o Ministros de la Corte o en el caso de delitos oficiales federales cometidos por los Gobernadores de los estados. Se establece que la Comisión Permanente podrá acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del congreso o de una sola Cámara.

Esta reforma debilitó sin duda alguna al Congreso, porque no sólo dejaba sin posibilidades a la Comisión Permanente para convocar a comparecer a funcionarios que cometieran irregularidades como anteriormente estaba previsto, sino que se generó una laguna por no haber manera de que un

funcionario rindiera cuentas ante el Congreso en caso de que se diera la comisión de un delito, ni posibilidad de hacer comparecer a un funcionario ante cualquier irregularidad cometida. El artículo reformado quedó de la siguiente manera:

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a III...

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.

Después de la reforma del Presidente Álvaro Obregón, si algún funcionario cometía algún delito o había una irregularidad en su gestión entre el mes de enero y agosto, si no había acuerdo del Congreso o convocatoria del Presidente de la República, el Congreso sólo tenía posibilidad de cuestionarlo hasta septiembre, cuando iniciara el periodo ordinario de sesiones, de acuerdo con lo que establece la Constitución General en el artículo 93 desde 1917.

Posteriormente, este artículo tuvo diez modificaciones, hasta que el 30 de julio de 1999,^v el texto íntegro se pasó en su conjunto para incorporarse al artículo 78 formando un párrafo segundo con ocho fracciones como está actualmente y el artículo 79 se transforma en una nueva sección del capítulo segundo del Título Tercero denominada “De la Fiscalización Superior de la Federación”.

Retomando el artículo 93 Constitucional, originalmente tenía un sólo párrafo en el que señalaba la posibilidad de que cualquiera de las Cámaras podría citar a los funcionarios, tal como se mencionó anteriormente.

“Artículo 93. Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio relativo a su Secretaría.”^{vi}

En 1974 se reforma todo el artículo para obligar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Departamentos Adminis-

trativos a dar cuenta del estado en que se encuentran sus respectivos ramos. También se faculta a las Cámaras para citar no sólo a los titulares de las Dependencias, sino a Secretarios de Departamentos Administrativos, así como a los responsables de los organismos descentralizados federales o titulares de las empresas de participación estatal mayoritaria, de manera que el artículo queda como a continuación se señala.

“Artículo 93. Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado y a los Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los Directores y Administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.^{vii}

Esta reforma implicó que los funcionarios de las Entidades también tuvieran la obligación para acudir a cualquiera de las Cámaras a comparecer, pero la laguna y la falta de atribuciones para que el Congreso pueda citar a los funcionarios quedó sin resolverse.

La siguiente reforma al artículo 93 fue en 1977^{viii} cuando se adiciona un tercer párrafo que faculta a las Cámaras para integrar comisiones que investiguen el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria y en 1994^{ix} se reforma nuevamente para incorporar al Procurador General de la República a la lista de funcionarios susceptibles para ser citados por las Cámaras.

En el 2007,^x derivado de la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se eliminan del texto del artículo 93 las menciones a los Jefes de Departamentos Administrativos.

En el 2008,^{xi} se otorga la facultad constitucional en este mismo artículo para que el Congreso solicite la comparecencia de Secretarios de Estado, Procurador General de la República y a los Directores y Administradores de las Entidades paraestatales, lo cual queda establecido en los párrafos segundo y cuarto.

La última reforma al artículo 93 fue en 2014^{xii} cuando se elimina al procurador General de la República de la relación de autoridades a partir de las reformas en materia de justicia que crean la Fiscalía General de la República cuyas atribuciones y obligaciones quedan establecidas en el artículo 102 de la propia Constitución.

En 1982 se reforma el artículo 108 y se señala sujeto de responsabilidades administrativas a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública y no solamente como responsables de la comisión de delitos o faltas a la constitución a Secretarios, jueces y gobernadores como antes lo disponía la Carta Magna. No obstante la reforma, el artículo 93 se mantuvo las restricciones del texto original y las Cámaras sólo podían citar a los funcionarios para tratar asuntos relacionados con su encargo pero no en los recesos.

Recientemente, el Ejecutivo Federal convocó a un periodo extraordinario durante el segundo receso del Primer año de Ejercicio de esta Legislatura para discutir y aprobar el paquete para crear el Sistema Nacional anticorrupción, mismo que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la Comisión Permanente sigue sin tener facultades para citar a comparecer a funcionarios del gobierno para dar cuentas ante el Poder Legislativo por la gestión del encargo que les ha sido conferido en cualquier momento, lo cual limita al Congreso a ejercer sus facultades para demandar a los funcionarios del Ejecutivo a la rendición de cuentas, aun con las reformas en materia de anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpellaciones o preguntas; **durante los recesos también podrán ser convocados por la Comisión Permanente.**

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917. Sesión del 14 de enero de 1917; vol. II Pág. 278; intervención del Diputado Céspedes.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

ii Ibídem; Vol. II pag. 280 intervención del diputado Machorro Narváez)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

iii Ibídem; Vol. II pag. 334 intervención del diputado Macías http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

iv Ibídem; Vol. II pag. 335 continúa la intervención del diputado Macías)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

v http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4951985&fecha=30/07/1999

vi Texto Constitucional original de 1917.

vii Diario Oficial de la Federación, Jueves 31 de enero de 1974, Pág. 2

viii Diario Oficial de la Federación, martes 6 de diciembre de 1977, Pág. 2

ix Diario Oficial de la Federación, sábado 31 de diciembre de 1994, Pág. 3

x Diario Oficial de la Federación, Jueves 2 de agosto de 2007, Pág. 2

xi Diario Oficial de la Federación, Viernes 15 de agosto de 2008, Pág. 2

xii Diario Oficial de la Federación, Lunes 10 de febrero de 2014, Pág. 2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.— Diputado **Jesús Emiliano Álvarez López**, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Norma Xochitl Hernández Colín, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez López. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido por favor en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidenta, para solicitarle al diputado Emiliano si nos podemos suscribir a su iniciativa.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul). Con mucho gusto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Hay disposición del diputado Emiliano Álvarez. Está aquí en Mesa Directiva para su suscripción la iniciativa.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía

Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de contratación de migrantes repatriados.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Hoy en día, enfrentamos una situación crítica en relación a nuestros connacionales debido a las políticas antiinmigrantes propuestas por el presidente Donald Trump en contra de los migrantes que se ven en la necesidad de dejar su cultura, su nación, su hogar, pero principalmente la familia, siendo este el lazo más fuerte y el más difícil de abandonar para poder lograr el tan anhelado sueño americano que quieren alcanzar miles de migrantes que obtienen una estabilidad económica y un futuro más prometedor.

La idea de Donald Trump de construir un muro entre México y Estados Unidos es intolerante. Desde su ascenso al poder el flujo de migrantes se ha registrado con la tasa más baja en 15 años. El saldo migratorio presentó una cifra negativa récord de 140 mil salidas más que entradas.

En el año pasado se atendió la repatriación de 219 mil 932 connacionales, según cifras de la Secretaría de Gobernación. Este año se espera que exista una deportación masiva, siendo que el presidente de los Estados Unidos ha sido muy severo en las órdenes ejecutivas que ha emitido día con día, poniendo en riesgo a más de 11 millones de indocumentados que quedarán desprotegidos y a su vez perjudicarán a las familias dependientes de ellos económicamente.

Debemos de ser conscientes de los problemas que enfrentan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Nuestras comunidades y familias se han visto beneficiadas por años con el envío de las remesas para el sustento de sus familias.

En los últimos años las remesas son consideradas como de las fuentes principales del país, el cual significa un ingreso superior a la venta del petróleo, lo que fue un gran alivio para nuestra economía.

Hoy desafortunadamente este flujo está en riesgo, pero lo más alarmante es el futuro incierto que tendrán todas aquellas familias que dependen netamente del ingreso de las remesas, y por si fuera poco, las consecuencias a las que están expuestos nuestros connacionales deportados.

Por ello el gobierno federal deberá garantizar con recursos públicos como privados, fortalecer la atención a todos aquellos que serán repatriados por las autoridades norteamericanas, y así compartir esta lucha que nos perjudica como nación, contando con la oportunidad de brindar un trabajo, estabilidad y desarrollo para nuestros connacionales.

Sin embargo es necesario, además de que se ejecuten políticas públicas relacionadas a atender a todos aquellos migrantes mexicanos, es necesario promover la contratación de este grupo vulnerable por parte de las empresas, ya que al llegar a su hogar tendrán dificultades de poder encontrar un lugar donde poder trabajar, además de que en su mayoría no tendrán el poder de acreditar su experiencia laboral, pero si cuentan con una forma de trabajar distinta a los sistemas de nuestra nación, siendo esta una gran oportunidad para que puedan aplicar sus conocimientos adquiridos que beneficiarán a las empresas para incrementar el índice de su industria y economía, desarrollando una mayor fuerza laboral.

Ante esta alarmante situación, lo que hoy propongo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, es adicionar un párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la creación de un estímulo fiscal que beneficie a todas aquellas empresas que contraten a migrantes repatriados, consistente en el equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado, considerando la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del trabajador de que se trate, beneficiando tanto al patrón como al trabajador.

Por lo tanto, la materia de esta iniciativa es encaminada a incentivar la contratación de todos aquellos deportados mexicanos que cuenten con la experiencia para que puedan trabajar en territorio mexicano, además de poder proteger a miles de familias que dependen económicamente de ellos, que con su esfuerzo y sueño de obtener una vida mejor, se cumpla. Así logrando también el beneficio de las pequeñas, medianas y grandes empresas que forman parte de la economía de nuestro país.

En nuestra oportunidad de hacer lo correcto, es también de que en México se creen condiciones para que nuestros con-

nacionales tengan un trabajo seguro y así fomentar una estabilidad para que puedan contar con un sustento para ellos y sus familias.

Su servidora es de un municipio, de Cuquío, cuya región se ha beneficiado de las remesas que mandan nuestros connacionales, así como en muchos otros municipios del distrito I, al que pertenezco.

Preocupada por nuestras familias y el futuro de nuestros connacionales, en Movimiento Ciudadano proponemos esta iniciativa para proteger la calidad de vida de todos ellos, cuestiones como ésta es hacer lo correcto. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante la amenaza y hostigamiento que sufren nuestros connacionales en el país vecino Estados Unidos, todo esto a raíz de la política migratoria que presentó el Presidente electo Trump, es necesario consolidar estrategias para afrontar los efectos de deportaciones masivas, pero sobre todo necesitamos enviar un sólido mensaje de apoyo a todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos.

Es importante que nuestro país realice un esfuerzo que garantice contar con la mayor cantidad de recursos ya sean públicos como privados en la atención de nuestros migrantes repatriados, la iniciativa privada es el motor de desarrollo que puede fortalecer esta lucha por garantizar un trabajo, estabilidad y desarrollo para nuestros connacionales, pero debemos ayudar e incentivar a la iniciativa privada a que contraten a estos migrantes.

En el año 2016 se atendió la repatriación de 219,932 connacionales según cifras de la Secretaría de Gobernación, este año se espera que con las políticas migratorias en Estados Unidos, se tenga una deportación masiva, el presidente de los Estados Unidos ha emitido órdenes ejecutivas y dictado políticas migratorias que ponen en riesgo a 11.3 millones de indocumentados que podrían ser deportados en los próximos 18 meses si cumple sus promesas.¹

Resultado de las nuevas políticas migratorias, con la modificación y ampliación de las categorías por las que un indocumentado pueda ser deportado, nos pone de manifiesto que la intención es real, que su operación ya se ha puesto en marcha, es por ello que no se puede seguir suponiendo que esto no ocurrirá, debemos ser conscientes de nuestro entorno geopolítico y actuar en consecuencia.

Otra de las nuevas políticas implementadas en los Estados Unidos, es otorgar a sus agentes federales mayor capacidad para actuar contra los migrantes indocumentados, se extiende la deportación de inmigrantes que lleven hasta dos años en su país, y se restringe la puesta en libertad condicional de los indocumentados, todo esto nos manifiesta que sus intenciones son reales, que no son solo demagogias electorales, que su intención es la deportación masiva de mexicanos a los que en reiteradas ocasiones a denotado, además decidieron contratar a 15 mil nuevos agentes de migración para llevar acabo sus políticas.

Debemos ser conscientes de los problemas que enfrentan nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestras comunidades y familias se han visto beneficiadas por años con el envío de las remesas que ellos han mandado para el sustento de sus familias, en los últimos años este envío de remesas significó un ingreso superior a la venta de petróleo, lo que fue un gran alivio para la economía, hoy este flujo está en riesgo, pero lo verdaderamente grave es que van hacer nuestras familias sin el ingreso de remesas y por si fuera poco que van hacer los deportados.²

Es necesario incentivar su contratación, ya que van a llegar de una manera muy vulnerable, desarraigados, sin conocimiento de su entorno, sin poder acreditar experiencia laboral y con otra manera de trabajar distinta a los sistemas de nuestro país, aunque se vea sombrío el panorama debemos aprovechar el talento de nuestros connacionales, esto puede ayudar a catapultar nuestra industria, ya que su experiencia y talento deben de ser aprovechados al máximo, porque fueron adquiridos en los Estados Unidos y ellos pagaron el costo para capacitar a esa fuerza laboral.³

Nuestra política pública debe de ser encaminada a brindar que nuestros connacionales puedan insertarse a los medios de producción nacional y con ello cuenten con un trabajo que logre satisfacer las necesidades de su familia, estas acciones deben ser expuestas en un corto plazo, ya que no podemos por ningún motivo esperar a que suceda la deportación masiva para poder atender la urgencia, por ello debemos estar preparados.

El poder incentivar a los patrones a que contraten a nuestros migrantes deportados es proteger a miles de familias que dependen de ellos, que su esfuerzo y sueño de obtener una vida mejor migrando a los Estados Unidos se cumpla, es nuestra oportunidad de hacer lo correcto, es tiempo de que en México se creen las condiciones para que nuestros connacionales tengan un trabajo seguro y puedan ofrecer el sustento a sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el texto al Capítulo II y se adiciona un párrafo al Artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se modifica el texto al Capítulo II y se adiciona un párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Capítulo II

De los Patrones que Contraten a
Personas que Padezcan Discapacidad, Adultos
Mayores y Migrantes Repatriados

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adulto mayor, consiste en el equivalente al 25 % del salario efectiva-

mente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

A quienes contraten Migrantes Repatriados se les otorgará un estímulo fiscal, consistente en el equivalente al 20 % del salario efectivamente pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Repatriación de Mexicanos 2017, página oficial, www.gobernacion.gob.mx

2 Banxico enero 2017, reporto que, en el primer mes del 2017, ingresaron la cantidad de \$2,055.2 millones de dólares por concepto de remesas al país.

3 Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Ciudad de México, 3 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de 2017.— Diputada y diputado: **María Victoria Mercado Sánchez**, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada María Victoria Mercado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes, les saludo con respeto.

La maternidad simboliza uno de los eventos más importantes de nuestra sociedad debido a que forma parte del ciclo de la vida de los seres humanos, y por ello ha cobrado especial importancia el que en esta etapa sea esencial contar con los cuidados, atención y protección que deberían recibir todas las mujeres durante el conocido ciclo de gestación y lactancia, haciendo aún más énfasis si dicha persona desempeña alguna labor económicamente remunerada, considerando el actual alto porcentaje de mujeres que desempeñan una actividad económica en nuestro país.

Nuestra Carta Magna establece que las mujeres trabajadoras tienen derecho a licencias de maternidad, prestaciones sociales y recesos para la lactancia, señalando también la protección a la maternidad, lo que implica que el Estado debe aportar las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el desarrollo de su embarazo, garantizando sus derechos como seres humanos al crear condiciones adecuadas y libres de discriminación.

En función de ello, la iniciativa que pongo a su consideración está orientada a fortalecer el ejercicio de tales garantías en la Ley Federal del Trabajo. Debemos considerar que el periodo de gestación es un tiempo durante el cual pueden producirse alteraciones y dificultades que obligan a la mujer a seguir un control médico riguroso o aguardar reposo absoluto.

Las y los legisladores de Nueva Alianza, conscientes de esta problemática y coherentes con las necesidades sociales del país, consideramos que tanto el embarazo como la maternidad son periodos durante los cuales la salud de las mujeres es especialmente vulnerable.

Y, teniendo como propósito fundamental la protección de dichos periodos, creemos necesario modificar la ley antes citada para estipular que las madres trabajadoras tendrán,

entre otros beneficios, el derecho a que a solicitud expresa, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, en ambos casos tomando en cuenta el riesgo que pueda sufrir la madre trabajadora durante el periodo gestacional y en el postparto, así como el riesgo que pueda tener el producto de la concepción, además de considerar la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, transfiera hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo.

Con la certeza de que acompañarán este esfuerzo legislativo, agradezco su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II de artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La maternidad simboliza uno de los eventos más importantes en la sociedad debido a que forma parte del ciclo de vida de los seres humanos y, por ello, ha cobrado especial importancia el que en esta etapa sea esencial contar con los cuidados, atención y protección que deberían recibir todas las mujeres durante el conocido ciclo de gestación y lactancia, haciendo aún más énfasis si dicha persona desempeña alguna labor económicamente remunerada, considerando el alto porcentaje de mujeres que desempeñan una actividad económica, pues según datos del Inegi, en los últimos años, el 43.8 por ciento de las personas ocupadas registradas en la economía nacional fueron mujeres y, si lo desagregamos, encontraremos datos muy interesantes (datos para el 2014):

- a) Las mujeres conformaron el 11.0 por ciento del total de personal ocupado en el Sector Construcción.

b) Del total del personal ocupado en las Industrias Manufactureras, las mujeres participaron con el 34.5 por ciento.

c) En el Sector Comercio al por menor, la fuerza laboral femenina aportó el 51.3 por ciento del personal ocupado total.

d) En el comercio al por mayor, la participación de la mujer alcanza una de cada cuatro personas empleadas.

e) Las mujeres participaron con el 47.9 por ciento del personal ocupado total en los Servicios Privados no Financieros, tales como restaurantes, hoteles, contabilidad y auditoría, escuelas del sector privado, servicios legales y médicos, entre otros. Esto representa casi la mitad del total del personal ocupado en estos sectores.

f) Participaron con el 13.0 por ciento del total del personal ocupado en los diferentes modos de transporte.

g) El valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidados fue el equivalente al 18.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

h) Por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado realizadas por las mujeres, los hombres realizan 8.3 horas.ⁱ

Nuestra Carta Magna establece que las mujeres trabajadoras tienen derecho a licencias de maternidad, prestaciones sociales y recesos para la lactancia, señalado también la protección a la maternidad, lo que implica que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el desarrollo de su embarazo, garantizando sus derechos como ser humano al crear condiciones adecuadas y libres de discriminación.

La protección de la maternidad es derecho fundamental de las mujeres y se debe garantizar y respetar, tomando como base lo dispuesto en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, en donde se establece que todas las personas tienen “derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, lo que implica que el Estado también debe garantizar la protección de la maternidad a las mujeres que deciden tener hijos en condiciones de libertad, responsabilidad y con la información suficiente.

Es por ello que el Estado mexicano debe garantizar en primera instancia que tanto a la madre, como al producto de la concepción, les sean respetadas sus garantías. En función de ello esta acción legislativa está orientada a fortalecer el ejercicio de tales garantías en el instrumento normativo de nuestra legislación nacional que protege, en el caso de las madres trabajadoras, la salud de las mujeres empleadas, antes y después del parto, atentos a lo dispuesto en el propio texto constitucional, a través del ejercicio de derechos muy concretos para el periodo de gestación y para el posparto, así como para el cuidado del neonato.

Exposición de Motivos

Proteger la maternidad de las trabajadoras es esencial en la salvaguarda de los derechos de la mujer, así como para que pueda combinar satisfactoriamente sus funciones procreadoras y productivas, sin estar expuestas a cualquier tipo de discriminación en el trabajo que sea motivada por su papel de madre, sea plenamente realizado o potencial.

La protección de la maternidad de las trabajadoras contribuye a la salud y el bienestar de las madres y de sus bebés y, por tanto, al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5, cuyo fin es reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. La protección de la maternidad también es esencial para asegurar el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades y de trato en el lugar de trabajo, así como a una acertada estrategia para avanzar hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 3, consistente en promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.ⁱⁱ

Desafortunadamente siguen presentándose condiciones adversas para las madres trabajadoras que deben superarse, tales como el tiempo para la lactancia, la conservación de sus empleos, el recibir cuidados maternos, el desequilibrio en el reparto de las tareas reproductivas, la mayor responsabilidad en los cuidados de la familia y las tareas del hogar, entre otros factores más que, en su conjunto, dificultan la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

La estadística sugiere que a partir de los tres hijos, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo presenta una tendencia descendente; así, se observa que la tasa de participación económica de las que tienen de 1 a 2 hijos, ubicada en el 50.3 por ciento, se encuentra por arriba de la media de la tasa para todas las mujeres (43.1 por ciento), mientras que, cuando el número de hijos se ubica entre 3 y

5, la tasa disminuye a niveles inferiores al promedio, llegando a un 41.9 por ciento y, si tienen 6 o más hijos, la tasa se contrae hasta en un 23 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también señala que los recién nacidos que pesan menos de los 2,500 gramos tienden a presentar mayores complicaciones en su crecimiento y desarrollo, y se les considera pacientes de alto riesgo, por lo que requieren servicios especializados de salud.

El peso del recién nacido está correlacionado con las condiciones físicas de su madre, entre las que se encuentran principalmente la desnutrición de la madre en su infancia y adolescencia, la mala alimentación durante el embarazo, su estatura (por debajo de 1.5 metros), peso (por debajo de 50 Kg.) y si el embarazo ocurre en una edad temprana.

Tales indicadores tienen una amplia correlación en el país, pues hasta el año 2013, en promedio, 8 de cada 100 niños nacidos vivos pesaban menos de los 2,500 gramos al nacer.

Las entidades federativas que presentaron la mayor incidencia de recién nacidos con bajo peso son la actual Ciudad de México (12.7 por ciento), el Estado de México (10.7 por ciento) y Morelos (9.9 por ciento). Por otro lado, Baja California Sur (4.9 por ciento), Coahuila (5.3 por ciento), Sinaloa (5.4 por ciento) y Sonora (5.5 por ciento) registraron las menores proporciones de nacidos vivos con bajo peso.ⁱⁱⁱ

A nivel de las Políticas Públicas se ha insertado un mayor empoderamiento de la mujer en la vida nacional. Prueba de ello es el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, que buscan lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres -como objetivo del Gobierno mexicano-.

En los últimos años se han impulsado significativos avances para mejorar las condiciones sociales de las mujeres; ejemplos claros son su mayor participación en actividades económicas fuera del hogar, mayores niveles de escolaridad, diferentes roles reproductivos, la disminución en la tasa de fecundidad, el reconocimiento de nuevas formas de organizar la familia, entre otros, los cuales han llevado a importantes cambios de la sociedad en general.

La constitución de una familia es un objetivo muypreciado por muchos trabajadores. Sin embargo, el embarazo y la

maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las trabajadoras y sus familias, dado que las embarazadas y las madres en período de lactancia requieren de una especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, y necesitan de un tiempo adecuado para dar a luz, para su recuperación y para la lactancia. Al mismo tiempo, requieren de la protección adicional que les garantice que no van a perder sus empleos, por el solo hecho del embarazo o de la baja por maternidad.

Esa protección no solo garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo, sino que también les garantiza el mantenimiento de unos ingresos que a menudo son vitales para el bienestar de toda su familia. La garantía de la salud de las trabajadoras embarazadas, y de las madres en período de lactancia, así como la protección contra la discriminación en el trabajo, son condiciones requeridas para alcanzar una genuina igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el espacio laboral, y para permitir que los trabajadores constituyan familias en condiciones de seguridad.^{iv}

Aunado a ello, la salud materno infantil es primordial para el desarrollo de un país, en tanto que constituye la base de la reproducción biológica y social de su futuro; asimismo, las políticas de salud pública orientadas al mejoramiento de su atención, resultan fundamentales en la reducción de las desigualdades y la pobreza.

Actualmente, en nuestro país la maternidad constituye un derecho esencial para las mujeres, por lo que dicho derecho debe ser respetado por el Estado mexicano, garantizando el pleno ejercicio de éste y de todos y cada uno de los derechos humanos de la población. Tal derecho se encuentra incluso consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las mujeres trabajadoras tendrán derecho a la licencia de maternidad (artículo 123, apartado B, fracción XI), cubriéndoles, por parte de la seguridad social, entre otros, los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte (inciso a) del mismo ordenamiento).

Asimismo, se establece que las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso, antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que

hubieren adquirido por la relación de trabajo (inciso c) del mismo articulado y fracción).

Asimismo, en el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 4o. Constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. Un derecho que, en su concepción internacional, va dirigido al “grado máximo de salud que se pueda lograr”, lo cual exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos, la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Así, el goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 se estipula que *“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”* y que *“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”*.^V

De esta disposición podemos determinar que para la consecución de su objeto es necesario que la persona tenga un trabajo que garantice a su familia un nivel de vida adecuado en los términos establecido en el precepto citado, así como también a los cuidados y asistencia especial a la maternidad y a la infancia.

Por otra parte, en el artículo 3o. de la Ley General de Salud se establece que en los términos de esa Ley, es materia de salubridad general la atención materno-infantil (fracción IV) y, en su artículo 27, refiere que el derecho a la protección de la salud y la atención materno-infantil es considerada como un servicio básico que se debe prestar.

Finalmente, dentro de la Ley en comento se encuentra un capitulado completo para entender qué es lo que comprende la atención materno-infantil. Además, se hace referencia a diferentes contenidos de la Ley Federal del Trabajo, cuyo Título Quinto estipula el derecho un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, entre otros derechos asociados a la maternidad.

Para efectos de esta acción legislativa, debemos considerar que el periodo de gestación es un tiempo durante el cual pueden producirse alteraciones y dificultades que obligan a la mujer a seguir un control médico riguroso y, en su caso, a guardar reposo absoluto durante todo el tiempo necesario y/o todo el embarazo. Además, justamente en ese periodo es cuando el recién nacido necesita de la atención especializada por parte de su madre, tanto para darle una alimentación adecuada, como para su cuidado y protección personal.

En México, a base de esfuerzo y dedicación, las mujeres han tenido que ganarse sus derechos, esto por las tradiciones históricas tan arraigadas y el retraso cultural del país dentro la sociedad mundial, en relación con el papel que juegan las mujeres dentro de la sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMA) entre las libertades que los individuos deben ejercer se incluyen el derecho de controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos), sin injerencias (por ejemplo, torturas y tratamientos y experimentos médicos no consensuados) y que los derechos incluyen el acceso a un sistema de protección de la salud, que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.

En tal sentido, las políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario, respecto de la salud de cada persona.^{VI}

Es por ello que debemos tener presente que la lactancia materna es de suma importancia para la vida de la madre y del bebé. La lactancia natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres.

El examen de los datos científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Posteriormente, deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más.

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan:

- Que la lactancia se inicie en la primera hora de vida;
- Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua;
- Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto de día como de noche;
- Que no se utilicen biberones, ni chupones.

Es ampliamente reconocido que la leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la energía y los nutrientes que el infante necesita en sus primeros meses de vida y sigue cubriendo la mitad o más de sus necesidades nutricionales durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio, durante el segundo año.

Además, la leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas; asimismo, reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía y ayuda a una recuperación más rápida cuando el menor enferma, sin olvidar que es la forma más antigua y eficaz de tener segura la salud y supervivencia del bebe. Esto, junto con una alimentación complementaria, puede prevenir la malnutrición y salvar la vida de cerca de un millón de niños.

Para la madre, lactar contribuye a mejorar su salud y bienestar. Ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, aumenta los recursos familiares y nacionales, es una forma de alimentación segura, y carece de riesgos para el medio ambiente.^{vii}

Ante tantos beneficios fisiológicos y sociales, no es de extrañar que la OMS se mantenga promoviendo la lactancia maternal como la mejor forma de nutrición para lactantes y

niños pequeños, tomando como base, las cifras y pruebas asociados a esta práctica.

Atentos a lo antes expuesto, con la incapacidad por maternidad, las mujeres embarazadas deben estar en su derecho de gestionar libremente sus semanas de ausencia laboral y así, poder transferir hasta 4 de éstas del periodo prenatal al posparto, a fin de pasar alrededor de 70 días con sus bebés. Lo anterior, en apego a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, que en la fracción II del artículo 170, dice:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.^{viii}

Con el propósito de que las mujeres trabajadoras y embarazadas puedan ejercer su derecho a transferir al posparto las semanas de incapacidad anteriores al parto, sin ningún tipo de menoscabo, el periodo de descanso constará de 84 días o 12 semanas y la única variante, consistirá en disminuir el preparto para aumentar el posparto; esto permite que las madres puedan estar más tiempo con sus hijos, fortalece los vínculos, lactancia materna y cuidado posnatal. También ayudará a que pueda convivir más días con su bebé, antes de volver a sus actividades cotidianas, ayudando así al restablecimiento físico y mental de la madre y a una mejor calidad emocional del recién nacido, ya que se sabe que este contacto inicial con el menor proporciona la protección inicial que requieren los infantes, tanto nutricional como afectiva, lo que garantiza el sano desarrollo de la infancia.

Cabe mencionar que el pasado 22 de julio del 2016, el Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel

Arriola Peñalosa, enfatizó que la licencia médica no tiene que ser acordado con el patrón, puesto que es un derecho de las mujeres, ya que es el mismo número de semanas de incapacidad que están administrados de diferente manera. Asimismo, indicó que el nuevo esquema de incapacidad por maternidad tiene impactos en la salud, ya que mediante la lactancia materna, se reduce el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso en un 13 por ciento, mientras que disminuye el riesgo en 35 por ciento de desarrollar diabetes.^{ix}

Derivado de lo antes expuesto, resulta evidente que la mujer en periodo de gestación puede transferir algunas semanas de incapacidad y sólo se le podrá negar tal recurso a la interesada, cuando su médico tratante, en la exploración o revisión clínica que le efectúe, encuentre signos de alerta que impida el cambio de las semanas solicitadas. De lo contrario, si las condiciones le son favorables, éstas pueden ejercer libremente su derecho y, de esta manera, disfrutar más su maternidad, aunado a que se garantiza la protección de la salud, el derecho a la lactancia materna y el interés superior de la infancia.

Las y los legisladores de Nueva Alianza, conscientes de esta problemática y coherentes con las necesidades sociales del país, consideramos que tanto el embarazo como la maternidad son periodos durante los cuales la salud de las mujeres es especialmente vulnerable y, teniendo como propósito fundamental la protección de dichos periodos, creemos necesario modificar la Ley Federal del Trabajo en el sentido como se expone en el siguiente decreto:

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I.

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, **en ambos casos, tomando en cuenta el riesgo que pueda sufrir la madre trabajadora durante el periodo gestacional y en el posparto; así como el riesgo que pueda tener el producto de la concepción, además de considerar** la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)”. Datos económicos nacionales

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf

ii Organización Internacional de Trabajo, OIT.

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_142159/lang-es/index.htm

iii Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. Mujeres y Hombres en México 2015.

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825075019.pdf

iv Organización Internacional del Trabajo. Promover el empleo, proteger a las personas, Protección de la Maternidad.

<http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection/lang—es/index.htm>

v Declaración Universal de los Derechos Humanos.

http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml

vi Organización Mundial de la Salud, OMS. Salud y derechos humanos, El derecho a la salud abarca libertades y derechos. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/>

vii Organización Mundial de la Salud, OMS. Nutrición, Lactancia Materna. http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/

viii Ley Federal del Trabajo. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

ix Embarazadas podrán ajustar incapacidad: IMSS.

<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/07/22/embarazadas-podran-ajustar-incapacidad-imss>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de marzo de 2017.— Diputada **Angélica Reyes Ávila** (rúbrica).»

**Presidencia de la diputada
Gloria Himelda Félix Niebla**

**La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:
Gracias, diputada Reyes Ávila. Se turna a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.**